

①

Z 38

B26

Final

III

Sanhaco del Estero

22222

LA CONVENCION REFORMADORA DE LA CONSTITUCION
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.

✓ 5

PREAMBULO:

Nosotros, los representantes del pueblo de Santiago del Estero, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de reformar la Constitución de la Provincia a fin de adecuarla a las necesidades actuales, organizar el Estado sobre la base de la participación popular y la justicia social, promover el bien común, afianzar la democracia social como estilo de vida, asegurar la paz, la justicia y la educación, instituir las normas de defensa del patrimonio público, acrecentar la solidaridad entre los hombres y el respeto por las tradiciones provinciales, establecer un federalismo de concertación regional con las provincias hermanas, consolidar la autonomía municipal y reorganizar los poderes del gobierno para hacer más eficiente su acción, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos y promulgamos la presente Constitución para la provincia de Santiago del Estero.

PRIMERA PARTE.

SECCION I.

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS.

CAPITULO I.

PRINCIPIOS Y DECLARACIONES

ART. 1º.- La provincia de Santiago del Estero, parte integrante

0

2.38

B26

Final

III

.2.
de la República Argentina, es autónoma, democrática y organiza su gobierno bajo la forma republicana y representativa de acuerdo con las Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional y la Parte II, Título II de la misma, que declara incorporados a la presente.

ART. 2º: Son límites de la provincia de Santiago del Estero los que por derecho e históricamente le corresponden, sin perjuicio de las cesiones o integraciones que pudieren hacerse como resultado de los tratados interprovinciales celebrados de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación. La provincia se organizará en departamento y regiones.

ART. 3º: El gobierno y la sociedad santiagueña basarán su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.

ART. 4º: El poder reside en el pueblo, pero éste no gobierna sino por medio de sus representantes y con arreglo a esta Constitución, sin perjuicio de los sistemas de consulta popular.

ART. 5º: Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados interprovinciales, son ley suprema de la provincia y las autoridades provinciales y municipales están obligadas a conformarse a ellas.

ART. 6º: El Gobierno de la provincia sostiene el culto católico

apostólico romano.

ART. 7º: Toda ley, decreto u orden contraria a los artículos de esta Constitución o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos por ella reconocidos otras restricciones que las que la misma permita o priven a los ciudadanos de las garantías que ella asegura, serán nulos y no podrán ser aplicados por los jueces. Las personas que sufran los efectos de cualquier orden, decreto o ley que viole o menoscabe estos derechos, libertades o garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios que por tal violación les causen, contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado.

ART. 8º: Las autoridades del gobierno residen en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia, salvo que por causas especiales se determine por ley, o por decreto durante el receso de la Cámara, y con carácter transitorio, otro lugar de la provincia. No ejercen otras atribuciones que las que esta Constitución les confiere; son responsables de conformidad con ésta Constitución y con las leyes. Los actos que realizaren fuera de sus atribuciones o a requerimiento de fuerza armada o de reunión sediciosa que se atribuyan los derechos del pueblo, no tendrán valor alguno.

ART. 9º: La delegación de facultades que esta Constitución otorga a los poderes de gobierno sólo podrá efectuarse en forma excepcional y con expresa indicación de su alcance y bajo la condición de que sea por tiempo determinado y lo actuado por

el poder delegado esté sujeto a control por el poder delegante. La delegación puede ser revocada cuando el delegante juzgue propio hacerlo, sin que afecte como consecuencia de ello los derechos irrevocablemente adquiridos con motivo de su aplicación. No podrán delegarse aquellas facultades que son propias e inhierentes de un poder. El Poder Judicial no puede delegar, en ningún caso, sus funciones jurisdiccionales.

ART. 10º: La provincia y los municipios, como personas de derecho, carecen de todo privilegio especial. Pueden ser demandados ante los Tribunales ordinarios y, al efecto, será suficiente que los interesados acrediten haber agotado la vía administrativa, siéndole desconocido o negado el derecho invocado, o que, transcurridos tres meses después de la iniciación de dicha vía, no se hubiere dictado resolución. Cumplidos estos requisitos, quedará expedita la vía judicial, sin que sea menester autorización alguna ni otra formalidad previa.

Si hubiere condenación a pagar sumas de dinero, no podrá hacerse ejecución ni trabarse embargo de sus bienes o rentas, debiendo en tal caso la Legislatura o Concejo Deliberante, en el período de sesiones ordinarias inmediato al de la ejecutoria, arbitrar los recursos necesarios para el pago, cesando este beneficio si así no lo hiciere en el plazo de tres meses.

Esta disposición se incluirá en todos los contratos en que sean parte el fisco provincial o municipal.

ART. 11º: Los actos de la administración pública se publicarán de manera periódica y en particular los que se relacionen con

la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse trimestralmente por los medios de comunicación social.

ART.12º: Declárase la estabilidad laboral de los empleados públicos mientras dure su buena conducta. No podrán ser separados de sus empleos sin sumario previo donde se observen las garantías del debido proceso. La legislación no podrá alterar o suspender la estabilidad ni prohibir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones. La filiación partidaria no es requisito para la admisión ni causa para la cesantía. El funcionario o empleado público a quien se impute delito en el desempeño de sus funciones estará obligado, en los casos y formas que la ley determine, a acusar para vindicar se, gozando del beneficio del proceso gratuito.

ART.13º: Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, podrá usar, valiéndose de su cargo, para realizar especulaciones, ni interesarse directa o indirectamente, o por persona interpuesta, en cualquier contrato u operación, en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hará incurrir al responsable en mal desempeño de sus funciones.

ART. 14º: Toda reforma a la presente Constitución que fuere ordenada en época de subversión institucional, o realizada por un poder que no haya sido establecido por esta Constitución, será nula e inaplicable y los actos jurídicos de ella derivados, de ningún valor. El texto constitucional vigente será repuesto sin necesidad de declaración alguna, cuando cese la situación irre-

gular que originó su derogación.

ART. 15°: Los habitantes de la provincia no podrán ser obligados a cumplir las disposiciones, leyes o reglamentos emanados de un poder anticonstitucional por su origen y el juez que disponga su cumplimiento será considerado cómplice del hecho y pasible de juicio político.

ART. 16°: En ningún caso y por ningún motivo, las autoridades provinciales o alguno de los poderes podrán suspender en todo o cualquiera de sus partes la vigencia de esta Constitución. Ninguno de los poderes puede pedir ni se les concederá por motivo alguno facultades extraordinarias, ni la suma del poder público.

C A P I T U L O I I

DERECHOS

ART. 17°: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta Constitución, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición.

ART. 18°: Todos los habitantes tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a la vida, a la libertad, al honor, a la seguridad, a la intimidad y a no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al nombre.

Ningún habitante puede sufrir injerencias o ataques arbitrarios en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, su honra o su reputación.

Queda asegurado a todos el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la provincia llevando sus bienes sin perjuicio de terceros.

ART. 19º: Todos los habitantes tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a publicar por la prensa y cualquier medio de comunicación social sus ideas y opiniones sin censura previa, y a la información veraz y objetiva. Los delitos cometidos por estos medios nunca se reputarán flagrantes. No se podrá clausurar ni secuestrar los instrumentos del presunto delito durante los procesos. Es inviolable en el territorio de la provincia el derecho que todo habitante tiene para ejercer su culto libre y públicamente, cambiarlo, manifestarlo según los dictados de su conciencia, sin más limitaciones que la impuesta por la moral, la salud, las buenas costumbres y el orden público.

ART. 20º: Toda persona que fuere afectada en su reputación por una referencia o publicación periodística tendrá derecho, dentro de los quince días de la publicación, a la réplica o aclaración gratuita por el mismo órgano que sirvió de vehículo a dicha referencia o información, en un plazo no mayor de noventa y seis hora y con el mismo espacio y en las demás condiciones y formas que la ley determine. Si el responsable del medio periodístico no admitiera la publicación de la réplica, el reclamante tendrá derecho a la acción de amparo.

ART. 21º: Los habitantes de la provincia gozan de la libertad de enseñar y aprender. La educación implica, aun la impartida por establecimientos particulares, la prestación de un servicio público.

ART. 22º: Todo habitante tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él, así como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y servicios sociales adecuados, la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, viudez, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

ART. 23º: Todos los habitantes tienen el derecho de reunirse para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no se perturbe el orden público; a peticionar individual o colectivamente ante todas y cada una de las autoridades para solicitar gracias o justicia, instruir a sus representantes o pedir la reparación de agravios. En ningún caso la reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo ni peticionar en su nombre.

ART. 24º: Los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y ésta debe ser la misma para todos y tener acción y fuerza uniforme. La igualdad, la equidad, la proporcionalidad y la progresividad de acuerdo a la capacidad contributiva, son la base del impuesto y las cargas públicas. Ningún gravamen o aumento de los ya existentes, establecido por la provincia o los municipios, puede ser exigido sin que una ley u ordenanza lo establezca, debiendo éstas ser dictadas con anterioridad al inicio del ejercicio

financiero.

ART. 25º: Todos los habitantes tienen derecho a la propiedad de sus bienes. Este derecho tiene una dimensión personal y social. Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley o de expropiación por causa de utilidad pública, la que debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

ART. 26º: La asociación, el trabajo, la industria y el comercio son derechos asegurados a todos, siempre que no ofendan, perjudiquen ni atenten a la moral, a la salud, o al orden público, ni se practiquen en forma contraria a la ley y a los derechos de terceros.

ART. 27º: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, igualdad de oportunidades para ambos sexos, participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración o cogestión en la dirección, garantía legal contra el despido, formación profesional y cultural, protección contra el despido arbitrario, asistencia médica integral, protección a la trabajadora embarazada, después del parto y al hijo recién nacido; rehabilitación integral de los discapacitados; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitra-

je; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable; el seguro social y obligatorio estará a cargo de entidades oficiales con autonomía económica y financiera; jubilaciones y pensiones móviles y porcentuales; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y al acceso a una vivienda digna. En materia laboral rigen los principios de la conciliación y el juicio oral.

ART. 28º: La legislación sobre higiene y seguridad del trabajo tenderá a prevenir los riesgos profesionales, asegurar la salud física, mental y moral de los trabajadores y fijará normas que tutelen el trabajo de los menores y de la mujer.

ART. 29º: Todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido; a participar en el gobierno de la provincia, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Es el pueblo quien confiere la autoridad legítima al poder público mediante elecciones democráticas que habrán de celebrarse periódicamente con sufragio universal y voto secreto, garantizando la libertad de sufragio.

C A P I T U L O III

DEBERES

ART. 30º: Es deber de todo habitante honrar y defender la patria

y la provincia, resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la nación y de la provincia, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y esta Constitución Provincial y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia, cumplir y hacer cumplir los tratados interprovinciales, contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado, armarse en defensa de la Patria en la forma que lo establezcan y lo determinen las leyes y demás normas aplicadas por las autoridades establecidas por la Constitución Nacional, prestar servicios civiles en caso en que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo requieran; formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales; evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.

C A P I T U L O I V

GARANTIAS

ART. 31º: Ningún habitante de la provincia puede ser requisado en tiempo de paz, allanado o inspeccionado su domicilio sin orden escrita de autoridad judicial competente que exprese el motivo del procedimiento y sin que se labre un acta ante testigo propuesto por el allanado. En horas de la noche no podrá allanarse el domicilio sino por auto motivado, con la presencia y contralor de sus moradores. En caso de manifiesta ausencia de éstos deberá labrarse acta con la presencia de vecinos. En caso de detención de personas deberá comunicarse la misma de inmediato a los familiares, abogados o allegados que indique, por par

te de la autoridad que la practicó.

ART. 32º: No podrán allanarse los estudios de profesionales, sin control del Colegio respectivo de la jurisdicción, para el resguardo del secreto profesional; ni las iglesias, ni demás locales públicos y registrados de culto, sin control de la autoridad religiosa respectiva, para su debido respeto.

Queda garantizado el resguardo al secreto profesional y a la confesión religiosa.

ART. 33º: Nadie puede ser privado de su vida, su libertad o sus bienes, sin el debido proceso legal.

ART. 34º: Ningún habitante de la provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.

ART. 35º: La ley reputa inocentes a los que no hayan sido declarados culpables por sentencia de juez competente. No se dictarán leyes que empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores o les priven de derechos adquiridos, Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por el mismo delito bajo ningún pretexto, ni en forma alguna podrán sustanciarse nuevos pleitos pasados en autoridad de cosa juzgada, salvo el caso de revisión favorable al condenado en materia criminal y de acuerdo con la ley procesal. En causa criminal, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus ascendientes, descendientes y cónyuge, ni puede ser compelido a deponer contra

sus demás parientes hasta el cuarto grado inclusive. La defensa es libre en todos los juicios. Los jueces serán sujetos activos en la búsqueda de la verdad real. El derecho de defensa en juicio no podrá ser coartado por excesos rituales manifiestos que oculten la verdad jurídica objetiva en tanto con ello no se supla la actividad procesal a cargo de las partes.

ART. 36°: Nadie puede ser detenido sino en virtud de orden escrita de autoridad competente y mediando indicios vehementes de delito, salvo caso flagrante, en que todo inculpado podrá ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de la autoridad. Nadie puede ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.

ART. 37°: Ninguna detención podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin dar aviso al juez competente, poniéndose al imputado a su disposición con los antecedentes del hecho que la motivaron. Desde entonces, tampoco podrá permanecer el imputado más de veinticuatro horas incomunicado, ni por más del mismo término sin que se le haga conocer la causa de su detención por escrito y bajo constancia. Ninguna detención o arresto se hará en la cárcel pública destinada a los procesados y penados, sino en otro lugar que se designará a ese objeto, y los menores y las mujeres serán alojados en establecimientos especiales. Las cárceles de la provincia serán seguras, sanas y limpias y no podrán tomarse medidas que, so pretexto de precauciones, mortifiquen a los presos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centros de moralización, instrucción, trabajo y

reeducación social. Queda especialmente prohibida toda especie de tormentos y vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurran los funcionarios o empleados que los apliquen, ordenen, instiguen o consientan. Los presos no serán trasladados fuera de la provincia para cumplir su condena en otras cárceles, ni se admitirán en ésta presos de otras jurisdicciones.

ART. 38°: El ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por esta Constitución, como asimismo las inviolabilidades que protegen la seguridad individual, están garantizados por la acción de habeas corpus o por la acción de amparo, según los casos. Toda persona cuya libertad corra un peligro cierto o inminente, o se encuentre detenida sin orden en forma de juez competente, por un juez incompetente o por cualquier autoridad, podrá ocurrir por sí o por conducto de otro valiéndose de cualquier medio de comunicación, ante cualquier juez o tribunal, sin distinción de fueros ni instancias, para que ordene su inmediata libertad. El juez o tribunal tendrá facultad de requerir toda clase de informaciones y hacer comparecer al detenido a su presencia y deberá resolver en definitiva, en un término sumarísimo que fijará la ley. La acción de amparo de trámite sumarísimo puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad pública o privada, que amenazare, restringiere, impidiere o pusiere en peligro inminente, de manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho reconocido a las personas en la Constitución de la nación

o de la provincia, siempre que no pudieren utilizarse los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no existiesen recursos específicos de análoga naturaleza acordado por las leyes o reglamentos, y a fin de que el juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado.

ART. 39º: El arre-to por falta o contravención será siempre redi-mible por multa, salvo que por la naturaleza de la infracción aquél se hiciere necesario para garantizar la seguridad pública o individual o la del propio infractor. Prohíbese la conversión de la multa impuesta por falta o contravención , en arresto.

ART. 40º: En materia penal rige el principio de oralidad. El su-mario dejará de ser secreto para las partes inmediatamente des-pués que el acusado haya prestado declaración indagatoria ante el juez, salvo las excepciones por el término que la ley esta-blezca, por razones de moralidad y orden público.

ART. 41º: No podrá dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros, funcionarios o empleados de los tres poderes públicos por servi-cios prestados, o que se les encarguen en el ejercicio de sus respectivas funciones y atinentes a las mismas, o a los que con-traten con el Estado en cualquier forma, fuera de las justas compensaciones que el presupuesto o leyes especiales les hubie-sen concedido.

ART. 42º: En caso de intervención del gobierno federal, los ac-tos administrativos que el representante nacional practique du-

rante el desempeño de su función, serán válidos para la provincia si hubieren sido realizados de acuerdo con esta Constitución y las leyes de la provincia.

ART. 43º: Los extranjeros domiciliados en la provincia son admisibles en todos los cargos y empleos para los cuales esta Constitución no exija ciudadanía.

ART. 44º: El ejercicio de la actividad profesional universitaria en sus diversas disciplinas, es un derecho y un deber del profesional para con la sociedad, los que podrán actuar en forma interdisciplinaria para canalizar y compatibilizar las demandas sociales. El Estado provincial debe procurar poner en marcha una política de utilización de estos recursos humanos con participación activa en la gestión de éste y de las empresas.

ART. 45º: Los principios, derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como una negación de otros no enumerados pero que pertenecen al pueblo o que se deriven de la forma de gobierno adoptada, o que sean inherentes al hombre.

SECCION II

REGIMEN SOCIAL, ECONOMICO Y FINANCIERO.

C A P I T U L O I

REGIMEN ECONOMICO

ART. 46º: La actividad económica de la provincia estará al ser-

vicio del hombre y de la sociedad y será organizada conforme a los principios de la economía social. Responderá a una planificación integral y democrática que contemple las relaciones de interdependencia de los factores locales, regionales y nacionales.

ART. 47º: El Estado promoverá el bienestar de la sociedad, mediante el desarrollo económico y social, fomentando la producción, en especial las industrias madres y las transformadoras de la producción rural, los programas y proyectos de promoción industrial que tengan por objeto el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales, renovables y no renovables de la provincia y de cualquier tipo de industria que se integren vertical u horizontalmente a la estructura productiva, mediante sistemas o regímenes de promoción, concesiones de carácter temporario, primas, recompensas de estímulo, exención de impuestos y contribuciones y otros beneficios compatibles con esta Constitución; y podrá concurrir a la formación de sus capitales y al de los ya existentes, participando de la dirección y de la distribución de sus beneficios.

Igualmente deberá fomentar y orientar la aplicación de todo sistema o procedimiento que tienda a asegurar la comercialización de la producción.

ART. 48º: El Estado promoverá la inmigración, la colonización, la autocolonización, la formación de organismos o entes del Estado provincial, centralizados o descentralizados, para el estudio, planificación y coordinación de obras de infraestructura y servicios públicos provinciales, de promoción y desarrollo

económico y social de la provincia. También implementará y explotará industrias o empresas que interesen al bien común.

ART. 49º: En la provincia se establecerá un régimen que respete y estimule la iniciativa privada, la radicación de capitales genuinos, la incorporación de tecnología y el asentamiento humano, que hagan al crecimiento económico y al progreso social. Las diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del bien común.

ART. 50º: El Estado reconoce la función económica y social de la cooperación libre. Estimulará el desarrollo de las mutuales y cooperativas de distinto objeto social, su integración económica, asegurando su carácter y finalidad y ejerciendo una oportuna y eficaz fiscalización. Las así constituida estarán exentas de todo impuesto que grave su actividad.

ART. 51º: Toda forma de abuso del poder económico será reprimida; y las empresas individuales y sociales, de cualquier naturaleza que sean, al igual que las concentraciones de capital que obstaculicen el desarrollo de la economía o tiendan a dominar mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, serán sancionados según lo determine la ley.

La producción agropecuaria, forestal, minera, turística e industrial, el comercio y el crédito, así como el trabajo y la propiedad privada serán consideradas en función social. El Estado protegerá al consumidor con leyes y medidas contra el agio y la especulación.

ART. 52º: La enajenación, compra y demás actos a título oneroso

susceptibles de licitación de los bienes del fisco provincial o municipal, se harán precisamente en esa forma, bajo pena de nulidad, y de la que corresponda criminalmente al agente o agentes de los actos violatorios de esta disposición.

ART. 53º: Cuando para la fundación de colonias, instituciones de asistencia social o para otros fines de utilidad pública, se considere necesario la enajenación de los bienes del fisco en venta directa o la cesión gratuita, podrá la Legislatura con dos tercios de votos de la totalidad de los miembros, autorizar estas formas de enajenación, dictando una ley especial al efecto.

El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que haya hecho de cada autorización, una vez cumplida la ley respectiva.

ART. 54º: La Legislatura elaborará un plan agrario destinado a poblar las regiones rurales, racionalizar las explotaciones y estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad, procurando el máximo bienestar a los trabajadores del campo.

ART. 55º: El régimen de división y adjudicación de la tierra pública será establecido por ley con sujeción a planes previos de colonización con fines de fomento, que prevean: la distribución por unidad económica de tipo familiar de acuerdo con su calidad y destino; la explotación directa y racional por el adjudicatario y su familia; la adjudicación preferencial a grupos de organización cooperativa; la inenajenabilidad de la tierra durante el término que fije la ley; la seguridad del crédito oficial

con destino a la vivienda y producción; el trámite sumaráisimo para el otorgamiento de los títulos o resguardo de derechos, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios; la reversión por vía de expropiación a favor de la provincia en casos de incumplimiento de los fines de la propiedad sin justa causa, a cuyo efecto la ley declarará en cada caso de interés social la tierra que se adjudique, o la disolución del contrato en su caso antes del traspaso del dominio; el asesoramiento permanente a los adjudicatarios por los organismos técnicos oficiales; la fijación por ley especial de las condiciones en que se hará la reserva, venta o concesión de tierras, que se encuentren en zonas de influencia de las obras de canalización de las grandes corrientes de agua; la promoción del seguro agrario.

ART. 56°: El Estado, conforme con la función social de la propiedad, promoverá la disolución de los condominios rurales numerosos o de título tradicional, mediante una ley de expropiación y subdivisión que asegure la adjudicación de unidades económicas y familiares. Serán beneficiarios los poseedores reconocidos, sin cargo especial para éstos, conforme a las condiciones que establezca la ley.

ART. 57°: La provincia promoverá la transformación de latifundios improductivos antisociales en unidades económicas de producción, a través de los impuestos o expropiación, conforme lo establezca la ley. Propiciará la superación del minifundio, del arrendamiento y la aparcería como forma de explotación de la tierra mediante la aplicación de planes de colonización.

ART. 58°: La provincia se dividirá en regiones geoeconómicas, para lo cual elaborará perentoriamente una carta de uso potencial del suelo que señale la vocación productiva de las regiones y permita establecer las prioridades de la inversión pública, del desarrollo regional y la protección del ecosistema. Las tierras que sean declaradas de uso forestal, conservarán esta prioridad aunque fuesen privadas, debido al carácter social de las mismas, y se destinarán a asegurar su explotación racional a perpetuidad y al equilibrio ecológico regional. A los fines de asegurar su cumplimiento la ley determinará los grados de sanción a aplicar.

C A P I T U L O I I

REGIMEN DEL AGUA

ART. 59°: Todos los asuntos referentes al uso, de las aguas públicas, deberán estar a cargo de un organismo descentralizado, constituido por un presidente y cuatro vocales: dos de ellos designados por el Poder Ejecutivo y dos elegidos directamente por los usuarios de aguas públicas que comprenderán a los propietarios de inmuebles que cultiven directamente su tierra, los arrendatarios, aparceros, mediero, contratistas y todos los que con título legal cultiven la tierra.

La duración de los miembros del Consejo será de cuatro años, debiendo renovarse por mitad cada dos años con posibilidad de reelección, uno por cada parte.

Este organismo proyectará planes generales de obras hidráulicas, obras de irrigación, canales, cauces de riego y todas las

uestiones que deriven de la administración y distribución de las aguas públicas.

ART. 60º: El uso del agua del dominio público de la provincia, es un derecho inherente a los predios. Los ríos y sus cauces y toda las aguas que corran por cauces naturales, trascendiendo los límites del inmueble en que nacen, son del dominio público de la provincia, y las concesiones que ésta hiciera del goce y uso de esas aguas no podrán ser cedidas, transferidas o arrendadas, sino con el fundo a que fueron adjudicadas y, serán válidas mientras y en tanto el concesionario haga uso fuil y no afecten el bien común a juicio de la concedente. En caso de subdivisión de un inmueble con derecho a uso del agua para riego, la autoridad de aplicación determinará la extensión del derecho a cada una de las fracciones o declarará la caducidad de la concesión si el uso del agua en ella pudiera resultar antieconómico.

La ley reglamentará esta disposición, como así también el uso de las aguas subterráneas, evitando el agotamiento de las fuentes.

ART. 61º: Compete a la provincia regular sobre el aprovechamiento de los ríos transprovinciales que atraviesan su territorio mediante tratados con las provincias vecinas. Afirmará sus derechos para que el aprovechamiento de las aguas que atraviesan su territorio no sea afectado ni por obras o por el uso que se hiere aguas arriba.

REGIMEN FORESTAL

ART. 62º: El bosque será protegido con el fin de asegurar su uti-lización racional y lograr su mejor aprovechamiento económico-social. La ley contemplará la seguridad de los trabajadores dedicados a la actividad forestal.

La provincia promoverá el aprovechamiento racional de los bosques teniendo en cuenta la necesidad de supervivencia, conser-vación y mejoramiento de especies, la reposición de aquellas de mayor interés, económico y la forestación de zonas de producción tomando a su cargo estas funciones en los casos de las variedades que, por sus peculiaridades, difícilmente puedan estar al alcance de la acción privada.

La ley reglamentará la entrega a la explotación privada de las superficies boscosas, estableciendo el régimen de concesiones y su fiscalización, basado preferentemente en programas de desarrollo industrial.

C A P I T U L O I V

REGIMEN FINANCIERO

ART. 63º: El gobierno de la provincia atenderá las erogaciones de su administración con los fondos del tesoro provincial forma-do con el producido de la actividad económica del Estado, con el producto y fruto de sus bienes, con los recursos provenientes de tributos permanentes o transitorios o de servicios que prestare, con los ingresos que por ley le corresponden percibir y con las operaciones de crédito que realizare.

ART. 64º: Los fondos provenientes de tributos transitorios creados especialmente para cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de créditos, se aplicarán exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto éste quede concluido salvo nueva autorización legal.

Cuando dichos tributos fueran establecidos como una contri-bución por mejoras resultantes de una obra pública, serán sopor-tados por los propietarios beneficiados en la proporción que fije la ley.

ART. 65º: La valuación de los bienes particulares con propósi-tos tribut arios se hará en toda la provincia en la forma y el plazo que fije la ley. La valuación de la propiedad rural se ha-rá estimando el valor de la tierra libre de mejoras. La tierra carente de mejoras podrá ser gravada razonablemente conforme lo determine la ley, a los fines de su incorporación al servicio de la economía social y respetando el principio de la no confiscato-riedad. Cuando el propietario de la unidad económica familiar demuestre fehacientemente la imposibilidad de introducir mejoras, será eximido del gravamen según lo determine la ley.

ART. 66º: Toda ley que autorice la emisión de fondos públicos o empréstitos sobre el crédito general de la provincia, necesita sanción de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura. Deberá también especificar los recursos espe-ciales con que haya de hacerse el servicio de la deuda, el que en ningún caso podrá exceder de veinticinco por ciento de la renta ordinaria de la provincia. La utilización del crédito será

con base y objeto determinado y no podrá ser autorizado para en-
jugar el déficit fiscal.

ART. 67º: La provincia podrá crear bancos, entidades financieras
estatales o mixtas, debiendo en estos casos tener la mayoría ab-
soluta del capital. Asimismo propenderá a la creación y radica-
ción de bancos cooperativos y de fomento agrario e industrial.

ART. 68º: El Estado provincial propenderá a mejorar las condicio-
nes de vida y subsistencia social, estimulando y protegiendo el
ahorro popular en todas sus formas, orientándolo hacia la adqui-
sición de la vivienda familiar y del predio para el trabajo ru-
ral, como asimismo a inversiones en actividad productivas dentro
del territorio de la provincia.

ART. 69º: Las entidades financieras oficiales orientarán los
créditos, en forma prioritaria, a los sectores de producción apli-
cando tasas preferenciales con el objeto de promover el desarro-
llo económico de la provincia.

C A P I T U L O V

REGIMEN DE SALUD

ART. 70º: El Estado provincial asegurará la salud como derecho
fundamental de la persona humana. Para ello creará una organiza-
ción técnica adecuada que garantice la promoción, prevención, re-
paración y rehabilitación de la salud física, mental y social,
pudiendo convenir al respecto con la nación, otras provincias y
asociaciones privadas.

ART. 71º: La provincia dará prioridad a la atención primaria de

la salud y a la medicina preventiva con la totalidad de sus niveles de desarrollo. Asegurará la protección materno-infantil; la lucha contra las grandes endemias, drogadicción y alcoholismo y la profilaxis de las enfermedades infecto contagiosas. Se promoverán además acciones complementarias de saneamiento ambiental y provisión de agua potable en las zonas rurales, así como otras acciones según los problemas sanitarios vigentes, pudiendo coordinar éstas con servicios análogos del orden regional y nacional.

ART. 72º: La actividad de los trabajadores de la salud debe considerarse como función social. Deberá garantizarse además una eficaz prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la provincia, estableciéndose los escalafones de la actividad de los trabajadores de la salud, de conformidad a las leyes de carrera que reglamenten su ejercicio. La provincia autorizará y fiscalizará en el cumplimiento de sus objetivos, a las entidades de atención sanitaria, sean éstas de carácter público o privado.

ART. 73º: El medicamento, como contribuyente a la recuperación de la salud, será considerado un bien social, debiendo el Estado arbitrar los mecanismos que tiendan a asegurar la accesibilidad para todos los habitantes de la provincia.

ART. 74º: Podrá asegurar por medio de convenios y leyes con la nación, con otras provincias y con entidades privadas, la aplicación de un seguro de salud para toda la población, según lo determine la ley que se dicte al efecto.

ART. 75º: Promoverá la creación de centros de estudio e investi

gación, de formación y capacitación en materia de salud, especialmente referidas a los problemas existentes en la provincia y en la región.

ART. 76º: El Estado provincial reglamentará el deber que tienen todos los habitantes de cuidar su salud y de asistirse en caso de enfermedad.

FAMILIA

ART. 77º: La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.

MINORIDAD

ART. 78º: El Estado protegerá al niño desde su concepción hasta su nacimiento y- desde éste hasta su pleno desarrollo. Proveerá a la atención del menor garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de las sociedades intermedias en la atención física y espiritual de la niñez y juventud.

ART. 79º: La provincia asegurará con carácter indelegable la asistencia a la minoridad desprotegida y carenciada. Deberá adoptar medidas para que la internación de menores en institutos especializados sea el último recurso a emplear en su tratamiento. Para ello, fomentará la creación de centros de acción familiar en estrecha relación con la comunidad que colaboren en la

acción protectora de la minoridad.

ART. 80º: Es obligación del Estado provincial atender a la nutri
ción suficiente de menores hasta los seis años de edad. Se crea-
rá un registro de la minoridad carenciada a efectos de individua
lizar a los beneficiarios.

JUVENTUD

ART. 81º: El Estado impulsará la participación de la juventud en
la construcción de una sociedad más justa, moderna y democrática.
Para ello, deberá contemplarse su educación en las áreas políti-
cas, sociales, culturales y económicas. En las zonas rurales, fa
cilitará el arraigo a través del acceso a la educación; a la ca-
pacitación laboral y al trabajo.

TERCERA EDAD

ART. 82º: El Estado asegurará a los hombres y mujeres de la ter
cera edad una protección integral que revalorice su rol como
protagonista de esta sociedad. Propiciará una legislación que
contemple los múltiples aspectos que se plantean en el ámbito fa
miliar, estimulando planes y programas que tiendan: a la asisten
cia y a su protección integral, por cuenta y cargo de sus fami-
liares. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a
dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de
los institutos y fundaciones creadas o que se crearan con ese
fin; a una atención de carácter familiar; a establecimientos es
peciales enfocados con mentalidad preventiva; a los hogares o
centros de día; a la asistencia integral domiciliaria; al acce-

so a la vivienda a través de crédito de ampliación, de adjudicación en propiedad y/o en comodato de por vida, asignando como mínimo el diez por ciento de las viviendas que se construyan con fondos nacionales, provinciales y/o municipales; a promover su reinserción laboral a los fines de laborterapia y aprovechamiento de experiencia y capacitación; a la inclusión del salario familiar en su haber previsional.

DE LOS DISCAPACITADOS

ART. 83°: Es deber de la familia, del Estado provincial y subsidiariamente de las instituciones intermedias, la atención del discapacitado físico o mental. Deberá legislarse sobre su protección y la de su familia en la problemática educacional, laboral y asistencia.

S E C C I O N I I I

REGIMEN ELECTORAL

ART. 84°: El sufragio popular es un derecho que le corresponde a todo ciudadano y una función política que tiene el deber de ejercer con arreglo a esta Constitución y a la ley. La población es la base de la representación política.

ART. 85°: Habrá un Tribunal Electoral de cinco miembros, compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal del mismo tribunal, el vicepresidente 1° de la Legislatura, un diputado por la minoría y el fiscal de Estado. En caso de impedimento serán subrogados por sus representantes legales. Este tribunal procederá como jurado en la apreciación de los hechos

conforme a la libre convicción y sentenciará con arreglo a derecho.

ART. 86º: Sin perjuicio de lo que disponga la ley, son atribuciones del Tribunal Electoral, las siguientes:

- a) Resolver toda cuestión relativa al ejercicio del derecho del sufragio.
- b) Practicar en acto público los escrutinios definitivos en los cuales sólo podrán computarse los votos emitidos a favor de las listas oficializadas por el tribunal.
- c) Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo.
- d) Calificar las elecciones de gobernador, vicegobernador, convencionales constituyentes y diputados, juzgando definitivamente y sin recurso alguno sobre su validez o invalidez. Otorgará también títulos a los que resultaren electos, sin perjuicio de las facultades conferidas a cada cuerpo colegiado por esta Constitución.

ART. 87º: El Tribunal Electoral deberá expedirse en los asuntos sometidos a su consideración, en el término de diez días hábiles, bajo pena de destitución e inhabilitación por diez años para desempeñar empleo o función pública provincial, del miembro remiso en el cumplimiento de sus funciones. En el caso previsto en el inc. d) del Art. 86, deberá expedirse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la realización de las elecciones. Transcurrido dicho plazo sin que medie pronunciamiento, se considerarán aprobadas y se tendrán por válidas sin más formalidad.

ART. 88º: La función de miembro del Tribunal Electoral será considerada carga pública y desempeñada sin retribución alguna.

ART. 89º: Las elecciones se harán por listas que serán oficializadas por el Tribunal Electoral.

ART. 90º: No serán admitidos a votar sino los inscriptos en el padrón electoral. El voto es personal, independiente, secreto y obligatorio, y será emitido por el mismo votante ante la mesa o tribunal que deba recibirlo. El escrutinio seña público y se practicará en la forma que la ley determine.

Los actos electorales ordinarios se verificarán en días preestablecidos por la ley, y los extraordinarios deberán anunciarse con la anticipación que la misma establezca, la que no podrá ser menos de un mes. El pueblo se considerará automáticamente convocado a las elecciones en los días designados por la ley.

ART. 91º: No podrán votar los que en razón de las disposiciones legales quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

ART. 92º: Durante las horas del comicio, los electos no podrán ser detenidos ni arrestados, salvo el caso de ser sorprendidos "in fraganti" en la comisión de delitos de acción pública.

ART. 93º: El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convoca-toria o el acto eleccionario en caso de conmoción interior, insurrección, invasión o movimiento de milicias que impidan su realización, dando cuenta a la Legislatura dentro del tercer día, a cuyo efecto la convocará si se hallare en receso. Durante

la elección en el radio del comicio no habrá mas autoridad que la del presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.

ART. 94º: Además de las disposiciones anteriores, la ley electoral deberá sujetarse a las siguientes bases:

- 1º) Padrón electoral nacional.
- 2º) Uniformidad para toda la provincia.
- 3º) Responsabilidad para todos los que atenten contra la libertad del sufragio.
- 4º) Representación de las minorías en la forma que la ley determine.

ART. 95º: Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos y participar en su organización y funcionamiento. En la provincia se garantizará el funcionamiento de los partidos políticos a quienes se les asignará la personería jurídico-política para el libre funcionamiento, siempre que éstos se desenvuelvan y sustenten los principios republicanos, democráticos y federales consignados en la Constitución nacional y provincial y se ajusten a las disposiciones que se especifiquen en la ley electoral.

SEGUNDA PARTE

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA

SECCION I

PODER LEGISLATIVO

C A P I T U L O I

DE SU CONSTITUCION, PODERES Y PRIVILEGIOS.

ART. 96°: El Poder Legislativo de la provincia será ejercido por una Cámara de Diputados elegidos directamente por el pueblo, en distrito único a razón de uno por cada veinte mil habitantes o fracción que no baje de diez mil, no pudiendo ser inferior a cuarenta y cinco el número de miembros, conforme al siguiente sistema: dos tercios corresponderán a la mayoría, por lista; el tercio restante a las minorías en la forma que la ley lo establezca.

Se elegirán también en el mismo acto electoral, los suplentes por cada partido que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, muerte, incapacidad o cualquier otra causa. En caso de vacante se incorporaran los suplentes electos que designen los partidos o agrupaciones políticas a que aquellos pertenezcan. A falta de tal designación dentro del término que señala la ley se llenará la vacante por sorteo que practicará el Tribunal Electoral.

Para las minorías serán suplentes los candidatos titulares de la lista respectiva que serán designados de igual modo que el establecido para cubrir la vacante de la mayoría.

ART. 97°: Los diputados durarán cuatro años y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitades cada dos años. Si hubiere otras elecciones nacionales en la época correspondiente, las de renovación de la Legislatura se realizarán simultáneamente con éstas, o en un solo acto con las de gobernador y vicegobernador. La Cámara podrá constituirse por sí misma.

ART. 98º: Para ser diputado se requiere:

- a) Ciudadanía natural en ejercicio o legal despues de cuatro años de obtenida.
- b) Tener no menos de veinticinco años de edad.
- c) Tener dos años de residencia inmediata en la provincia, no causando interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales.

ART. 99º: No podrán ser diputados los eclesiásticos regulares, los militares en actividad, los condenados por delitos dolosos mientras no estuviere prescripta la pena, los fallidos y concursados culpables o fraudulentos mientras no hayan sido rehabilitados y los deudores del fisco por malversación culposa.

ART.100º: Es incompatible el desempeño del cargo de diputado:

- a) Con el de funcionario o empleado a sueldo de la nación, de la provincia o de las municipalidades, con excepción de la docencia a nivel superior o universitaria y de las comisiones honorarias eventuales, las que podrán integrar con previo consentimiento de la Cámara. Asimismo no podrán celebrar contratos con la administración federal, provincial o municipal, ni intervenir defendiendo intereses de terceros en causas contra la nación, la provincia o los municipios, ni participar en empresas beneficiadas con concesión o privilegio por el Estado.
- b) Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otras provincias, incluido el de convencional constituyente.

El diputado que viole lo dispuesto precedentemente o haya

aceptado algún cargo incompatible con el suyo, cesará por ese hecho como miembro de la Cámara. En el caso del Inc. b) la cesación se producirá automáticamente, debiendo la Presidente de la misma hacer conocer la vacante al cuerpo.

A los funcionarios o empleados públicos o privados que resultaren elegidos se les reservará el cargo, al que se podrán reintegrar una vez que cesen en sus mandatos.

ART. 101º: Ningún miembro del Poder Legislativo, durante el período para el que fue elegido, ni aun renunciando a su cargo, podrá desempeñar empleo alguno rentado que hubiese creado o cuyos emolumentos hayan sido objeto de un aumento extraordinario en el período legal de su gestión, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período.

El gobernador y ministros que contravinieren esta prohibición serán personal y solidariamente responsables y obligados a la devolución total de los emolumentos pagados, sin perjuicio de quedar sujetos a juicio político.

ART. 102º: Desde el acto de proclamación por el Tribunal Electoral, o desde su incorporación en el caso de los suplentes, hasta la cesación de sus mandatos, los diputados gozarán de completa inmunidad en su persona y no podrán ser detenidos salvo la circunstancia de ser sorprendidos en flagrante delito doloso que no dé lugar a la excarcelación. En este caso, el juez que entienda en la causa dará cuenta a la Legislatura con remisión de copia auténtica del sumario pidiendo el desafuero. Este pedido será

formulado en su primera sesión inmediata si se hallase en período ordinario, extraordinario o de prórroga, o a su presidente si se hallase en receso. Con la negativa de la Legislatura, el detenido será puesto en libertad inmediatamente y no podrá el juez volver ante ella insistiendo en el allanamiento del fuero de dicho diputado en el mismo juicio.

ART. 103°: Cuando se forme causa criminal contra un miembro de la Legislatura, previa instrucción del sumario el juez lo remitirá a la Cámara y ésta, después de examinarlo en juicio público en sesión próxima a aquella en que se dió cuenta del hecho, podrá suspender en sus funciones al acusado con los dos tercios más uno de los votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura y dejarlo a disposición del juez competente para el juzgamiento.

ART. 104°: Los diputados no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones y votos que emitieren en el desempeño de sus mandatos. Todo insulto, sea cual fuere su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Legislatura en su recinto o fuera de él por causa de su voto u opiniones en el ejercicio de sus funciones, será considerado como inferido a la misma Cámara. Una comisión de la Legislatura hará el sumario correspondiente y estará facultada para recibir toda la prueba que estime pertinente. La Cámara podrá reprimir el hecho con arresto que no pase de veinte días.

ART. 105°: Los legisladores gozarán de una remuneración estable-

cida por la ley, la que no podrá ser alterada mientras dure su mandato salvo cuando la modificación fuese dispuesta con carácter general.

ART. 106°: Los legisladores que dejen de asistir a un tercio de las sesiones señaladas en cada período cesarán en su mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en su cargo.

ART. 107°: La Cámara es el único y exclusivo juez de los derechos y deberes de sus miembros. Estos, al asumir el cargo, prestarán juramento de desempeñarlo fielmente.

ART. 108°: El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura y tendrá voto solamente en caso de empate. La Cámara elegirá sus autoridades. No podrá sesionar sino con mayoría absoluta de sus miembros, pero en número menor podrá dictar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes por la fuerza pública. En el caso de renovación de la Cámara, la parte que permanece integrada con el vicegobernador juzgará el derecho a incorporarse de los nuevos diputados. Una vez constituido el quorum el vicegobernador no podrá votar sino en caso de empate. Los electos no tendrán voto tratándose de su propio diploma.

ART. 109°: La Cámara se reunirá en sesiones ordinarias cada año, y automáticamente desde el primero de marzo hasta el treinta y uno de octubre, pudiendo ser prorrogadas por mayoría absoluta de sus miembros presentes o por el Poder Ejecutivo o siempre que el interés público lo reclame, y también por su presidente con idéntico motivo a solicitud de un tercio de sus miembros. En el

supuesto de convocatoria por el Poder Ejecutivo, los diputados podrán hasta la iniciación de la sesión y con el apoyo de un tercio de la Cámara, introducir otros temas debiendo respetarse la prioridad de trato para los temas propuestos por el Poder Ejecutivo. Debe asimismo el presidente de la Cámara convocar a sesiones extraordinarias por sí sólo cuando se trate de las inmunidades de los diputados.

ART. 110°: La Legislatura, antes de concluir el período extraordinario designará una comisión permanente integrada por no menos de seis de sus miembros, con representación proporcional de cada partido, que actuarán durante el receso parlamentario y le fijará el régimen de su funcionamiento.

La comisión velará por la observancia de la Constitución las leyes, los derechos del cuerpo y por la vigencia efectiva de los derechos y garantías consagrados por la Constitución y de asuntos políticos, jurídicos, sociales, y económicos de relevancia referidos a la nación y a la provincia.

En ambos casos deberá confeccionar un informe y dar cuenta de sus actos en la primera sesión del cuerpo ante quien será responsable.

ART. 111°: Mientras dure el período ordinario la Cámara no podrá suspender sus sesiones por más de tres días hábiles y consecutivos, pudiendo disponer un receso especial no mayor de diez días hábiles.

ART. 112°: La Cámara dictará su reglamento interno. En los casos

en que proceda como juez o como cuerpo elector, no podrá reconsiderar sus resoluciones, ni aun en la misma sesión. Sus decisiones serán adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos previstos por esta Constitución. Las sesiones se celebrarán en local fijo y serán públicas a menos que resolviese lo contrario cuando algún grave interés público lo exija.

La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro y fuera del recinto contra el orden de las sesiones y podrá reprimirlas con arresto que no pase del término de veinte días, previo sumario, si fuera necesario.

ART. 113°: La Cámara podrá con la mayoría absoluta de sus miembros, corregir con llamado al orden, o multa, a cualquiera de sus integrantes, y con dos tercios más uno de votos de la totalidad de sus miembros, suspender o expulsar a cualquiera de ellos de su seno, por inconducta en sus funciones o por inasistencias reiteradas y removerlos por indignidad, incompatibilidad moral o inhabilidad física o mental sobreviniente.

ART. 114°: La Cámara podrá llamar al recinto a los ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo, para pedir los informes y explicaciones que estime convenientes, previa comunicación de los puntos a informar, o solicitarlos por escrito con las mismas indicaciones. En caso de requerirles la presencia en el recinto, fijará día y hora a esos efectos. Cuando se trate de informes por escrito, establecerá el plazo para evacuarlos el que no podrá ser menor de cinco días.

Todas las reparticiones públicas, autárquicas o no, y las empresas concesionarias de servicios públicos, tienen la obligación de dar los informes que los legisladores soliciten.

C A P I T U L O I I

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

ART. 115º: Corresponde al Poder Legislativo:

- 1) Aprobar o desechar los tratados con la nación y otras provincias para fines de administración de justicia, económicos, y en general, asuntos de interés común, propendiendo a la celebración de pactos de integración regional, en materia económica, social, cultural y educacional.
- 2) Reglamentar las materias consignadas en la parte referida a Declaraciones, Derechos y Garantías y Régimen Social, Económico y Financiero, con las orientaciones determinadas en las mismas y dictar las leyes convenientes para poner en ejecución los mandatos, poderes y autoridades previstas en la presente Constitución.
- 3) Legislar sobre educación, cultura, ciencia y técnica.
- 4) Legislar sobre la organización del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la jurisdicción provincial.
- 5) Establecer los tributos necesarios para solventar los gastos e inversiones de la administración pública.
- 6) Fijar anualmente el presupuesto general de gastos e inversiones y cálculo de recursos. En el primero deberán figurar los servicios ordinarios y extraordinarios de la administración

provincial, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, que se tendrán por derogadas si no se consignan en el presupuesto del año siguiente las partidas para su ejecución. En ningún caso la Legislatura podrá votar aumentos de gastos que excedan del cálculo de recursos.

Si el Poder Ejecutivo no presentare el proyecto antes del cuarto mes de sesiones ordinarias, la Cámara podrá iniciar su discusión tomando por base el que esté en ejercicio, y si no fuere sancionado ninguno, quedarán en vigencia hasta el año siguiente las leyes existentes de impuestos y presupuesto en sus partidas ordinarias.

Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique por ley especial.

- 7) Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión que remitirá el Poder Ejecutivo en el mes de junio de cada año, comprendiendo el movimiento administrativo hasta el treinta y uno de diciembre próximo anterior.
- 8) Dictar la ley orgánica sobre utilización del crédito público.
- 9) Autorizar el establecimiento de bancos y otras instituciones oficiales de crédito y ahorro.
- 10) Fijar divisiones territoriales para el mejor funcionamiento de la administración, reglando las formas de descentralizar la misma; crear centros urbanos y dictar la ley orgánica de las municipalidades en los casos que correspondiere.
- 11) Autorizar la cesión de parte del territorio de la provincia o donación de terrenos fiscales para objeto de utilidad pú-

blica nacional o provincial, con exclusión de los correspondientes al dominio municipal. La decisión deberá adoptarse con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. Cuando dicha cesión o donación importe desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción, se requiere igualmente dos tercios de votos de la totalidad de la Cámara.

- 12) Calificar la utilidad pública en caso de expropiación.
- 13) Autorizar o aprobar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la provincia.
- 14) Autorizar al Poder Ejecutivo a la emisión de fondos públicos o de empréstitos sobre el crédito general de la provincia, con los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Cámara, debiendo prever los recursos especiales con que ha ya de hacerse efectivo el servicio de la deuda.
- 15) Aprobar o desechar los contratos ad referendum que hubiera ce lebrado el Poder Ejecutivo.
- 16) Tomar juramento al gobernador y vicegobernador, concederles licencia para ausentarse de la provincia, admitir o rechazar los motivos de sus renunciaciones; declarar con tres cuartas partes de votos de la totalidad de sus miembros, los casos de impedimento de los nombrados, por inhabilidad física o mental.
- 17) Elegir gobernador y vicegobernador en los casos de acefalía de terminados por esta Constitución.
- 18) Prestar o denegar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que señala esta Constitución y aceptar o rechazar el retiro de aquellos solicitados por el mismo para los funciones

narios temporalmente inamovibles y no enjuiciables ante el jurado de enjuiciamiento o por juicio político.

- 19) Elegir senadores al Congreso Nacional y llenar las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional o leyes dictadas en su consecuencia, atribuyesen a la Legislatura.
- 20) Allanar con dos tercios más uno de votos de la totalidad de sus miembros, la inmunidad de los diputados cuando sea requerida para ello por juez competente.
- 21) Intervenir en los casos de juicio político a los funcionarios acusables ante ella en la forma que determina esta Constitución.
- 22) Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, sin perjuicio del principio de inamovilidad declarado por esta Constitución.
- 23) Dictar el estatuto del empleado público sujeto a las siguientes bases:
 - a) Los principios establecidos en el Art. 12.
 - b) Escalafón y carrera administrativa.
 - c) Idoneidad y estímulo a la capacitación.
 - d) Incompatibilidades.
 - e) Concurso público para el ingreso y para el ascenso en la forma que la ley determine.
 - f) Deberes y derechos.
 - g) Regimen disciplinario.

Las precedentes bases son sin perjuicio de aquellas otras que el estatuto del empleado público impongan en consonancia

con la eficiencia de los servicios, afirmación de los derechos y obligaciones, y condiciones de desarrollo técnico de la administración.

24) Dictar una ley general de jubilaciones y pensiones en base a un descuento forzoso sobre todos los haberes y obligatorio para todos los cargos, sin perjuicio de que pueda contemplar, mediante normas especiales, la situación diferencial que derive de la naturaleza o modalidad de las funciones ejercidas. La legislación determinará un período mínimo de desempeño en el cargo, común para todas las actividades, para poder optar por el mismo a los fines jubilatorios.

El ejercicio de los cargos de gobernador, vicegobernador, ministro y secretario de Estado, legislador y demás de naturaleza política, como así los de la magistratura judicial, en ningún caso dará lugar a privilegio alguno ni será objeto de tratamiento diferencial por normas especiales, aun dentro de la legislación general, debiendo siempre regirse por las disposiciones ordinarias de la materia jubilatoria.

La ley no podrá autorizar devoluciones de las sumas aportadas. En ningún caso podrá acordarse jubilaciones, pensiones, subsidios, ni dádivas, por leyes especiales.

25) Crear reparticiones autárquicas.

26) Acordar amnistías generales referentes a facultades no delegadas al gobierno federal.

27) Dictar las leyes de organización de los partidos políticos y regimen electoral.

- 28) Dictar los códigos y leyes orgánicas judiciales y administrativas, y todo otro que sea necesario para poner en ejercicio el poder de policía de la provincia y las facultades no delegadas a la nación.
- 29) Dictar leyes sobre organización policial de la provincia
- 30) Reglamentar la represión de los juegos de azar.
- 31) Dictar leyes que aseguren a todo habitante el derecho a la salud y sobre el deber del Estado de proveer la asistencia médico-social, racionalizando la administración de los diversos servicios, coordinando y organizando la fiscalización de las inversiones de dineros públicos hechas por intermedio de asociaciones privadas de beneficencia.
- 32) Legislar sobre los derechos del niño a la salud y a la educación.
- 33) Dictar leyes protectoras de las artes, ciencias y letras, del patrimonio arqueológico y artesanal, de la tradición y folklore provincial en todas sus expresiones.
- 34) Dictar la ley de organización del trabajo sobre la base de la intervención del Estado, patrones y obreros.
- 35) Declarar con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros la necesidad de la reforma parcial o total de esta Constitución y promover la convocatoria de una convención que la efectúe.
- 36) Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales, estableciendo la adecuada protección del equilibrio ecológico y medio ambiente, sancionando los daños y destrucciones in-

necesarias.

- 37) Dictar la ley de creación de la Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas.
- 38) Cumplir las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional, esta Constitución o leyes dictadas en su consecuencia, confieren a la Legislatura.
- 39) Dictar las leyes necesarias para el funcionamiento de los órganos creados por esta Constitución.
- 40) Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la provincia.

C A P I T U L O III

DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES

ART. 116°: Las leyes tendrán origen en la Cámara de Diputados por proyectos presentados por uno o más de sus miembros o de las comisiones de la misma, o del Poder Ejecutivo, o del Poder Judicial en las materias previstas en el articulado de esta Constitución.

En la sanción de las leyes se empleará la fórmula siguiente:
"La Cámara de Diputados de la provincia sanciona con fuerza de ley".

ART. 117°: Todo proyecto sancionado y no vetado por el Poder Ejecutivo dentro de los diez días hábiles de recibida por éste la comunicación correspondiente, quedará convertido en ley.

Vetado totalmente un proyecto, volverá a la Cámara. Si ésta estuviere conforme, el proyecto quedará desechado y no podrá repetirse en las sesiones de ese año. Si la Cámara no estuviere conforme podrá insistir en su sanción con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Vetado parcialmente un proyecto, volverá a la Cámara. Si esta estuviese conforme, el proyecto quedará convertido en ley con las modificaciones que motivaron el veto. Rechazadas las modificaciones la Cámara podrá insistir en su sanción con mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes, con lo que el proyecto se convertirá en ley.

El Poder Ejecutivo no podrá poner en ejecución una ley vetada ni aun en la parte no afectada por el veto, con la excepción de la ley de presupuesto que podrá cumplirse en la parte no vetada.

ART. 118º: La Legislatura puede delegar en sus comisiones internas la discusión y aprobación de proyectos de leyes reglamentarias. Esos proyectos se obtienen el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión pasan al Poder Ejecutivo para su promulgación, salvo que un cuarto de los miembros de la Cámara requiera la votación del proyecto por el cuerpo.

ART. 119º: Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Legislatura podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

ART. 120º: Devuelto vetado un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, la Cámara deberá tratarlo dentro de los treinta días, durante las sesiones ordinarias. Si la Cámara hubiere entrado en receso el término para pronunciarse sobre el mismo será de treint

ta días a contarse desde la apertura del período ordinario de sesiones o del comienzo de las extraordinarias.

Si el término hubiese empezado a correr, el receso de la Cámara lo suspenderá para ser completado durante las sesiones ordiinarias o extraordinarias.

SECCION II

PODER EJECUTIVO

C A P I T U L O I

DE SU NATURALEZA Y DURACION

ART. 121°: El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia.

Simultáneamente con la elección de gobernador se elegirá un vicegobernador, por idéntico período.

ART. 122°: Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

- a) Tener treinta años de edad.
- b) Ser ciudadano natural o hijo de padres nativos, siempre que haya optado por la ciudadanía argentina.
- c) Tener diez años de residencia inmediata en la provincia, no causando interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales.

ART. 123°: El gobernador y vicegobernador ejercerán sus funciones por el término de cuatro años sin que evento alguno pueda motivar su prórroga.

No podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período

ni sucederse recíprocamente.

ART. 124º: En caso de acefalía de gobernador, o si éste falleciere o renunciare antes de tomar posesión del cargo, sus funciones serán desempeñadas por el vicegobernador quien las ejercerá durante el resto del período constitucional. Cuando se trate de impedimento o ausencia temporal, lo reemplazará hasta que cese dicho impedimento.

Si la inhabilidad temporaria o ausencia fueran simultáneas de gobernador y vicegobernador, se hará cargo del Poder Ejecutivo hasta que cesen aquellas para alguno de ambos, el vicepresidente 1º de la Legislatura, y, en su defecto, el vicepresidente 2º de la misma.

ART. 125º: En caso de acefalía simultánea y definitiva del gobernador y vicegobernador faltando dos años o más para la expiración del período, las funciones del gobernador serán ejercidas interinamente por el vicepresidente 1º de la Legislatura, o en su defecto por el vicepresidente 2º de la misma o por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, en ese orden, quienes deberán convocar al pueblo de la provincia a una nueva elección de gobernador y vicegobernador, dentro del término de cinco días hábiles. En ese caso no podrá ser candidato el funcionario que se desempeñe interinamente a cargo de la Gobernación.

ART. 126º: En el caso previsto en el artículo anterior, faltando menos de dos años para la finalización del período, el funcionario que desempeñe el Poder Ejecutivo, convocará a la Legislatura dentro de los tres días si ésta se hallase en receso, o

le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviere en sesiones ordinarias, de prórroga o extraordinarias para que dentro de los quince días en el primer caso y tres en el segundo, se reuna con quorum de dos tercios a objeto de designar de entre sus miembros y por mayoría absoluta de votos de los presentes, al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes hasta el fin del período. En caso necesario deberá repetirse inmediatamente la convocatoria, por los términos indicados, hasta que la elección se efectúe.

ART. 127°: El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital de la provincia. No podrán ausentarse de ella por más de veinte días continuos sin permiso de la Legislatura. En el receso de la Cámara sólo podrán ausentarse de la provincia por motivos de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquella oportunamente.

ART. 128°: Al tomar posesión de sus cargos, el gobernador y vicegobernador prestarán juramento de cumplir y de hacer cumplir fielmente la Constitución, las leyes de la nación y de la provincia. Lo harán ante la Cámara de Diputados y, en su defecto, ante el Superior Tribunal de Justicia el que deberá reunirse en pleno a esos fines.

ART. 129°) El gobernador tendrá el tratamiento de "Excelencia" Tanto él como el vicegobernador, gozarán del sueldo que la ley fije, el que no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.

El gobernador y vicegobernador gozarán desde su proclamación, de las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados.

C A P I T U L O II

DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCION DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR.

ART. 130°: El gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios. A tal efecto todo el territorio de la provincia serán considerado como un solo distrito electoral.

ART. 131°: La elección se realizará entre los ciento veinte y cuarenta y cinco días antes de que expire el período de gobierno. El Poder Ejecutivo hará la convocatoria con un mes de anticipación, por lo menos.

ART. 132°: El gobernador y vicegobernador deberán asumir sus cargos el día designado al efecto, considerándoseles dimitentes si no lo hicieren. En caso de encontrarse fuera del país o de mediar impedimento, podrán hacerlo hasta sesenta días después.

C A P I T U L O III

DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO

ART. 133°: El despacho de los negocios administrativos de la provincia estará a cargo de los ministros y secretarios de Estado que determine la ley especial de su organización, la que deslindará los ramos y funciones de cada uno.

ART. 134°: Para ser ministro y secretario de Estado se requieren

las mismas condiciones que esta Constitución establece para ser diputado.

ART. 135°: Los ministros y secretarios de Estado despacharán de acuerdo con el gobernador y refrendarán los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.

Podrán, no obstante, resolver por sí solos todo lo referente al régimen económico y administrativo del ministerio y dictarán resoluciones de trámite.

ART. 136°: Los ministros y secretarios de Estado serán solidariamente responsables de todos los actos que autoricen, sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de ordenes del gobernador.

ART. 137°: En los casos de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de los ministros o secretarios de Estado, los actos del Poder Ejecutivo podrán ser refrendados por otros ministros o secretarios de Estado, o por oficiales del despacho autorizados al efecto por el gobernador, quienes deberán proceder en igual forma y bajo las mismas responsabilidades establecidas para los ministros y secretarios de Estado.

ART. 138°: Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la apertura del período legislativo, los ministros y secretarios de Estado presentarán a la Legislatura una memoria detallada del estado de la administración concerniente a sus respectivos departamentos, indicando las reformas que aconsejen la experiencia y el estudio.

ART. 139°: Los ministros y secretarios de Estado deben asistir a las sesiones de la Cámara cuando fueren llamados por ella, o suministrarle los informes escritos que se les pidiere.

La falta de cumplimiento de esta obligación, y de la prevista en el art. 138°, constituyen, independientemente entre sí, causales de mal desempeño de sus funciones a los fines de su remoción.

Pueden los ministros y secretarios de Estado asistir a las sesiones de la Cámara cuando lo crean conveniente, y tomar parte en sus discusiones, pero no tendrán voto.

ART. 140°: Los ministros y secretarios de Estado gozarán de un sueldo establecido por la Ley, el que no podrá ser alterado, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.

C A P I T U L O I V

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO

ART. 141°: El gobernador es el jefe de la administración, representa a la provincia en todos sus actos y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- 1) Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, iniciándolas por medio de proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las existentes, o concurriendo a las discusiones de la Legislatura personalmente o por medio de sus ministros o secretarios de Estado.
- 2) Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia facilitando su cumplimiento por reglamentaciones y disposiciones

especiales que no alteren su espíritu.

- 3) Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle los fundamentos del veto.
- 4) Representar a la provincia en las relaciones oficiales.
- 5) Celebrar y firmar tratados y convenios parciales con la nación o con otras provincias para fines de administración de justicia, de límites, de interés cultural, económico, trabajo de utilidad común y servicios públicos, dando cuenta al Poder Legislativo para su aprobación y, oportunamente, al Congreso Nacional en su caso.
- 6) Instruir a la Legislatura sobre el estado general de la administración mediante un mensaje que hará conocer en la sesión inaugural del período ordinario, o en cualquier otra del primer mes de sesiones ordinarias si hubiese mediado impedimento.
- 7) Presentar a la Legislatura hasta el treinta de junio de cada año, el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan de recursos.
- 8) Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura, salvo el derecho del cuerpo para apreciar y decidir, después de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria.
- 9) Prorrogar las sesiones ordinarias de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 109.
- 10) Hacer recaudar los tributos y rentas de la provincia en la forma que establezca la ley.
- 11) Decretar la inversión de la renta con arreglo a las leyes,

debiendo publicar trimestralmente el estado de la Tesorería.

- 12) Conmutar e indultar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado y favorable del tribunal correspondiente, pero no podrá ejercer esta atribución en las causas de juicio político ni en las por delitos cometidos contra la Legislatura, Poder Judicial, Jurado de Enjuiciamiento, Convención Constituyente o miembro de estos poderes.
- 13) Usar la atribución conferida al Poder Legislativo en el Art. 115, Inc. 26, en el caso de receso de la Cámara y de no poder convocarla oportunamente.
- 14) Expedir oportunamente las órdenes necesarias para la realización de todo acto eleccionario popular, sin que esto pueda ser diferido por motivo alguno excepto en los casos previstos por el Art. 93 de esta Constitución.
- 15) Nombrar y remover a los ministros, secretarios de Estado, funcionarios y empleados de la administración, conforme a esta Constitución y a la ley.
- 16) Designar con acuerdo de la Legislatura a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y demás funcionarios para quienes esta Constitución o la ley requieran tal acuerdo. Designar los jueces de los tribunales inferiores del Poder Judicial y a los integrantes del Ministerio Público, de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. En los casos en que se requiera acuerdo de la Legislatura, en receso de ésta, podrá realizar los nombramientos en comisión con

cargo de dar cuenta en el primer mes de sesiones, proponiendo al mismo tiempo a los que deban serlo en propiedad. Los nombramientos en comisión expirarán al final del período legislativo.

- 17) Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, presidente de la Legislatura, comisiones legislativas, Convención Constituyente, Tribunal de Juicio Político, Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas y a las municipalidades, con arreglo a la ley.
- 18) Adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén prohibidos por esta Constitución y las leyes vigentes.
- 19) Tener bajo su inspección lo concerniente a la seguridad, vigilancia y funcionamiento de los establecimientos públicos de la provincia.

Conocer en los recursos e instancias administrativas que se ñale la ley.

C A P I T U L O V

DEL CONTADOR Y TESORERO

ART. 142º: El contador y el tesorero de la provincia serán designados por el Poder Ejecutivo y durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser renombrados. Sus responsabilidades, deberes y derechos serán determinados por la ley respectiva.

Para ser contador de la provincia se requiere poseer título de contador público con cinco años de antigüedad en el ejerci-

cio profesional, dos de ejercicio de la ciudadanía, dos de residencia inmediata en la provincia no siendo nativo de ella y veinticinco años de edad como mínimo.

Para ser tesorero de la provincia se requiere poseer título de contador público o licenciado en administración y demás requisitos exigidos para contador de la provincia.

Sólo podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones, previa autorización de la Legislatura, la que deberá expedirse dentro de los diez días hábiles posteriores al de entrada de la comunicación correspondiente.

ART. 143°: No se hará ningún pago sin intervención de la Contaduría y ésta no autorizará sino los previstos por la ley general de presupuesto, leyes especiales o acuerdos de ministros en su caso, y siempre de conformidad con el Inc. 6) del Art.115.

En caso de insistencia por acuerdo de ministros, si la Contaduría mantiene sus observaciones, procederá de conformidad con las normas que fije la ley de contabilidad.

CAPITULO VI

DEL FISCAL DEL ESTADO

art.144°: Habrá un fiscal de Estado encargado de asesorar al Poder Ejecutivo y defender el patrimonio e intereses de la provincia. Será parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controvieran los intereses del Estado. La Ley determinará los casos y la forma en que ejercerá sus funciones.

ART. 145°: Para ser fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de Cámara y sólo podrá ser removido por las mismas causas que aquéllos y por el procedimiento de juicio político. Su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designado nuevamente.

SECCION III

C A P I T U L O I

TRIBUNAL DE CUENTAS

ART. 146°: El Tribunal de Cuentas estará integrado por cinco miembros, cuatro contadores públicos y un abogado, todos con siete años de antigüedad en el ejercicio profesional, dos de ejercicio de la ciudadanía, dos de residencia inmediata en la provincia y treinta años de edad como mínimo. La Presidencia de dicho cuerpo se elegiría anualmente entre sus miembros por el voto de los mismos.

Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Legislatura, y sólo podrán ser removidos en la misma forma y por las mismas causas que los magistrados judiciales; gozarán de la asignación que les fija la ley de presupuesto.

Los miembros del Tribunal de Cuentas, antes de entrar en funciones, prestarán juramento ante la Cámara de Diputados, so pena de nulidad de lo que actuaren. Tendrán las mismas incompatibilidades, inmunidades y prerrogativas que los miembros del Su-

perior Tribunal de Justicia.

La ley orgánica del Tribunal contemplará las disposiciones del presente capítulo, asegurando además la autonomía e inviolabilidad funcional del Tribunal, su independencia en la relación con los poderes del Estado, la inalterabilidad de los saldos de sus miembros, la facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover su personal y la estructuración de carreras técnicas administrativas internas.

ART. 147°: Durarán cuatro años en sus funciones, pero en caso de ser designados para un nuevo período inmediato serán inamovibles.

ART. 148°: El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones:

- 1) Examinar y fiscalizar las cuentas de percepción y gastos e inversión de las rentas públicas provinciales, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y municipalidades, excepto aquellas municipalidades que fueran autonomas y que tuvieran Tribunal de Cuentas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcanes respectivos.
- 2) Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos, excepto aquellas municipalidades que fueren autónomas y tuvieran Tribunal de Cuentas, y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determina

me la ley.

Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal corresponderán al fiscal de Estado.

- 3) Fiscalizar la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorguen a las instituciones privadas.
- 4) Informar a la Legislatura sobre el resultado del control que realice.

C A P I T U L O II

DEL TRIBUNAL FISCAL

ART. 149º: El Tribunal Fiscal estará integrado por tres miembros contadores públicos y abogados con siete años de ejercicio profesional, dos de ejercicio de la ciudadanía, dos de residencia inmediata en la provincia no siendo nativo de ella, y treinta años de edad como mínimo.

Los miembros del Tribunal Fiscal serán nombrados por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos en la misma forma y por las mismas causas que los magistrados judiciales; tendrán las mismas incompatibilidades, prohibiciones, inmunidades y prerrogativas, y gozarán de las asignaciones que les fije la ley de presupuesto.

La Presidencia de dicho cuerpo se elegirá anualmente de entre sus miembros por el voto de los mismos. Los miembros del Tribunal Fiscal, antes de entrar en funciones, prestarán juramento en la forma y ante la autoridad que la ley determine, so pena de nulidad de lo que actuaren. Durarán cuatro años en sus

funciones, pudiendo ser designados nuevamente.

ART. 150°: La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal, teniendo en cuenta las disposiciones del presente capítulo, determinando los recursos de que son susceptibles sus resoluciones.

ART. 151°: El Tribunal Fiscal entenderá en los recursos de apelación y los que estableciere la ley orgánica, que formulen los contribuyentes o responsables con relación a los tributos y sanciones que determinase el órgano de aplicación.

SECCION IV

DEL JUICIO POLITICO

ART. 152°: El gobernador, vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y el fiscal del Estado, serán removibles por juicio político por causas de mal desempeño de sus funciones, faltas graves o delitos comunes.

ART. 153°: La acusación será hecha ante la Legislatura por cualquier habitante de la provincia que tenga el ejercicio de sus derechos civiles. Iniciado el juicio, la Legislatura mandará investigar los hechos en que se funde. La investigación estará a cargo de una comisión que se llamará de juicio político, cuyos miembros deberá ser nombrados al mismo tiempo que las demás de la Cámara. Su designación deberá hacerse por la propia Cámara sin que le sea permitido delegar esta facultad a la Presidencia.

ART. 154°: La Comisión de Juicio Político tendrá facultad para

requerir de cualquier poder, oficina o corporación los antecedentes que le fueren necesarios en sus funciones.

ART. 155°: La Comisión deberá expedirse por escrito en el perentorio término de veinte días hábiles y su informe contendrá dictamen afirmativo o negativo sobre la procedencia del juicio político.

ART. 156°: La Legislatura declarará, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros excluidos los integrantes de la Comisión de Juicio Político, si hay o no lugar a la formación de la causa. Su resolución terminará el proceso si fuese absoluta y, en caso contrario, suspenderá en sus funciones al acusado.

ART. 157°: Aceptada la acusación, la Comisión de Juicio Político llevará el proceso ante el resto de la Cámara que actuará como jurado, previo juramento de sus miembros en ese carácter. Para sesionar durante el juicio la Cámara actuante requerirá de un quorum de la mayoría absoluta de sus miembros, y para dictar sentencia las dos terceras partes de sus miembros intervinientes en el jurado.

ART. 158°: Deducida la acusación, el tribunal de sentencia tomará conocimiento de la causa y se pronunciará dentro del término de noventa días corridos. Vencido este plazo sin que la Cámara se hubiere pronunciado, se considerará desestimada la acusación y el imputado será reintegrado al ejercicio de su cargo.

ART. 159°: El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusa-

do, pudiendo inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado dentro de la provincia.

ART. 160º: La ley determinará el procedimiento a seguir en el juicio, debiendo respetarse la oralidad, publicidad y el pleno ejercicio del derecho de defensa.

SECCION V

PODER JUDICIAL

C A P I T U L O I

NATURALEZA Y DURACION

ART. 161º: El Poder Judicial conservará toda la potestad necesaria para afirmar y consolidar su independencia frente a los otros poderes del Estado. El Poder Judicial será ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, tribunales inferiores y demás organismos que la ley establezca. El Superior Tribunal de Justicia estará integrado por un número impar de miembros que no podrá ser inferior a cinco; funcionará en pleno con el número total de sus integrantes o dividido en salas en razón de la materia, según los casos determinados en esta Constitución o en la ley. La Presidencia del cuerpo se elegirá anualmente de entre sus miembros y por el voto de los mismos. Forma parte del Poder Judicial el Ministerio Público.

ART. 162º: Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o fiscal del mismo tribunal se requiere ser ciudadano argentino o naturaleza con diez años de ejercicio de la ciudadanía; ser abogado inscripto en la matrícula y con título habilitante; tener treinta años de edad como mínimo, diez años en el ejercicio

4-
de la República Argentina, es autónoma, democrática y organiza su gobierno bajo la forma republicana y representativa de acuerdo con las Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional y la Parte II, Título II de la misma, que declara incorporados a la presente.

ART. 2º: Son límites de la provincia de Santiago del Estero los que por derecho e históricamente le corresponden, sin perjuicio de las cesiones o integraciones que pudieren hacerse como resultado de los tratados interprovinciales celebrados de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación. La provincia se organizará en departamento y regiones.

ART. 3º: El gobierno y la sociedad santiagueña basarán su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.

ART. 4º: El poder reside en el pueblo, pero éste no gobierna sino por medio de sus representantes y con arreglo a esta Constitución, sin perjuicio de los sistemas de consulta popular.

ART. 5º: Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados interprovinciales, son ley suprema de la provincia y las autoridades provinciales y municipales están obligadas a conformarse a ellas.

ART. 6º: El Gobierno de la provincia sostiene el culto católico

activo de la profesión o siete en la judicatura y demás condiciones requeridas para ser diputado provincial.

ART. 163º: Para ser miembro de las Cámaras o fiscal de las mismas o juez de primera instancia, se requiere: tener treinta años de edad por lo menos, siete años de ejercicio activo de la profesión o cinco en la judicatura y las demás condiciones exigidas en el artículo anterior. Para ser fiscal de primera instancia, defensor, asesor del trabajador, miembro de la Cámara de Paz Letrada o juez de paz letrado, se requieren idénticas condiciones de ciudadanía y título, tener como mínimo veinticinco años de edad, tres años de ejercicio de la profesión o dos de desempeño en la judicatura.

ART. 164º: Los magistrados y representantes del Ministerio Público son inamovibles y conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y observen fiel desempeño de sus funciones.

La inamovilidad comprende el grado y la sede. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causales previstas en esta Constitución. Gozarán de las mismas inmunidades que los legisladores. Su retribución será establecida por ley, pero en ningún caso un miembro del Superior Tribunal de Justicia cobrará una retribución inferior a la que perciba por todo concepto un legislador provincial. Dicha remuneración deberá ser abonada en época fija y no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permanezcan en sus funciones.

ART. 165º: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el

fiscal del mismo cuerpo serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Los magistrados de los tribunales inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. A falta de integración del Consejo de la Magistratura, los magistrados de los tribunales inferiores y los demás funcionarios mencionados precedentemente serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

ART. 166°: El Consejo de la Magistratura estará integrado por dos magistrados, uno del Superior Tribunal de Justicia y otro de Cámara; dos diputados abogados si los hubiere, uno por la mayoría y otro por la minoría; y dos abogados en ejercicio activo de la profesión inscriptos en la matrícula de la provincia, domiciliados en ella, que reunan las condiciones requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Los magistrados serán designados por sorteo que efectuará el Superior Tribunal de Justicia.

Los diputados se elegirán en igual forma por la Legislatura y los abogados serán elegidos por el voto directo de los matriculados. En el mismo acto y forma se designarán dos suplentes para cada uno de los designados.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura durarán dos años en el cargo y no podrá ser reelegido para el período inmediato siguiente.

ART. 167°: En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo podrán ejercer funciones judiciales, arrogarse el cono-

cimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

ART. 168º: Todo funcionario judicial, antes de entrar en funciones, prestará juramento en la forma y ante la autoridad que la ley determine, so pena de nulidad.

Tal juramento será para cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la de esta provincia. Cualquier otro juramento por estatutos distintos será causal de mal desempeño y pasible de enjuiciamiento al infractor.

ART. 169º: El tratamiento del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras será el de "Excelencia", y el de cada uno de sus miembros, como el de los jueces, el de "Señoría".

ART. 170º: No podrán ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal de Justicia ni de las Cámaras, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y en caso de parentesco sobreviniente, el que lo causare abandonará el cargo.

Tampoco podrá conocer en asuntos que hayan sido resueltos por jueces o con jueces con quienes estuvieran ligados por el parentesco antedicho.

ART. 171º: Toda vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del término de treinta días hábiles de producida. En caso contrario, el Superior Tribunal de Justicia proveerá a la designación con carácter provisional.

ART. 172º: Prohíbese a los jueces y demás miembros del Poder Judicial intervenir en política de cualquier modo salvo la emisión

del voto, practicar juegos de azar o concurrir a los locales exclusivamente destinados a ello, o ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y la dignidad del cargo.

El quebrantamiento de esta prohibición se considerará caso flagrante de mal desempeño que les hará pasible de enjuiciamiento.

ART. 173º: Los tribunales de justicia deberán resolver todas las causas que les fueren sometidas, en la forma y plazos establecidos por la ley. Queda establecido ante todos los tribunales de la provincia la libre defensa en juicio y la libre representación, conforme a la ley de la materia.

C A P I T U L O I I

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL

ART. 174º: Corresponde al Poder judicial el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y leyes de la nación y de la provincia, y por los tratados que celebre esta última con arreglo a las mismas, siempre que las causas o personas caigan bajo la jurisdicción provincial. Quedan excluido de su conocimiento los casos atribuidos por esta Constitución al Jurado de Enjuiciamiento y Tribunal de Juicio Político. Asimismo podrá disponer de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones.

ART. 175º: El Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes atribuciones generales, conforme a la reglamentación de las leyes respectivas.

a) Representan al Poder Judicial y ejercer la superintendencia

de la administración de justicia.

- b) Nombrar y remover los secretarios, prosecretarios y empleados del Poder Judicial.
- c) Nombrar y remover a los jueces de paz no letrados.
- d) Dictar el reglamento interno del Poder Judicial.
- e) Remitir a la Legislatura los proyectos de reforma sobre organización y procedimientos que sean compatibles con lo establecido por esta Constitución.
- f) Confeccionar y remitir al Poder Ejecutivo, anualmente, el presupuesto de gastos e inversiones y hacer conocer las necesidades de la administración de justicia.
- g) Organizar la policía judicial y ejercer sobre ella la superintendencia designando a su personal.
- h) Organizar la escuela de especialización para magistrados nombrando al personal de la misma. Establecer y dirigir las escuelas e institutos de capacitación del personal judicial.
- i) Promover, por intermedio del fiscal del cuerpo, el enjuiciamiento de sus miembros y demás magistrados y funcionarios inferiores, removibles por esta vía, por las causales previstas en esta Constitución, sin perjuicio de la acción pública.
- j) Elevar a la Convención Constituyente, en la oportunidad debida, los proyectos fundados de reforma presentados por los miembros del Poder Judicial.

ART. 176°: En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes atribuciones, de conformidad con las normas que establezcan las leyes de la materia:

- 1) Ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva en los siguien-

tes casos:

- a) En las causas que le fueran sometidas sobre competencia o conflictos entre los poderes públicos de la provincia o entre las ramas de un mismo poder.
- b) En los conflictos que se susciten entre el Poder Ejecutivo y una municipalidad, entre dos municipalidades o entre poderes de una misma municipalidad.
- c) En las demandas por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan en materia recogida por esta Constitución, que se promuevan directamente por vía de acción. La declaración de inconstitucionalidad producirá la caducidad de la ley resolución, decreto, ordenanza o reglamento, en la parte afectada por la declaración.
- d) En los recursos de revisión de causas penales fenecidas, cualquiera sea la pena impuesta, conforme a las normas que las leyes establezcan.
- e) En las cuestiones de competencia y jurisdicción entre las Cámaras judiciales.
- f) En los recursos por retardo o denegación de justicia, interpuestos contra las Cámaras o sus miembros.
- g) En las acciones por responsabilidad civil promovidas contra los miembros del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones y previo desafuero.
- h) En los asuntos administrativos o gestiones que se deriven del ejercicio de la superintendencia.

2) Ejercerá jurisdicción como tribunal de apelación:

- a) En las cuestiones de inconstitucionalidad de la legislación provincial que se hubieren suscitado en el trámite de los juicios ante los tribunales inferiores.
 - b) En los demás recursos establecidos por las leyes.
- 3) Conocerá y resolverá en las causas contencioso-administrativas; sobre denegación o retardo de la autoridad administrativa competente en el trámite o resolución de las gestiones realizadas por parte interesada, en la forma que determine la ley. En tales causas, el Superior Tribunal de Justicia tendrá facultad para mandar cumplir directamente su sentencia por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro del plazo que establezca la sentencia. Los empleados a que alude este artículo, serán responsables por la falta de cumplimiento de las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia.

ART. 177°: La administración de justicia se regirá por leyes especiales que deslinden las atribuciones de los tribunales y determinen el procedimiento.

ART. 178°: Las sentencias que pronuncien los tribunales judiciales serán fundadas en el texto expreso de la Constitución o de la ley, o en su defecto, en las leyes análogas o en los principios generales del derecho, atendiendo a las circunstancias del caso.

C A P I T U L O III

DE LA JUSTICIA DE PAZ

ART. 179°: La Legislatura establecerá juzgados de paz en toda

la provincia teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, su extensión territorial y su población.

ART. 180°: La justicia de paz será letrada en la capital y en los demás distritos que la ley determine; también ésta les fijará la jurisdicción y competencia.

ART. 181°: Para ser juez de paz no letrado se requiere ciudadanía en ejercicio, edad de veinticinco años, dos de residencia inmediata en la provincia por lo menos y demás requisitos exigidos por la Ley.

ART. 182°: Los jueces y camaristas de paz letrados quedan comprendidos en las disposiciones del Capítulo I de la Sección V.

ART. 183°: Los jueces de paz no letrados serán nombrados por el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta en terna del Poder Ejecutivo en cada caso. Producida una vacante, el Superior Tribunal de Justicia la comunicará de inmediato al Poder Ejecutivo y, si éste no envía la terna en treinta días, procederá a la designación.

ART. 184°: Los jueces de paz no letrados durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser renombrados. Gozarán del sueldo que les asigne la ley de presupuesto y durante el período de sus funciones sólo podrán ser removidos por el Superior Tribunal de Justicia y por delitos comunes, mal desempeño de sus funciones, mala conducta o inhabilidad física o moral.

ART. 185°: Los jueces de paz son funcionarios exclusivamente judiciales y agentes de los tribunales de justicia y su jurisdic-

ción y competencia serán determinadas en la ley.

SECCION VI

JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ART. 186°: Los magistrados judiciales, los integrantes del Ministerio Público y los miembros del Tribunales de Cuentas y Tribunal Fiscal, podrán ser acusados ante el jurado de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones, faltas graves o la comisión de delitos comunes. La acción es pública y podrá ser ejercida por cualquier persona, y en caso de los integrantes del Poder Judicial podrá también ser promovida por el Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista por esta Constitución.

El jurado será presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia y estará constituido por nueve miembros: tres legisladores abogados, si los hubiere; tres abogados de la matrícula que reunan los requisitos para ser vocales del Superior Tribunal de Justicia; y tres magistrados judiciales incluido el presidente del Superior Tribunal.

Los miembros del jurado serán designados para cada caso, por sorteo en acto público, de la siguiente manera: los diputados, por el presidente de la Cámara; los magistrados, de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras excluida la de paz letrada; y los abogados, de entre una lista de veinte letrados que confeccionará el Colegio de Abogados en diciembre de cada año.

ART. 187°: El cargo de miembro del jurado es honorario e irre-

nunciable. El que sin causa justificada no se incorporase, faltase a las sesiones, no interviniera en el veredicto, o por su inasistencia impidiese el dictado del mismo, incurrirá en una multa igual al total de la retribución mensual de un diputado, la que será ejecutada por Fiscalía del Estado y su monto destinado a la biblioteca de la Legislatura.

ART. 188°: Los miembros del jurado podrán excusarse y ser recusados con causa fundada que la ley fijará, debiendo, en tal caso, integrarse en la forma que prescribe esta Constitución.

ART. 189°: Interpuesta la denuncia y previa la investigación sumaria, el jurado decidirá si hace o no lugar a la formación de la causa. Su resolución terminará el proceso si fuese negativa, y en caso contrario se sustanciará el juicio.

ART. 190°: Mientras se sustancia la causa, el jurado podrá disponer la suspensión con goce de medio sueldo del magistrado o funcionario acusado.

ART. 191°: El jurado pronunciará su veredicto con arreglo a derecho dentro del término de treinta días desde que la causa quedase en estado, declarando al magistrado o funcionario acusado culpable o no de los hechos imputados. En el primer caso será separado definitivamente del cargo y quedará sometido a los tribunales ordinarios; y en el segundo continuará en el desempeño de su cargo.

El jurado deberá comunicar su veredicto a la autoridad correspondiente.

ART. 192°: El juicio quedará terminado necesariamente dentro

de los noventa días hábiles de su iniciación. La suspensión del juicio o la falta de sentencia causará instancia absoluta por el sólo transcurso de los términos establecidos, produciendo idénticos efectos a los fines de la restitución en el cargo que los previstos en el artículo anterior.

ART. 193º: La ley reglamentará el procedimiento del juicio sobre las siguientes bases:

- a) No podrá trabarse el derecho del acusador con impuestos de justicia, sellados de actuación o exigencia de fianzas.
- b) El acusado tendrá derecho a asistencia letrada.
- c) Oralidad y publicidad del juicio.
- d) Prever sanciones que correspondan aplicar en caso de denuncias manifiestamente infundadas o maliciosas.

TERCERA PARTE

REGIMEN EDUCACIONAL Y CULTURAL

C A P I T U L O U N I C O

ART. 194º: La educación propenderá a la reafirmación del ser libre capaz de autodesarrollo sostenido, con sentido de identidad con el entorno, el patrimonio cultural y los valores. Estimulará la responsabilidad, la autenticidad y la creatividad. Asegurará los derechos y las libertades fundamentales. Estimulará vocaciones, formando una conciencia moral, fundada en los postulados de la justicia, la libertad, la democracia, la cooperación y la solidaridad.

ART. 195º: Será común, diversa y simultáneamente humanista, científica-tecnológica, práctica y portadora del porvenir; orientada

a servir para la paz, iniciarse en la vida y afirmar las condiciones del ciudadano.

ART. 196°: Las leyes que organicen y reglamenten la educación común se sujetarán a los principios y reglas siguientes:

- 1) La educación común será obligatoria, y la dada por el Estado, gratuita y laica, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.
- 2) Será de carácter fundamentalmente nacional y tendrá como finalidad dar satisfacción a las necesidades individuales y colectivas de la vida real.

Juntamente con la enseñanza primaria se impartirán conocimientos prácticos relacionados con las actividades agrícolas, ganaderas o industriales, según la preponderancia de unas u otras en los respectivos lugares.

- 3) Podrá ser recibida en escuelas fiscales, particulares y en el hogar. Las escuelas particulares deberán sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y regimen de funcionamiento.

ART. 197°: Los principios establecidos en el artículo precedente, rigen para todos los niveles de enseñanza oficial, que también tendrá caracter asistencia, raigal, creativa, científica y liberadora.

ART. 198°: La educación comprenderá cuatro niveles: pre-primario, primario, medio, terciario no universitario y universitario, y uno especial y de adultos.

ART. 199º: Su organización, integración y administración con excepción de la educación universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación, colegiado y autónomo; constituido por un presidente, docente de carrera en actividad, designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y diez vocales, docentes en ejercicio, dos por cada dirección de nivel, uno designado por el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y uno por elección directa de los docentes de cada nivel. Es obligación del Consejo General articular todos los niveles.

ART. 200º: Cada uno de los niveles de educación y la especial y de adultos, constituirá una dirección general administrada por un director, docente de carrera en actividad, designado por el Consejo General de Educación.

ART. 201º: Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período, y sólo serán removidos por inconducta y mal desempeño de sus funciones.

ART. 202º: El gobierno de la universidad provincial será autónomo y organizado sobre la base de la participación y elección democrática de profesores, estudiantes y egresados.

ART. 203º: En todo medio rural donde hubiere veinte niños en edad escolar, distante cinco kilómetros de otra escuela, se creará una escuela pública de nivel primario, asegurándose su funcionamiento efectivo.

ART. 204º: La obligación escolar se extiende a la enseñanza pre-primaria, primaria común y ciclo básico medio, que deberá

impartirse en escuelas que ofrezcan garantías de estabilidad y eficiencia educacional.

La obligación escolar se considerará subsistente sin límite de edad, mientras no se haya acreditado poseer el mínimo de conocimientos que esta Constitución y la ley exigen. La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado, el cual garantiza el proceso de educación permanente.

ART. 205º: El Estado asegurará el acceso a la educación y su permanencia. Deberá posibilitar la igualdad de oportunidad para todas las personas. Implementará un seguro obligatorio que cubra al educando en todos los niveles de la enseñanza. Asimismo promoverá la renovación y modernización de los contenidos y los medios de enseñanza, que deberán adecuarse a las necesidades regionales.-

ART.206º: Los niveles primario, medio, terciario y especial contemplarán en sus programas normas sobre el manejo de los recursos naturales, la enseñanza de la Constitución, los derechos humanos, el cooperativismo y el mutualismo; fomentarán el aprovechamiento racional de la riqueza regional, propendiendo al federalismo económico, político, social y cultural, contribuyendo a estructurar el paisaje productivo de la región.

ART.207º: La ley de educación dividirá a la provincia, para su descentralización operativa, en regiones a los efectos de la supervisión técnico-pedagógica y administrativa, en los niveles pre-primario, primario y medio.

ART. 208º: El ingreso a la docencia, la designación y moviliza

ción del personal docente, administrativo y de maestranza de las escuelas públicas, corresponde a cada dirección general, con participación de las supervisiones regionales, por listas de orden de méritos y concurso, según lo establezcan las leyes respectivas. Su estabilidad y escalafón estarán asegurados mientras dure su buena conducta e idoneidad.

ART. 209°: Cada nivel de educación tendrá una junta de calificaciones y clasificaciones y un tribunal de disciplina, integrado cada uno por cinco miembros, elegidos democráticamente por sus pares a simple pluralidad de sufragios.

ART. 210°: La jerarquización, promoción, desarrollo y extensión de la educación como servicio público prioritario, obliga al Estado a asegurar para la docencia en todos sus niveles una formación calificada y un regimen de concurso, perfeccionamiento, capacitación y actualización permanentes.

ART. 211°: El Estado asegurará la educación permanente y sistemática y la participación responsable de la comunidad y otros agentes educativos en áreas convencionales y no convencionales tendientes a lograr un complejo educativo de polifuncionalidad temática, de capacitación, actualización y especialización laboral, y de conocimientos, mediante el principio de centralización normativa y descentralización operativa de las acciones.

ART. 212°: La enseñanza particular, privada o no oficial, idéntica en su dignidad, nobleza y vocación, estará sujeta a los controles del Estado provincial: a) Desarrollará programas que contengan el mínimo exigido por los oficiales; b) Respetará el

marco jurídico de la Constitución y las leyes respectivas; c) Deberán ser entidades sin fines de lucro con estructuras participativas; d) El Estado concurrirá al sostenimiento de la enseñanza particular, en la medida que sea necesario para asegurar la prestación del servicio educativo.

ART. 213°: Los fondos destinados a educación considerados como un financiamiento privilegiado, serán no menos de un treinta por ciento de las rentas generales de la provincia, impuestos y otros recursos que imponga la Legislatura destinados a ese fin, otras contribuciones especiales y aportes del Estado nacional y los provenientes de acuerdos, herencias, legados y donaciones. Estos recursos no podrán destinarse a otros fines.

ART. 214°: Parte de dichos fondos, serán destinados al otorgamiento de becas de ayuda escolar y a la capacitación y promoción de los recursos humanos en múltiples disciplinas para lograr la innovación pedagógica, tecnológica-científica y su transferencia. El Consejo General de Educación, estimulará la creación de bibliotecas públicas y asociaciones estudiantiles.

ART. 215°: La provincia garantizará a todos sus habitantes el libre acceso a la cultura, que fomentará y difundirá en todas sus manifestaciones plásticas, artesanales, literarias y folklóricas. Créase un Consejo de la Cultura, integrado por representantes de las instituciones artístico-culturales con personería jurídica. Asimismo, dicha área contará con presupuesto propio y destinado en parte al apoyo material de los artistas en todas sus manifestaciones.

CUARTA PARTE

REGIMEN MUNICIPAL

C A P I T U L O U N I C O

ART. 216°: Esta Constitución reconoce al municipio como una entidad jurídico-política y como una comunidad natural con vida propia e intereses específicos. Es independiente de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, de acuerdo a los principios establecidos en esta Constitución.

ART. 217°: El regimen municipal será organizado teniendo en cuenta el número de habitantes de cada población, determinado por esta Constitución o la ley, en base a los censos nacionales, provinciales o municipales legalmente oficializados, dictándose una ley especial que reconozca la categoría del o los municipios.

ART. 218°: Habrá tres categorías de municipios: de primera, las ciudades de Santiago del Estero, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Frías, Añatuya y las que cuenten con una población que supere los veinte mil habitantes; de segunda: las ciudades de Quimilí, Fernández, Loreto, Clodomira, Monte Quemado y las que cuenten de nueve mil a veinte mil habitantes; y de tercera: de dos mil a nueve mil habitantes.

ART. 219°: Las poblaciones de más de mil y hasta dos mil habitantes estarán regidas por una comisión municipal; y las de hasta mil habitantes por un comisionado municipal. Estos cargos serán ejercidos por vecinos de la localidad con residencia efectiva mínima, en ambos casos, de dos años.

ART.220°: La organización del gobierno comunal se sujetará a las siguientes bases:

1°.a) Los municipios de primera categoría serán autónomos y en consecuencia dictarán su carta orgánica, sin más limitaciones que las que establece esta Constitución. La carta orgánica será dictada por una convención convocada en cada caso por el Departamento Ejecutivo en virtud de ordenanza sancionada al efecto.

b) La convención municipal será integrada por un número de miembros igual al del Concejo Deliberante, elegidos directamente por el pueblo de sus respectivas jurisdicciones por el sistema de representación proporcional.

2°.En los municipios de primera, segunda y tercera categoría,el gobierno será independiente de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones. Estará integrado por un Departamento Ejecutivo a cargo de un intendente y por un Concejo Deliberante compuesto de la siguiente forma:

a) Por dieciocho concejales en los municipios de primera categoría con más de cien mil habitantes.

b) Por doce concejales en los municipios de primera categoría que no superen los cien mil habitantes.

c) Por nueve concejales en los municipios de segunda categoría y seis concejales en los de tercera.

3°.a) Los concejales durarán cuatro años en sus mandatos y podrán ser reelegidos, renovándose el cuerpo por mitad cada dos años.

b) Para ser concejal se requiere tener veintiún años de edad

como mínimo y las demás condiciones establecidas para ser diputado, y dos años de residencia inmediata y efectiva en el municipio que los elige.

La elección de concejales se efectuará en la fecha y en la forma que las cartas orgánicas y la ley determinen, dándose representación a las minorías. Simultáneamente con los titulares se elegirán concejales que reemplazarán a los titulares en la misma forma que los diputados suplentes.

El Concejo Deliberante será el único y exclusivo juez de la validez de las elecciones, de los derechos y títulos de sus miembros, en aquellas municipalidades carentes de carta orgánica.

- c) El intendente será elegido directamente por el pueblo de cada municipio, a simple pluralidad de sufragios. Durará cuatro años en sus funciones, debiendo tener veinticinco años de edad como mínimo y cuatro años de residencia inmediata y efectiva en el municipio que lo elija. Gozarán de un sueldo asignado por el presupuesto municipal. El intendente hará cumplir las ordenanzas del Concejo; anualmente dará cuenta de la marcha de su administración ante éste; ejercerá la representación de la municipalidad y tendrá las demás atribuciones que la carta orgánica o la ley señalen.
- d) Tribunal de Cuentas Municipal: Los municipios de primera categoría crearán el Tribunal de Cuentas dentro de su jurisdicción, con igual -competencia y atribuciones que las conferidas al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Las cartas orgánicas establecerán la forma de integración, las calidades

de sus miembros y la duración de sus mandatos.

4°.El gobierno municipal de las localidades o núcleos urbanos de más de mil y hasta dos mil habitantes será ejercido por una comisión municipal. Esta se integrará por un comisionado asistido por un consejo de vecinos compuesto de tres miembros, elegidos todos ellos directamente por el pueblo a simple pluralidad de sufragios. La ley determinará los requisitos para los cargos de comisionado y consejo de vecinos, su competencia y funcionamiento.

5°.Los gobiernos municipales de los centros urbanos de hasta mil habitantes será ejercido por un comisionado municipal elegido por el pueblo a simple pluralidad de sufragios, con los requisitos, facultades y obligaciones que determine la ley.

6°.Serán electores en el orden municipal todos los argentinos inscriptos en el padrón nacional que corresponda a la jurisdicción municipal y los extranjeros mayores de edad con más de dos años de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción en el padrón municipal.

7°.Las funciones de la municipalidad, sin perjuicio de las que establezcan las cartas orgánicas o la ley, según los casos, se dividirán en las siguientes áreas: hacienda, seguridad, obras y servicios públicos, moralidad, salud y asistencia social, cultura, educación y deportes, recreación y turismo, y se aplicará a las personas, cosas o formas de actividad que caigan dentro de la jurisdicción comunal sin perjuicio

de las concurrentes con la provincia o la nación.

La provincia no podrá vulnerar la autonomía municipal con sagrada en la presente Constitución. En caso de superposición normativa prevalecerá la legislación del municipio en materia específicamente comunal.

8°. Las municipalidades ejercerán sus facultades de administración y disposición de las rentas y bienes propios, así como la imposición respecto de cosas o actividad sometida a su jurisdicción, de conformidad con lo que establezcan las cartas orgánicas o la ley en cuanto a las bases de la imposición, respetando la incompatibilidad de los gravámenes municipales con los provinciales o nacionales.

9°. En lo relativo a los bienes:

- a) Son bienes de las municipalidades los inmuebles fiscales que se encontraren dentro del ejido municipal.
- b) Toda tierra fiscal situada dentro de los límites de cada municipio, salvo la que estuviera reservada o inscrita a la nación o por la provincia para fines determinados, pertenece al patrimonio municipal, lo que deberá ser instrumentado previa determinación de la respectiva jurisdicción territorial.
- c) La ley determinará con carácter uniforme, para todo el territorio provincial, la forma y condiciones de adjudicación de la tierra fiscal de los municipios, tendiendo a asegurar su utilización con fines de interés social. Quedarán excluidas de este régimen las municipalidades que tengan autonomía y el caso se encuentre reglado por sus

respectivas cartas orgánicas.

- d) El catastro de la tierra, la división y/o unificación de inmuebles y los planes reguladores y urbanísticos en las municipalidades de primera categoría y todas aquellas que cuentan con organismos técnicos competentes, corresponderá al municipio, sin perjuicio de la competencia y participación de la provincia para su registración, avalúo y publicidad.

10°. Dispondrán también de los recursos provinciales que se perciban en su jurisdicción en la siguiente proporción:

- a) No menos del veinticinco por ciento como coparticipación de los impuestos provinciales.
- b) No menos del quince por ciento sobre la coparticipación de la provincia en los impuestos nacionales y de todo otro recurso cualquiera sea su denominación, salvo aquellos que tengan un destino específico con cargo de rendir cuenta por parte del gobierno de la provincia. El monto resultante será distribuído en los porcentajes que se indican: cuarenta y ocho por ciento sobre la base de la recaudación; cuarenta y ocho por ciento directamente proporcional a la población; y el cuatro por ciento en forma inversamente proporcional a la población, debiendo ser efectivizados automáticamente por el Poder Ejecutivo.

11°. Podrán celebrar contratos, enajenar sus bienes y afectar su renta conforme a la carta orgánica o a la ley según corresponda.

El Concejo Deliberante podrá autorizar al Departamento Eje

cutivo para contraer empréstitos con objeto determinado, designándose un fondo amortizante al que no podrá darle otras aplicaciones. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta municipal.

La contratación de empréstitos se sancionará con dos tercios del total de miembros del Concejo en los municipios autónomos y con aprobación legislativa en los demás municipios teniéndose presente las restricciones que la ley vigente establece para las municipalidades autárquicas y las que en el futuro se establezcan en las cartas orgánicas para los municipios autónomos, con referencia a la contratación de emprésitos y al otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos con privilegios.

12°. Deberán dar publicidad de sus actos reseñándolos en una memoria anual en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas, como así también el estado de la hacienda municipal.

13°. Procederán a la convocatoria de electores para toda elección municipal, con sesenta días de anticipación, por lo menos, debiendo publicarse suficientemente la convocatoria.

14°. Nombrará los funcionarios y empleados de su dependencia.

15°. Las autoridades municipales electivas tendrán las mismas incompatibilidades que los diputados provinciales y gozarán en el ámbito de su jurisdicción de idénticas inmunidades.

16°. Los municipios podrán celebrar tratados con la Nación, con la provincia y con otros municipios de ésta o de otras pro-

vincias, con fines de interés común, que refuercen el sistema federal de colaboración intercomunal, reconocidos por esta Constitución y la Constitución Nacional.

- 17°. Se reconocerá la existencia y se impulsará la organización de las sociedades intermedias representativas de intereses vecinales, que se integren para promover el progreso, desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos en el orden espiritual, moral, físico, cultural, educacional, sanitario o urbanístico.
- 18°. Cada municipalidad deberá prestar la cooperación requerida por el gobierno de la provincia a fin de hacer cumplir la Constitución de la Nación y la presente, así como las leyes que en consecuencia de ambas se dicten en las respectivas jurisdicciones. Igual obligación regirá respecto del gobierno de la provincia en cuando a la legislación municipal dictada en consecuencia de esta Constitución.
- 19°. Los municipios no podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo provincial sino en caso de acefalía total o para normalizar una situación institucional subvertida y mediante ley sancionada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura, debiendo convocarse a elecciones para reorganizar los poderes intervenidos dentro de los sesenta días de tomar posesión.
- Por las mismas causas y estando en receso la Legislatura, el Poder Ejecutivo podrá intervenir a los municipios. En el mismo decreto deberá convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura. En el caso de intervención por decisión del Po-

der Ejecutivo, la Legislatura puede hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquella.

Durante el tiempo que dure la intervención, el interventor atenderá exclusivamente los servicios municipales ordinarios con arreglo a las ordenanzas vigentes.

Todos los nombramientos que se efectúen tendrán carácter transitorio.

2)°. Las cartas y la ley orgánica de las municipalidades, asegurarán el bien común, la participación y el funcionamiento de entidades intermedias en la gestión administrativa y de servicio público, y garantizarán al electorado municipal el ejercicio del derecho de iniciativa, referendum y revocatoria.

QUINTA PARTE

REFORMA DE LA CONSTITUCION

C A P I T U L O U N I C O

ART. 221°: La presente Constitución no podrá ser reformada en todo o en parte, sino por una convención especialmente elegida para ese objeto por el pueblo de la provincia, en elección directa.

ART. 222°: El pueblo será convocado en virtud de la ley en que se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo, si ésta debe ser general o parcial, y determinando en caso de ser parcial, los artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la reforma. La ley que se de con ese objeto deberá ser sancionada con dos tercios de votos del

número total de miembros de la Cámara, y si fuese vetada, será necesario para su promulgación que insista con igual número de votos.

ART. 223°: La convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria; pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir o completar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe la necesidad o conveniencia de la reforma.

ART. 224°: En el caso del artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir dictando nueva ley de reforma, mientras no haya transcurrido por lo menos un período legislativo, sin contar el que correspondiera a la ley de la reforma.

ART. 225°: Para ser convencional se requiere las mismas calidades que para ser diputado. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo público nacional, provincial o municipal, excepto con los de gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios del Poder Ejecutivo, fiscal de Estado, intendentes municipales, concejales, jefe de Policía, magistrados y funcionarios judiciales e integrantes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipales y Tribunal Fiscal.

ART. 226°: La convención se compondrá de un número de miembros igual al de diputados y gozarán sus integrantes de las mismas inmunidades que éstos desde su proclamación hasta su cese. Serán elegidos por el sistema de representación proporcional.

ART. 227°: El cargo de convencional es irrenunciable. El que

sin causa justificada no se incorporase o faltare al número de sesiones que establezca el reglamento de la convención, incurrirá en una multa igual al total de la retribución mensual de un diputado, la que será ejecutada por Fiscalía de Estado y su producido destinado a la biblioteca de la Legislatura.

ART. 228º: La convención funcionará preferentemente en la capital de la provincia; se instalará en el local de la Legislatura o en el que ella misma establezca. Determinará su duración hasta un máximo de ciento ochenta días a partir de su constitución, que podrá prorrogar en sesenta días más. La Convención tendrá facultades para dictar su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su presupuesto.

La convención es el único y exclusivo juez para expedirse sobre la legitimidad de su constitución e integración.

SEXTA PARTE

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1º: Los diputados actualmente en ejercicio continuarán en el desempeño de sus mandatos hasta completar el período para el que han sido electos.

A los fines de la renovación parcial prevista en el Art.97, en la primera elección legislativa posterior a esta reforma, en la sesión en la que presten juramento los legisladores y previo a éste, se sorteará a los que deban renovarse en el primer período.

ARTICULO 2º: La elección de vicegobernador y de diputados se rea

lizará conjuntamente con la próxima elección de gobernador. Por el período faltante hasta que la misma se efectivice, en caso de ausencia o impedimento temporal del gobernador, éste será reemplazado por el presidente de la Legislatura, por su vicepresidente primero, vice presidente segundo y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, en ese orden. En caso de acefalía se procederá en la forma prevista por el Art. 126.

ARTICULO 3º: En el plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir de la sanción de la presente Constitución, los poderes del Estado procederán a la integración, adecuación y puesta en funcionamiento en su caso, de todas las instituciones y organismos creados o modificados por la presente reforma constitucional.

ARTICULO 4º: En el plazo de ciento ochenta días a contar de la sanción de la presente Constitución, la Legislatura deberá sancionar las leyes que instrumenten las disposiciones del Art. 220, Inc. 9, apartados a) y b), y las que dispongan la realización de un censo poblacional de todas las localidades del interior de la provincia que en el censo nacional de población del año 1980, hayan superado los mil habitantes. Esto último, a los fines de asignarles la categoría que les corresponde.

ARTICULO 5º: El Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá reorganizarse en la forma contemplada en esta Constitución, al finalizar sus actuales integrantes el período previsto por el Art. 147.

ARTICULO 6º: Una comisión compuesta por el presidente y dos

convencionales revisará la forma en que se ha recogido y registrado la sanción de esta convención, hecho lo cual la firmarán conjuntamente con los convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el sello de la convención, se pasará al archivo de la Legislatura, remitiéndose copias a los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la nación y de las provincias y al archivo y al Museo Histórico de la provincia.

ARTICULO 7º: La presente Constitución entrará en vigencia el primero de abril del presente año.

ARTICULO 8º: Disponer que el Boletín Oficial de la provincia - proceda a la publicación de esta Constitución, en el plazo de ocho días a partir de la fecha.

ARTICULO 9º: Téngase por sancionada y promulgada a esta Constitución como ley fundamental de la provincia. Publíquese, regístrese y comuníquese para su cumplimiento.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CONVENCION
CONSTITUYENTE, EN SANTIAGO DEL ESTERO, A QUINCE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.

Fdo: Dr. MARCELO R. AGUERO, Presidente; MARTA AVEJERO DE LOPEZ,
Secretaria; Dr. HECTOR RODOLFO FARIAS, Secretario.

Abalos, Daniel Alberto; Ahuad, Mirtha Adela; Alonso, Ramón Casiano; Avila, Mario Efraín; Basualdo, Mario Angel; Bitar, Asadh; Bitar, Norma Cristina; Cabrera, Julio José; Cabrera, Mundo Ford; Castiglione, Antonio Virgilio; Castillo, Alba Luna Aguirre de; Castillo, Raúl Jorge; Cejas, Gustavo Adalmiro; Cerro, Francisco

Eduardo; Chamorro, Amado Tomás; Collep, Pedro; Curi, Victorio; Díaz, Héctor Rodolfo; Díaz, Julio Eduardo; Farías Julio Bernabé; Feijoo, Jorge Luis; Fiad, Jorge Alejandro; Granda, Miguel Angel; Islas, Bonifacio Ricardo; Juri, Emilio Tomás; Lami Hernández, Alberto José del Valle; Lami Hernández, Francisco José; Leguizamón, Ricardo Alberto; Leturia, Hugo Eduardo; Manfredi, Roger Alberto; Mansilla, Carlos Alberto; Mansilla, Selva Inés; Montenegro, Pío Enrique; Moreno, Ramón Enrique; Navarro, Julio Víctor; Noriega, José Orfando; Oliva Smith, Hugo León; Pece, Fernando Antonio; Peralta Galván, Rubén Amilcar; Rached, Emilio Alberto; Rodrigo, Juan; Rodríguez, Hugo Fernando; Roitman, Juan Domingo; Samez, Ada Beatriz Ramos de; Santillán, José Antonio; Santillán, Rosa Victoria Lund de; Sayago, Luis Adrián; Schammas, Durgam; Sisalle, Federico Pablo; Soria, Pedro Ernesto; Toledo, Eduardo Jesús; Trógolo, Osvaldo José; Vittar, Edgardo Rubén; Vizgarra, Ramón; Volta, Bibiana Meneghini de.

La Comisión Especial a que hace referencia el artículo 6° de las Disposiciones Transitorias, creada para revisar la forma en que se ha recogido y registrado el nuevo texto constitucional, CERTIFICA que la presente es copia fiel de lo sancionado por la Honorable Convención Constituyente.

Fdo: Dr. MARCELO R. AGUERO, Presidente; Dra. AZUCENA BRUNELLO DE ZURITA, Convencional; Dr. ADALBERTO JOSE MACEDO, Convencional.

San Juan

6

SAN JUAN

La Soberana Convención Constituyente de la Provincia de San Juan, en cumplimiento del mandato popular conferido por la ciudadanía, conciente de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, con el objeto de afianzar los fundamentos institucionales que profundicen la democracia participativa en lo político, económico, social y cultural, defendiendo la autonomía provincial, municipal, protegiendo el disenso y el pluralismo, estimulando el progreso y consolidando una sociedad abierta y solidaria, enaltecida por el respeto al libre conocimiento y la racionalidad como principio en el tratamiento y resolución pacífica de los conflictos, dispuesta a la modernización con justicia y capacitada para rechazar toda forma de autoritarismo en un marco de libertad, igualdad, bienestar general y pleno respeto por la familia, los derechos humanos y por todo goce que no afecte concretamente a los demás habitantes, establece y ordena esta Constitución.

SECCION PRIMERA

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

C A P I T U L O I

SISTEMA POLITICO

ARTICULO 1º- La Provincia de San Juan, con los límites que por derecho le corresponden, como Estado autónomo e inescindible de la República Argentina, organizado bajo el sistema republicano, democrático, representativo y participativo, mantiene para sí todo el poder no delegado expresa y literalmente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional a la que reconoce como Ley Supre-

ma, sumando las que sean de ejercicio compartido, concurrente o conjunto.

SOBERANIA POPULAR

ARTICULO 2º- Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la provincia de San Juan, el que se ejerce por medio de sus legítimos representantes en la forma y modo que establece esta Constitución. También se reconoce igual legitimidad a otras formas de participación democrática.

SEDE DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO 3º- Todas las autoridades que ejerzan el gobierno central, deben funcionar en forma permanente en la Ciudad de San Juan, Capital de la provincia, salvo por razones de carácter extraordinario, debiendo la ley fijar la sede en estos casos.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

ARTICULO 4º- El Estado Provincial garantiza a través de todos sus actos el logro pleno de la democracia participativa, en lo económico, político, social y cultural.

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION POLITICA Y SOCIAL

ARTICULO 5º- El bienestar y la elevación de la dignidad de la persona, basados en la libertad, en el conocimiento y en la solidaridad económica, social, constituyen premisas básicas en la organización política y social de San Juan.

MODIFICACION DE LIMITES

ARTICULO 6º- Para modificar los límites territoriales de la provincia, por cesión anexión, o de cualquier otra forma, como igualmente para ratificar tratados sobre límites que se celebren,

se requiere la ley sancionada con el voto de las tres cuartas partes de los miembros que componen la Cámara de Diputados y aprobación por consulta popular, sin cuyos recaudos no será promulgada.

DIVISION POLITICA

ARTICULO 7º- El territorio de la provincia se divide en diecinueve departamentos a saber: Albardón, Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum Valle Fértil, 25 de Mayo y Zonda, con sus actuales límites determinados por ley, los que no pueden ser modificados sin previa consulta popular en los departamentos involucrados.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 8º- La provincia como persona jurídica de carácter público estatal, puede ser demandada ante la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno. No puede trabarse embargo preventivo sobre sus bienes o rentas. Encaso de condena la Cámara de Diputados arbitra por ley la forma de pago. Si no lo hiciere en el término de tres meses de ejecutoriada la sentencia, puede ser ejecutada en la forma ordinaria.

Exceptúase de esta disposición las rentas y bienes especialmente afectados en garantía de una obligación.

PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

ARTICULO 9º- Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo que la ley determine, garantizando

su plena difusión, en especial aquellos relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial. La violación a esta norma provoca la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que les corresponda a los intervinientes en el acto.

MANIFESTACION DE BIENES

ARTICULO 10°- Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y aquellos que por esta Constitución estén obligados a manifestar sus bienes lo harán por sí, su cónyuge y familiares a su cargo, ante la escribanía mayor de gobierno, a excepción de los intendentes y concejales que lo harán conforme a lo establecido en la Sección IX.

DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTICULO 11°- Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Ley Suprema de la Nación o a esta Constitución, carecen de valor y los jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por parte, previo conocimiento a las mismas. La inconstitucionalidad declarada por la Corte de Justicia de la provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente.

DERECHOS IMPLICITOS

ARTICULO 12°- La enumeración de libertades, derechos y garantías,

establecidos en esta Constitución, no deben entenderse como la negación de otros derechos, libertades y garantías no enumeradas, siempre que fluyan del espíritu de esta, de la Constitución Nacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

INTERVENCION FEDERAL

ARTICULO 13º- Las intervenciones que ordene el gobierno de la Nación, deben circunscribir sus actos de gobierno a los determinados en la ley que las disponga y a los derechos, declaraciones, libertad y garantías expresados en esta Constitución. Los nombramientos o designaciones realizados tienen el carácter de transitorios.

TESORO PROVINCIAL

ARTICULO 14º- El Estado provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial, formado por el producido de los tributos de los empréstitos y operaciones de crédito aprobados por ley para urgencias de la provincia o para empresas de utilidad pública, de los servicios que preste de la administración de los bienes de dominio público, y de la disposición o administración de los del dominio privado, de las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no denegados a la Nación; de la coparticipación que conviene de los impuestos federales recaudados por los organismos competentes, de las reparaciones que obtenga del erario nacional por los efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos y de otros recursos tributarios o no tributarios creados

por ley.

C A P I T U L O I I

DERECHOS INDIVIDUALES

DERECHOS DE LAS PERSONAS

ARTICULO 15°- La vida, la integridad moral, física, psicológica y socio cultural, son derechos inviolables de las personas.

ARTICULO 16°- Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos . . Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que por negligencia en sus funciones, produzca efectos similares. El Estado repara los daños provocados. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida.

ARTICULO 17°- Los funcionarios cuya culpabilidad fuera demostrada, respecto a los delitos mencionados en el artículo, anterior, serán sumariados y exonerados del servicio a que pertenecieren, quedando de por vida inhabilitados en la función pública, sin perjuicio de las penas que por ley le correspondieren.

DESAPARICION DE PERSONAS

ARTICULO 18°- Toda acción u omisión conducente a la desaparición de personas y quienes resulten directa o indirectamente responsables son castigados con la máxima severidad prevista por las leyes.

RESPETO A LA PERSONA

ARTICULO 19°- Toda humillación a la persona por motivos de instrucción, condición socio-económica, edad, sexo, raza, naciona-

lidad, religión, ideas o por cualquier otra causa, es castigada severamente.

PERSONA Y ESTADO

ARTICULO 20º- Compete a la persona la concepción, búsqueda y elección de alternativas para el logro de su felicidad y al Estado asegurar la progresiva y acelerada eliminación de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las personas.

LIBERTAD RELIGIOSA

ARTICULO 21º- La religión pertenece a la órbita privada del individuo. Nadie está obligado a declarar su religión. El Estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos que no se opongan a la moral pública y buenas costumbres, ni a la organización política y civil establecida por esta Constitución y las leyes de la provincia.

DEFENSA DE LOS DERECHOS

ARTICULO 22º- Todos los habitantes de la provincia, tienen derecho a defender su vida, libertad, reputación, seguridad, propiedad, intimidad, culto como así a enseñar y aprender, a una información veraz y a los demás consagrados en esta Constitución. El Estado protege el goce de estos derechos de los que nadie puede ser privado, sino por vía de penalidad con arreglo a la ley, anterior al hecho del proceso y previa sentencia de juez competente. En el caso de incorporación de la pena de muerte en la legislación nacional, para su aplicación en la provincia se requiere pronunciamiento unánime de los miembros de la Corte de Justicia.

LIBERTAD DE CREACION

ARTICULO 23º- Es libre la creación intelectual artística y científica. Esta libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obras científicas, literarias o artísticas, incluyendo la protección legal de los derechos del autor.

IGUALDAD ANTE LA LEY

ARTICULO 24º- Los habitantes de la provincia tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la que da igualdad de oportunidades y es aplicada de manera uniforme para todos. Cada habitante tiene el deber de contribuir de acuerdo con sus posibilidades al bienestar común y el correlativo derecho de participar en sus beneficios.

LIBERTAD DE EXPRESION

ARTICULO 25º- Todos tienen derecho de expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho de informarse sin impedimentos ni discriminación.

No puede ser impedido ni limitado el ejercicio de estos derechos por ninguna forma de censura.

La infracción que se cometa en el ejercicio de estos derechos está sometida al régimen punitivo establecido por ley y a su apreciación corresponde a la justicia ordinaria sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes nacionales.

Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta gratuitamente y con la extensión máxima

de la información cuestionada; en caso de negativa, el afectado podrá recurrir a la justicia dentro de los quince días posteriores a la fecha de la publicación o emisión, transcurridos los cuales caducará su derecho . El trámite ante la justicia será el del procedimiento sumarísimo. La crítica política, deportiva, literaria y artística en general, no está sujeta al derecho de réplica.

En ningún caso puede disponerse la clausura o cierre de los talleres, emisoras u oficinas donde se desenvuelvan las empresas periodísticas.

El secuestro de las ediciones o materiales de prensa puede ser dispuesto por juez competente en causa judicial abierta al efecto.

REGISTROS DE PERSONAS E INFORMATICA

ARTICULO 26º- Todo ciudadano tiene derecho a tomar conocimiento de lo que de él conste en forma de registro y de la finalidad a que se destinan las informaciones, pudiendo exigir la rectificación de datos, así como su actualización.

No se puede utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se destine para fines estadísticos no identificables.

DERECHO A LA INFORMACION

ARTICULO 27º- Todos los habitantes tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo teniendo también el derecho al libre acceso a las fuentes de

información , salvo en asuntos vitales para la seguridad del Estado. El tiempo de la reserva se fijará por ley.

Los registros de antecedentes personales harán figurar en las certificaciones que emitan solamente las causas con condenas no cumplidas contra el interesado, salvo solicitud de autoridad judicial o del mismo interesado. No hay restricción alguna para introducir publicaciones, distribuirlas en el interior de la provincia, programar, organizar y asistir a congresos de carácter provincial, nacional o internacional. La información en todos sus aspectos es considerada como de interés público.

MEDIOS DE COMUNICACION

ARTICULO 28°- Queda prohibido el monopolio y oligopolio de medios de comunicación por parte de entes públicos o privados de cualquier naturaleza

ARTICULO 29°- Se aplican las normas del código Penal a los delitos que se cometieren a través de la prensa o por cualquier otro medio de comunicación social.

PRINCIPIO DE INOCENCIA

ARTICULO 30°- Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada en debido proceso. Queda abolido el sobreseimiento provisional.

DETENCION DE PERSONAS

ARTICULO 31°- Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma, sin orden escrita de autoridad

competente en virtud de grave sospecho o indicios vehementes de la existencia de hecho punible y motivos fundados de su presunta culpabilidad.

Tampoco puede condenarse penalmente por deudas en causas civiles, salvo que por conducta dolosa pudiere encuadrarse en el Código Penal.

Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional.

En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva se cumplen en las cárceles públicas destinadas a penados, ni pueden estos ser enviados a establecimientos fuera del territorio de la provincia, tampoco pueden prolongarse. Las tres primeras, por más de veinticuatro horas, sin ser comunicadas al juez competentes, poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes del caso, y la última, más allá del término fijado por la ley para la finalización del procedimiento, salvo sentencia condenatoria dictada con anterioridad a dicho término, caso contrario recupera inmediatamente su libertad. Toda persona arrestada o detenida, debe ser notificada por escrito en el momento en que se haga efectiva la medida, de la causa de la misma, autoridad que la dispuso y lugar donde será conducida, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta dentro de las veinticuatro horas a un familiar del detenido o a quien este indique, a los efectos de su defensa. Puede excarcelarse o eximirse de prisión al imputado o procesado

por un delito, con o sin fianza, la ley establece los casos y las modalidades de las mismas.

HABEAS CORPUS

ARTICULO 32º- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad competente o a quien arbitrariamente se le niegue, prive, restrinja o amenace en su libertad, puede por si o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante un juez letrado inmediato, a fin de que ordene su libertad, o que se somete a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación, restricción o poder de autoridad pública. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal.

El juez, dentro de las veinticuatro horas examina el caso y hace cesar inmediatamente la afectación, si ésta no proviene de autoridad competente, o si no cumple los recaudos constitucionales y legales.

Dispone asimismo las medidas que corresponden a la responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó el acto.

Cuando un juez esté en conocimiento de que alguna persona se halle arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario, un particular, o un grupo de éstos, debe expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus.

El juez del hábeas corpus ejerce su postestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública.

Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el juez del hábeas corpus. La ley establece las sanciones que correspondan a quienes rehusen o descuiden ese cumplimiento.

DEFENSA EN JUICIO

ARTICULO 33º- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones.

Nadie puede ser obligado a declarar ni a prestar juramento en causa penal, contra sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.

Ninguna persona puede ser indagada en instancia policial o judicial, sin asistencia letrada necesaria, aunque esta no fuera requerida o solicitada. La ley no puede atribuir a la confesión - hecha ante la policía, valor probatorio en su contra.

Es penada toda violencia física o moral debida a pruebas psicológicas o de cualquier otro orden que altere la personalidad del individuo, sujeto o no a alguna restricción de su libertad. Queda abolido el secreto del sumario para las partes intervinientes. No puede ser incomunicado ningún detenido, salvo que medie resolución fundada de juez competente en los casos y en la forma que la ley determina, no pudiendo exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas.

ORALIDAD

ARTICULO 34º- La provincia propende al establecimiento del juicio

oral y público.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

ARTICULO 35º- El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada y familiar de la persona. No se puede efectuar registro domiciliario alguno sino en virtud de orden escrita de juez competente, en los casos y forma determinada por ley, siempre en presencia de representantes del Poder Judicial, contralor de su morador y/o testigo.

Los infractores del precepto anterior son responsables por violación de domicilio y por abuso de autoridad, estando además obligados a indemnizar integralmente a la persona dañada conforme a la ley.

ALLANAMIENTO

ARTICULO 36º- Toda orden de allanamiento de domicilio debe ser expedida por autoridad judicial competente y con las formalidades que determine la ley. La medida se ejecutará en horas de luz natural, salvo que el juez autorice expresamente hacerlo en horas nocturnas.

INVIOLABILIDAD DE PAPELES PRIVADOS

ARTICULO 37º- Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las comunicaciones telegráficas, teletipeado o de cualquier otra especie o por cualquier otro medio de comunicación, son inviolables y nunca puede hacerse registro de la misma, examen o intercepción, sino conforme a las leyes que se establecieron para casos limitados y concretos. Los que sean sustraídos,

recogidos u obtenidos en contra de las disposiciones de dichas leyes, no pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos.

CUSTODIO DE PRESOS

ARTICULO 38º- Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir y conservar en su poder la orden de detención: caso contrario, es pasible de las sanciones previstas por la ley vigente. La misma obligación de exigir la indicada orden bajo igual responsabilidad, incumbe al ejecutor del arresto o detención.

CARCELES

ARTICULO 39º- Las cárceles de la provincia deben ser sanas, limpias para seguridad y rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto de precaución conduzcan a mortificar a los internos. No existirán en las cárceles pabellones de castigo sino de corrección. No se aplicarán sanciones que impliquen disminución de ración alimentaria, agua, retiro de ropa y abrigo , destrucción de bienes de cualquier tipo, propiedad de los internos. El Estado creará establecimientos para encausarlos, contraventores, y simples detenidos: debe garantizarse la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas. La violación de las garantías expuestas es severamente castigada, no pudiendo el personal correccional de ningún grado ampararse en la eximente de la obediencia debida.

ACCION DE AMPARO

ARTICULO 40º- Procede la acción de amparo contra todo acto u

omisión de autoridad, órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de particulares que, en forma actual o inminente, lesione o restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho individual o colectivo o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio, la lesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza no deba sustanciarse, por alguno de los procesos establecidos por ley o no resultare eficaz hacerlo. El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública.

Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que impartta el juez del amparo.

La ley reglamentará la forma sumarísima de hacer efectiva esta garantía.

AMPARO POR MORA

ARTICULO 41º- Toda persona que sufre un perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública en forma expresa y determinada, puede demandar ante el juez competente la ejecución inmediata del o los actos que el funcionario o entidad pública rehusa cumplir. El juez, previa comprobación sumarísima de los hechos denunciados y el derecho invocado,

librará el mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento inmediato del deber omitido.

LIBERTAD DE TRANSITO

ARTICULO 41º- Todo individuo tiene el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio de la provincia llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de terceros.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

ARTICULO 43º- El que en ejercicio de funciones públicas viole - por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesiones los intereses confiados al Estado es personalmente responsables de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado.

DELEGACIONES DE PODERES Y FUNCIONES

ARTICULO 44º- Los poderes públicos no pueden delegar las facultades que esta Constitución les otorga. Sólo pueden delegarse con expresa indicación de su alcance y condiciones quedando sujetas al control del delegante. La delegación puede ser revocada cuando el delegante lo resuelva, sin perjuicio de los derechos definitivamente adquiridos con motivo de su aplicación. El Poder Judicial no puede delegar en ningún caso sus facultades jurisdiccionales. Tampoco los funcionarios públicos pueden delegar sus funciones en otra persona, salvo en los casos previstos en esta Constitución y en la ley. La delegación no exime de res-

ponsabilidad al delegante ni al delegado.

ADMISION E INCOMPATIBILIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO

ARTICULO 45°- Todos los habitantes sin discriminación alguna pueden acceder a los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad. El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos. Para los extranjeros no hay otras limitaciones que las establecidas en esta Constitución. No pueden acumularse dos o más empleos públicos a sueldo en una misma persona, aún en los casos en que uno de ellos sea nacional y el otro provincial o municipal, con excepción de la docencia.

En cuanto a los empleos gratuitos, la ley determina los casos de incompatibilidad.

ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO

ARTICULO 46°- Ningún empleado de la provincia con más de seis meses consecutivos de servicio, puede ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, su contracción y eficiencia para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuya designación o cese se hubieren previsto normas especiales por esta Constitución o por las leyes respectivas.

C A P I T U L O I I I

DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTIAS POLITICAS

PARTICIPACION POLITICA

ARTICULO 47°- Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir información de carácter po-

lítico, de manera individual o colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos establecidos por ley, tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos de la provincia directamente o por medio de representantes libremente elegidos y tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad y libertad, a las funciones públicas.

PARTIDOS POLITICOS

ARTICULO 48º- Se reconoce y asegura la asistencia de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público no estatal. Las candidaturas para cargos que se provean mediante elección popular serán nominadas exclusivamente por los partidos políticos. Deben garantizar la democracia participativa en su desarrollo institucional. Los partidos contribuyen democráticamente a la formación de la voluntad popular, expresando pluralismo político. El Estado garantiza y promueve su libre acción.

C A P I T U L O I V

DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTIAS SOCIALES

DERECHO DE ASOCIARSE.

ARTICULO 49º- Queda asegurado en la provincia el derecho de asociarse, cualquiera sea su objeto, siempre que no afecta disposiciones legales vigentes.

Las asociaciones solo pueden ser intervenidas conforme a la ley y no son disueltas en forma compulsiva, sino en virtud de sentencia judicial.

DERECHO DE REUNION Y MANIFESTACION

ARTICULO 50°- Los habitantes tienen derecho a reunirse sin autorización pacíficamente y sin armas, incluso en los lugares abiertos al público, como a manifestarse individual y colectivamente.

DERECHO DE PETICION

ARTICULO 51°- Queda asegurado a los habitantes de la provincia el derecho de petición individual o colectiva ante sus autoridades. En ningún caso una reunión de personas puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo ni petitionar en su nombre. Los que lo hicieren cometen delito de sedición.

PROTECCION DE LA FAMILIA

ARTICULO 52°- El Estado asegura la protección integral de la familia, como elemento natural espontáneo y fundamental de la sociedad, promueve la autosatisfacción económica de la unidad familiar, elabora programas de apoyo materno-infantil, y sistemas de protección para los problemas económicos y sociales de la infancia y la ancianidad.

PROTECCION MATERNA

ARTICULO 53°- El Estado protege la maternidad con asistencia integral y garantiza una satisfactoria realización personal de la madre con plena participación laboral, intelectual, profesional, cívica y posibilita el cumplimiento de su esencial función familiar.

PROTECCION DE LA NIÑEZ

ARTICULO 54°- Los niños tienen derecho en especial los huérfanos, y abandonados, a protección estatal contra cualquier forma de

de discriminación, de opresión o autoritarismo, en la familia y demás instituciones. Es obligación del Estado atender a la nutrición suficiente de los menores hasta los seis años de edad como mínimo. Se creará un registro de esa minoridad carente a efectos de individualizar a los beneficiarios. Toda falsa declaración dirigida a obtener los beneficios de la prestación alimentaria será sancionada.

GARANTIA PARA LA JUVENTUD

ARTICULO 55°- Los jóvenes gozan de garantías especiales, a fin de lograr en igualdad de oportunidades, acceso a la creatividad, a la crítica racional, la formación profesional, la educación física y el aprovechamiento y goce del tiempo libre.

PROTECCION DE LOS DISCAPACITADOS

ARTICULO 54°- El Estado debe instrumentar políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y mentales, incluidas las acciones que apunten a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad para con ellos.

PROTECCION A LA ANCIANIDAD.

ARTICULO 57°- El Estado y los habitantes deben prougnar la protección de los ancianos y a su integración social y cultural evitando su marginación, con la finalidad de que éstos puedan llevar a cabo tareas de creación libre, de realización personal y de servicio para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA

ARTICULO 58°- Los habitantes tienen derecho a un ambiente huma-

no de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo.

Corresponde al Estado Provincial por sí o mediante apelación a iniciativas populares prevenir y controlar la contaminación y sus efectos, y las formas perjudiciales de erosión ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados; crear y desarrollar reservas y parques naturales así como clasificar y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico. Toda persona puede pedir por acción de amparo la cesación de las causas de la violación de estos derechos.

El Estado debe promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad de vida de todos sus habitantes.

BIEN DE FAMILIA

ARTICULO 59º- El hogar de familia es inembargable, Todo propietario de un terreno rural o urbano que este o llegué a estar libre de gravamen y no adeudase impuestos ni contribuciones, tiene derecho a declarar ante la autoridad y a su elección un lote que se reputará bien de familia. Esa declaración tiene por efecto hacer a la vivienda inembargable, inajenable e inescindible, pudiendo únicamente ser cedido a otra familia con la conformidad del Poder Ejecutivo. Mientras queden en la familia menores, mujeres solteras y discapacitados tienen derecho al lote hogar. El lote hogar sólo reconocerá el pago de tasas y contribuciones.

DERECHO A LA VIVIENDA

ARTICULO 60°- El Estado propugna el logro de una vivienda digna para todos los habitantes de la provincia. Se posibilitará el acceso a la madre soltera.

DERECHO A LA SALUD

ARTICULO 61°- El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, a través de medidas que la aseguren para toda persona, sin discriminación ni limitaciones de ningún tipo.

La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con realización de medidas concretas, y a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a garantizar el derecho de salud.

El Estado asigna a los medicamentos el carácter de bien social básico, garantizará por ley el fácil acceso a los mismos.

La actividad de los profesionales de la salud deben considerarse como función social.

Se propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la solución de los problemas de salud y a la creación de institutos de investigación.

DERECHOS Y GARANTIAS DEL TRABAJADOR

ARTICULO 62°- Todo habitante tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su ocupación. El trabajo es considerado de-

recho y deber de carácter social y como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana y de su familia.

El Estado Provincial en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en todas sus formas y aplicaciones y en particular asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador, promueve el pleno empleo y estimula la creación de nuevas fuentes de trabajo. Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de los conflictos laborales, individuales o colectivos, por la vía de la conciliación obligatoria y el arbitraje, como mediante el establecimiento de tribunales especializados con un procedimiento breve y expedito, concede el beneficio de la gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los trabajadores y sus organizaciones.

Además compete a este a través de una legislación adecuada y de la implementación de planes y programas de política económica y social, garantiza a los trabajadores.

- 1) Una retribución mínima, vital y móvil, suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
- 2) El derecho de la retribución de su trabajo se la cantidad, naturaleza y calidad del mismo con observancia del principio a trabajo igual salario igual reconocimiento al que realiza el ama de casa.
- 3) Su formación cultural técnica y profesional tanto en las

zonas urbanas como en las rurales.

4) La seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso, quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, ideológicos o sociales. La ley creará garantías contra el despido en masa.

5) El derecho a la asistencia material de quienes se encuentran temporal o involuntariamente en situación de desempleo.

6) El derecho a la obtención de una jubilación digna y móvil con un haber que permita mantener el nivel de vida precedente.

Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, teniendo en cuenta que:

- 1) El trabajo manual e intelectual poseen idéntica dignidad social.
 - 2) El trabajo nocturno es mejor remunerado que el diurno.
 - 3) Otorgue una especial protección al menor que trabaja, quedando prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años en actividades incompatibles con su edad.
 - 4) Se limite la duración de las jornadas de trabajo en razón de edad y naturaleza de la actividad laboral.
 - 5) Garantice el descanso semanal y las vacaciones periódicas remuneradas, el bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud y la moral estén debidamente preservadas.
- Los trabajos nocturnos, peligrosos e insalubres, deben ser convenientemente regulados y controlados.
- 6) La vivienda que se proporcione al trabajador debe ser higiénica, funcional y sismorresistente.

AUTOGESTION Y COGESTION

ARTICULO 63°- El Estado Provincial alienta la autogestión y la cotestión en las empresas.

SEGURO SOCIAL

ARTICULO 64°- Todos los trabajadores de la Provincia públicos o privados tienen derecho al seguro social integral e irrenunciable. A este fin se establecerá la legislación provincial tendiente a la creación de mecanismos con autonomía financiera y económica, administrado por los interesados con participación estatal.

ORGANIZACION SINDICAL

ARTICULO 65°- Se garantiza la libre organización de los trabajadores en sindicatos.

Las organizaciones sindicales deben regirse por principios de gestión democrática, basados en la elección periódica de sus autoridades por votación secreta de sus afiliados. La participación de las minorías en la dirección de los mismos queda garantizada según las exigencias de un mínimo de representatividad.

Los sindicatos son independientes de los partidos políticos de las instituciones religiosas y del Estado.

TRABAJADORES AUTONOMOS

ARTICULO 66°- La Provincia promueve la agremiación de los trabajadores autónomos para la defensa de sus derechos.

GARANTIAS SINDICALES

ARTICULO 67°- El Estado garantiza a los sindicatos los siguien-

tes derechos.

- 1) De ser requeridos sin otro requisito que la inscripción en un registro especial.
- 2) De concertar contratos o convenios colectivos de trabajo, por los gremios más representativos de cada rama, los que tendrán fuerza de ley.
- 3) De huelga como medio de defensa de los derechos, de los trabajadores y de las garantías sociales. No se puede tomar contra los participantes de ella ninguna medida represiva, mientras no pongan en peligro evidente la seguridad de la población.
- 4) De ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus empleos y la licencia sindical.

POLICIA DEL TRABAJO

ARTICULO 68º- El Estado creará por ley el organismo administrativo de aplicación, para ejercer el derecho indelegable de control o policía del trabajo. Por intermedio de esta dependencia se asegurará el fiel cumplimiento en todo el territorio de la provincia, de las leyes laborales y de las convenciones colectivas de trabajo.

En todos los casos debe aplicarse la norma más favorable al trabajador

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

ARTICULO 69º- Los consumidores tienen derecho a organizarse con la finalidad de defender la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos.

La ley regulará las organizaciones de consumidores que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento debe ser libre, democrática y con participación de minorías.

CARGA PUBLICA

ARTICULO 70°- La alfabetización, la cooperación en la lucha contra plagas y epidemias, la ayuda activa en casos de accidentes, inundaciones terremotos y otros siniestros con considerados carga pública, la ley determinará la operatividad de tales deberes.

C A P I T U L O V

EDUCACION Y CULTURA

DERECHO A LA EDUCACION Y CULTURA

ARTICULO 71°- La educación y la cultura son derechos humanos fundamentales.

DEMOCRACIA, PLURALISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

ARTICULO 72°- El Estado promueve la democracia cultural, estimulando el acceso y participación de los habitantes en la cultura y en la creatividad dentro de ese campo.

Se garantiza el patrimonio y el pluralismo cultural.

FINES DE LA EDUCACION

ARTICULO 73°- La educación propende al desarrollo de la inteligencia, a la formación de una ética humanitaria y de hombres aptos para la libertad, la tolerancia, la paz, la solidaridad fraterna y la adhesión al sistema de vida democrática.

OBJETIVOS DE LA EDUCACION

ARTICULO 74°- La investigación científica y las normas del método científico son especialmente consideradas en los distintos niveles de enseñanza.

ARTICULO 75°- Se promueve la originalidad, la creatividad, el conocimiento actualizado, el goce estético y el rigor del razonamiento, basados en la independencia y honestidad intelectual.

DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION

ARTICULO 76°- Se promueve la democratización de la educación a través de estilos de participación que coadyuven a la libre formación de ideas, planteos de problemas y búsqueda de soluciones.

LIBERTAD DE CATEDRA

ARTICULO 77°- Se reconoce y garantiza la libertad de cátedra.
SELECCION DE EDUCADORES.

ARTICULO 78°- Se prohíbe toda discriminación de los educadores, fundada en sus convicciones e ideas. Para la selección de educadores se tiene en cuenta la capacidad, la actualización científica y demás condiciones que determine la ley.

FUNCIONES DE LA FAMILIA Y DEL ESTADO

ARTICULO 79°- El Estado reconoce a la familia como agente natural de la cultura y la educación .

La educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del Estado. El Estado garantiza los medios suficientes, a fin de asegurar la orientación vocacional y laboral, sostenimiento y mejoras de establecimientos educativos del Estado,

y para los educandos que lo necesiten, la salud psicofísica la nutrición y la canasta escolar.

El Estado legitima la expedición y vigencia de los títulos y certificados de estudio.

PRINCIPIOS BASICOS DE LA ENSEÑANZA ESTATAL

ARTICULO 80°- La enseñanza que imparte el Estado es obligatoria, gratuita, no confesional, integral, asistencial, democrática y exaltará los principios de solidaridad y cooperación humana.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ARTICULO 81°- El Estado garantiza igualdad de oportunidades y de posibilidades educativas para todos los habitantes.

ACCESO A LA EDUCACION

ARTICULO 82°- El Estado garantiza el acceso y facilita la permanencia y reinserción de la población escolar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, proveyendo de unidades escolares suficientes para atender adecuadamente la matrícula según los lineamientos pedagógicos y proveerá los recursos humanos necesarios.

EDUCACION OBLIGATORIA

ARTICULO 83°- La educación inicial y primaria es obligatoria y gratuita. Cumplidos estos niveles, la educación continúa siendo obligatoria y gratuita en la forma y hasta el límite que establezca la ley. Los contenidos programáticos y la enseñanza integral de las Constituciones Nacional y Provincial,

son obligatorios en todos los establecimientos educacionales, de la provincia. También es obligatoria la enseñanza de los derechos humanos.

Se promueve la educación sexual y la enseñanza de, por lo menos, un idioma extranjero en todos los niveles educativos.

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION

ARTICULO 84º- Se acordará un presupuesto que asegure el total desarrollo de los planes y de la política educativa, considerando las necesidades inmediatas, el crecimiento demográfico las remuneraciones adecuadas, el constante mejoramiento de los servicios y la clasificación de los gastos, de acuerdo con los objetivos y las prioridades señaladas para cada nivel educativo.

ORGANIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

ARTICULO 85º- El Estado estructura un sistema de educación integrado por niveles y modalidades, que responda a las necesidades provinciales y regionales.

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA EDUCACION

ARTICULO 86º- El gobierno y la administración de la educación son ejercidos por un Ministerio.

ADMINISTRACION ESCOLAR

ARTICULO 87º- En cada una de las escuelas de la provincia, en los distintos niveles y en la forma que lo determine la ley, funcionará un Consejo Académico integrado de la siguiente forma, en la educación inicial y primaria, por un director y representantes de docentes y padres de los alumnos, en el nivel medio por un director y representantes de docentes, padres de

alumnos y estudiantes y, en el nivel terciario, por un director, alumnos, docentes y egresados. Los integrantes de la comunidad educativa son electos por votación secreta y directa de sus pares.

ACTUALIZACION . PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE.

ARTICULO 88°- El Estado atiende al perfeccionamiento profesional permanente del docente, a través de equipos interdisciplinarios, de actualización y capacitación docente integrados por especialistas en ciencias, artes y filosofía. El Poder Ejecutivo designa al coordinador general de los equipos interdisciplinarios. El acceso a los equipos se llevará a cabo a través de concursos de oposición y antecedentes cada seis años.

GABINETE TECNICO DE EDUCACION

ARTICULO 89°- Con el objeto de detectar orientar y prevenir las dificultades surgidas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el Estado asiste a la población escolar en cada establecimiento educativo mediante gabinetes técnicos interdisciplinarios conforme lo determine la ley.

CENTROS DE INVESTIGACION. INFORMACION Y DOCUMENTACION EDUCATIVA.

ARTICULO 90°- El Estado crea y fomenta centros de investigación, información y documentación educativa interconectados e implementa políticas de cooperación y asistencia a nivel regional, nacional e internacional.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

ARTICULO 91°- El Estado fija un plan de seguimiento de los egresados a fin de corregir cursos de acción en relación a los resultados y objetivos propuestos.

EDUCACION PERMANENTE

ARTICULO 92°- El Estado garantiza la educación permanente en relación a las demandas de la sociedad, creando organismos específicos de jurisdicción estatal.

ALFABETIZACION

ARTICULO 93°- El Estado y la sociedad propenden a la alfabetización de todos sus habitantes, arbitrando los medios necesarios para impedir y combater la deserción escolar y el analfabetismo, a través de programas socio económicos, culturales y técnicos implementados al efecto.

EDUCACION EN ZONAS RURALES Y AREAS DE FRONTERA

ARTICULO 94°- El Estado fomenta, afianza y revitaliza la función de la escuela rural y municipal como eje de la comunidad a que pertenece; también aplica una política que atiende a la educación en las áreas de frontera y de población dispersa.

EDUCACION NO FORMAL

ARTICULO 95°- El Estado organiza métodos y técnicas de educación, no formales, a fin de complementar la formación de los educandos. Los medios educativos incluyendo los de comunicación masiva concurren en apoyo de la misma, destacando especialmente la educación a distancia.

ARTICULO 96°- El Estado promueve la organización, sostenimiento y difusión de museos, bibliotecas populares y de un sistema de bibliotecas públicas de carácter general que garantice el libre acceso al conocimiento a toda la población y fomente el hábito y goce por la lectura, cuyo funcionamiento y distribu-

ción geográfica será regulada por ley.

DERECHOS DEL DOCENTE

ARTICULO 97°- El Estado reconoce y asegura el derecho del docente a: el libre ejercicio de la profesión, carrera profesional según sus méritos, ingreso, ascenso y estabilidad, y al perfeccionamiento permanente.

ENSEÑANZA PRIVADA

ARTICULO 98°- El Estado reconoce la libertad de enseñanza. Autoriza y controla el funcionamiento de institutos de enseñanza privada, según el régimen legal dictado por el gobierno provincial.

C A P I T U L O V I

CIENCIA Y TECNICA

DECLARACIONES

ARTICULO 99°- El Estado reconoce a la Ciencia y a la Técnica como una de las bases de nuestra civilización, como un medio idóneo para lograr mejores condiciones de vida resolviendo complejos problemas, superando limitaciones que afecten a la sociedad y para ampliar las fronteras del conocimiento humano sin límite alguno.

POLITICA

ARTICULO 100°- El Estado fija en el ámbito de la Provincia, las políticas en Ciencia y Técnica que contribuyen a la consolidación de un sistema científico tecnológico, integrado en la estructura nacional y que posibilite la transferencia de los

resultados a los diversos ambitos de la sociedad. Fija los objetivos y prioridades, atendiendo a los requerimientos del desarrollo autonomo en lo social, cultural y economico.

APLICACION

ARTICULO 101°- El Estado estimula la incorporación de los resultados generados en el sistema científico, nacional y provincial, para aumentar la eficiencia de las organizaciones públicas y privadas, mejorar la producción y la transformación de las materias primas y de todas las actividades ligadas al mejoramiento individual y colectivo de los habitantes de la Provincia.

PROMOCION DE INVESTIGACIONES

ARTICULO 102°- El Estado es promotor de la actividad científica . Propicia la adhesión a planes nacionales e internacionales de investigación y desarrollo que tienden a la transferencia de tecnología, creación de centros de excelencia y formación de recursos humanos.

TECNOLOGIA DE AVANZADA

ARTICULO 103°- El Estado estimula el desarrollo y usos de tecnología de avanzada y con alto valor agregado, relacionándola con la transformación y progreso socio económico de la Provincia.

ACCESO Y DIVULGACION

ARTICULO 104°- Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y la técnica. El Estado propende,

a través de la implementación de planes especiales, a la divulgación de la actividad científica y de sus resultados en todos los estratos de la sociedad, sin discriminación de ninguna clase.

CREACION DE INSTITUTOS Y FUNDACIONES

ARTICULO 105°- El Estado propende a la creación de institutos de investigación científica, especialmente en áreas de interés de la Administración Pública, y alienta la constitución de fundaciones con fines científicos y tecnológicos.

C A P I T U L O V I I

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS ECONOMICAS

PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

ARTICULO 106°- El crecimiento y modernización de la economía es principio fundamental en el desarrollo de todo programa de política económica promovido por el Estado y la Sociedad.

FUNCION SOCIAL DE LA ECONOMIA

ARTICULO 107°- La actividad económica de la Provincia está al servicio del hombre y es organizada conforme a los principios sociales de esta Constitución. El Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y la comunidad, pudiendo regular las actividades económicas a estos efectos.

PROMOCION ECONOMICA

ARTICULO 108°- El Estado encausa la economía de la provincia mediante una legislación adecuada y fomenta:

- 1) La explotación de sus recursos naturales y materias primas.

2) El crédito y las industrias, el consumo, el intercambio al servicio de la sociedad, asegurando el imperio del método democrático de la regulación planificada de la producción, circulación y distribución de la riqueza o cualquier otra manifestación de la economía. El Estado sólo puede ejercer determinada actividad económica cuando el bien común lo requiere y esa función tendrá carácter subsidiario.

3) La radicación de empresas creadoras de fuentes de trabajo, especialmente aquellas que transformen recursos naturales y materiales primas. Una ley reglamentará esta promoción y radicación.

LEGISLACION TRIBUTARIA

ARTICULO 109º- Solo por ley expresa se crean , mocionan o suprimen tributos y se conceden exenciones y otros beneficios tributarios.

La tribuación se rige por los principios de igualdad, generalidad, certeza, obligatoriedad y economía de la recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria.

Ningún tributo tiene efecto retroactivo, salvo los que deben percibirse durante el año fiscal, y en una misma fuente no pueden superponerse gravámenes de igual naturaleza o categoría, cualquiera fuera su denominación.

Es indelegable la competencia tributaria sobre los tributos, que conforme al sistema rentístico federal, le corresponden exclusivamente en la Provincia.

El Estado Provincial propende a la coparticipación federal de impuestos basada en el principio de solidaridad y a la uniformidad de la legislación tributaria.

PRESPUESTO PROVINCIAL

ARTICULO 110°- La Administración económica y financiera del Estado Provincial se rige por el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados.

En dicha ley no pueden constar disposiciones ajenas a la materia presupuestaria ni a su aplicación.

Todo ingreso o egreso del Estado debe ajustarse a ella, como asimismo la creación o supresión de los cargos o servicios públicos.

Las empresas del Estado se rigen por propio presupuesto.

DERECHO DE PROPIEDAD

ARTICULO 111°- El derecho de propiedad es inviolable. La propiedad tiene una función social y en consecuencia está sometida a lo que la ley establezca . Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización de las tierras fiscales urbanas y rurales, e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su aprovechamiento en interés dela comunidad, a fin de procurar que cada trabajador o familia pueda adquirirlas en propiedad.

EXPROPIACION

ARTICULO 112°- Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, posesión o uso sino por sentencia firme fundada en ley u ordenanza . Sólo podrá expropiarse por razones de utilidad

pública o bienestar general calificadas por ley u ordenanza y previa indemnización. Si la finalidad no se cumpliera, fuere desvirtuada o las obras no se iniciaren dentro del término de tres años el expropiado podrá reclamar devolución fijándose las compensaciones a que hubiere lugar.

DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES

ARTICULO 113°- La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosas, las fuentes naturales de energía hidroeléctrica, solar geotérmica o de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su aprovechamiento puede realizarlo por si o por convenios con la Nación, con otras provincias o con terceros, nacionales o internacionales, para su prospección, exploración y/o explotación, como también su industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de las regalías o retribución a percibir. El Estado Nacional no podrá disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el previo acuerdo de esta, expresado por ley.

FUNCION DE LA TIERRA

ARTICULO 114°- La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional.

COLONIZACION

ARTICULO 115°- El régimen de división, adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes previos de colonización con fines de fomento que prevean:

- 1) La distribución por unidades económicas individuales de tipo familiar, de acuerdo a su calidad y destino, evitando el minifundio.
- 2) La explotación directa y racional por el adjudicatario
- 3) La adjudicación preferencial a cooperativas
- 4) La seguridad del crédito a largo plazo y bajo interés con destino a la construcción de viviendas, equipamiento y producción.
- 5) El trámite sumario para el otorgamiento de los títulos o resguardos de derechos una vez cumplida, las exigencias legales - por parte de los adjudicatarios.
- 6) La retrocesión por vía de expropiación o resolución del contrato en favor de la Provincia en caso de incumplimiento de los fines de la adjudicación.
- 7) Inalienabilidad de la tierra durante el término que fuera ley y no menor de veinte años.
- 8) El asesoramiento y asistencia técnica permanente a los agricultores y ganaderos a través de los organismos competentes del Estado nacional, provincial o municipal.

FORESTACION

ARTICULO 116°- La Provincia promoverá la forestación y reforestación de su suelo. Una ley determinará las normas promocionales de esas actividades, así como la explotación racional de esos recursos naturales.

REGIMEN DE AGUAS

ARTICULO 117°- Corresponde a la Provincia reglar el uso y aprove-

chamiento de todas las aguas del dominio público existente en su territorio. La Provincia puede conceder en la forma que determine una ley, el uso de las aguas para la agricultura y otros fines especiales. Tales concesiones no podrán limitar el derecho de la Provincia de usar esas aguas para sus fines de interés general

El derecho natural de usar el agua para bebida de las personas, necesidades domésticas o abrevaderos, queda sujeto a los reglamentos generales que dicte la autoridad competente.

La concesión de uso y goce del agua para beneficio y cultivo de un predio, constituye un derecho inherente e inseparable del inmueble y pasa a los adquirentes del dominio, ya sea a título universal o singular.

ADMINISTRACION DE LAS AGUAS

ARTICULO 118°- Todos los asuntos que se refieran al uso de las aguas públicas, superficiales o subterráneas, están a cargo del Estado Provincial en la forma que determine la ley.

- 1) Para abastecimiento a poblaciones o explotaciones agrícolas.
- 2) Para usos industriales o energía hidráulica, que emplean caudales de ríos, lagos, arroyos o canales o ubican sus instalaciones en las márgenes o lechos. Estos permisos podrán otorgarse siempre que no impliquen consumo de agua sino en mínima proporción, sean por tiempo limitado y no perjudiquen los cultivos realizados en los derechos ya concedidos.

OBRAS HIDRAULICAS.

ARTICULO 120°- Las obras fundamentales de aprovechamiento de -

aguas y su distribución mediante canales, deben ser dispuestas por ley.

SECCION SEGUNDA

DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y DE LA DEMOCRACIA

SUBVERSION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

ARTICULO 121°- Los que se alcaren en armas para cambiar la - Constitución, sustituirla o dejarla en suspenso o aplicarla parcialmente, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno provincial, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir aunque fuere temporalmente el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o su renovación en los términos y formas legales, como así también los funcionarios políticos que en la Provincia formaren parte del gobierno de facto que surgiere de aquel alzamiento o subversión de cualquiera de las formas de vida democrática, reciben el trato de traidores a la Patria y son pasibles de las sanciones que - la Lye determine. Los funcionarios del régimen constitucional - que teniendo responsabilidades omitieren la ejecución de actos en defensa de aquel sistema, serán pasibles del mismo tratamiento previsto precedentemente.

ALZAMIENTO

ARTICULO 122°- Cualquier fuerza armada, policial o de seguridad que actuara de la forma anteriormente descripta o intentare hacerlo estará actuando contra esta Constitución y sus miembros serán pasibles de exoneración y/o castigo en relación a su participación.

DERECHO A RESISTIR

ARTICULO 123°- El pueblo de la Provincia no está obligado a obedecer a los sediciosos y puede resistir sus órdenes, conforme al derecho que le asiste a cada habitante para armarse en defensa de esta Constitución .

NULIDAD Y RESPONSABILIDADES

ARTICULO 124°- Los actos de los sediciosos o fuerzas ilegales o de los civiles irregulares de la política son nulos. Los ejecutores de esos actos son responsables administrativa y civilmente y en forma solidaria, por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado y con el principio de la responsabilidad objetiva , por el solo hecho de participar, avalar o consentir tales actos.

OBEDIENCIA DEBIDA

ARTICULO 125°- En la situación de gobierno ilegal, no rige el principio de obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el mando.

ASOCIACIONES INCONSTITUCIONALES

ARTICULO 126°- La Provincia no reconoce asociaciones, cualquiera que fueran sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades reconocidas en esta Constitución, al sistema pluripartidista o que atenten contra el sistema democrático en que la misma se inspira.

INHABILITACION PERPETUA

ARTICULO 127°- Los funcionarios públicos que ejercieren funciones de responsabilidad política en los tres poderes del Estado Nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto o pertenezcan a las organizaciones referidas en el artículo anterior, no podrán

ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la Provincia o municipios, a perpetuidad.

SECCION TERCERA

SISTEMA ELECTORAL

CAPITULO UNICO

CUERPO ELECTORAL

ARTICULO 128°- El cuerpo electoral de la Provincia se integra con todos los ciudadanos, varones y mujeres, con capacidad para ser electores y que inscriptos en el registro cívico se domicilien en la Provincia.

DERECHO ELECTORAL

ARTICULO 129°- La ley reglamentará el derecho electoral con carácter uniforme para toda la Provincia de conformidad con las siguientes bases mínimas:

- 1)- El voto es universal, libre, igual y secreto. Será obligatorio u optativo en los casos que lo determine la ley.
- 2)- Los electores serán aquellos ciudadanos mayores de dieciocho años que se encuentren en las condiciones previstas en esta Constitución y la ley, la que podrá reducir la edad mínima hasta los dieciseis años, pero no incrementarla.
- 3)- Las fuerzas armadas y de seguridad encargadas de preservar el orden comicial, estarán subordinadas a las autoridades del comicio:
- 4)- Cada elector sufragara personalmente;
- 5)- El elector no podrá ser detenido por autoridad alguna durante

las horas en que se desarrolle el comicio, excepto en el caso de flagrante delito;

6)- Determinará la participación de los representantes de los partidos políticos en el proceso electoral y establece las inhabilitaciones para sufragar como así también los delitos ,faltas electorales y las sanciones que les correspondan.

TRIBUNAL ELECTORAL

ARTICULO 130°- Habrá un tribunal electoral permanente integrado por dos miembros de la Corte de Justicia designados por sorteo público y por el Fiscal General de la Corte de Justicia con asiento en la Provincia. Duran cuatro años en sus cargos y funcionarán en la forma que la ley determine.

SECCION CUARTA

PODER LEGISLATIVO

C A P I T U L O I

CAMARA DE DIPUTADOS

INTEGRACION DE LA CAMARA

ARTICULO 131°- El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por una Cámara de Diputados integrada por un representante por cada uno de los departamentos en que se divide la Provincia. Conforme a lo establecido en esta Constitución. Cada departamento es considerado como distrito electoral único para la elección de su representante a simple mayoría de sufragios. Además está integrada por un diputado cada veinte mil habitantes elegidos por el sistema de representación proporcional tomando la Provincia

como distrito electoral único. La ley puede aumentar pero no disminuir la base de representación determinada para cada diputado elegido por el sistema proporcional.

El Número de habitantes que determina el de diputados, es el del último censo oficial nacional o provincial legalmente practicado.

DURACION

ARTICULO 132º- Los diputados duran cuatro años en sus funciones inician y concluyen sus mandatos en la misma oportunidad en que lo haga el Poder Ejecutivo, y pueden ser reelegidos . El diputado suplente que se incorpore en reemplazo de un titular, completará el término del mandato de éste.

SUPLENTE

ARTICULO 133º- Con la elección de diputados titulares se eligen también dos suplentes para cada uno de los representantes departamentales, considerándose además suplentes a los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos para distrito único que no hubieran resultado electos, según el orden establecido.

REEMPLAZOS

ARTICULO 134º- En caso de vacancia de un representante titular, este será reemplazado por el suplente cuando correspondiere a un representante departamental, y el que le sigue en el orden en la lista partidaria, cuando fuere un representante elegido por el sistema proporcional. Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata, debiendo comunicarse al candidato que lo -

sigue de acuerdo al orden establecido para que se incorpore.

REQUISITOS PARA SER DIPUTADO

ARTICULO 135°- Para ser diputado se requieren las siguientes condiciones:

- 1) Ser nativo de la Provincia o tener tres años de residencia inmediata y continua en ella.
- 2) Tener veintiun años de edad a la fecha de incorporación al cuerpo.
- 3) Tener ciudadanía natural en ejercicio o legal, después de cuatro años de obtenida.
- 4) Los representantes departamentales deben además de ser electores en el departamento que representen, con un año de residencia real, inmediata y continua.

INHABILIDADES

ARTICULO 136°- No pueden ser miembros de la Cámara de Diputados:

- 1- Los militares en actividad
- 2- Los condenados en causa criminal mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena
- 3- Los quebrados fraudulentos mientras no sean rehabilitados, y los deudores del fisco, cuando se hubiere dictado sentencia en su contra y esta estuviere ejecutoriada.

INCOMPATIBILIDADES

ARTICULO 137°- Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con los de funcionarios.

INMUNIDAD DE OPINION

ARTICULO 138º- Los miembros dela Cámara que no puedan ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de sus mandatos. Todo agravio cualquiera sea su naturaleza y forma, recaiga contraun miembro de la Cámara dentro o fuera de éste por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón - del cumplimiento de sus deberes de legislador es ofensa a la misma Cámara, que debe ser reprimida conforme a la ley.

INMUNIDAD DE ARRESTO

ARTICULO 139º- No puede ser arrestado ningún miembro de la Cámara desde el día de su elección hasta el de su cese excepto en el caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso que merezca pena privativa de libertad, en este caso el juez que ordene la detención dará cuenta dentro de tres días a la Cámara, con la información sumaria del hecho.

DESAFUERO

ARTICULO 140º- La Cámara, al conocer el sumario puede allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse alienado de hecho si la Cámara no hubiese resuelto el caso dentro de los diez días siguientes en que se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta de votos presentes en la sesión, en cuyo caso el - detenido será puesto inmediatamente en libertad.

ARTICULO 141º- Cuando se formule denuncia criminal por escrito contra un diputado, la Cámara recibirá el sumario enviado por el

Juez y examinado en juicio público en la sesión próxima a la que se dio cuenta del hecho, puede con dos tercios de votos sorprender en sus funcionaes al acusado, quedando a disposición del juez competente para su juzgamiento.

ASIENTO

ARTICULO 142°- El asiento de la Cámara de Diputados estará en la Ciudad de San Juan, allí realiza todas sus sesiones, a menos que por razones de seguridad y excepcionalmente se resolviera hacerlo en otro lugar de la Provincia.

SESIONES PUBLICAS

ARTICULO 143°- Las sesiones de la Cámara son públicas a menos que la gravedad o el interés en los asuntos a tratar exigieran hacerlas secretas y así lo resuelva el cuerpo, por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes.

JURAMENTO

ARTICULO 144°- Al tomar posesión del cargo, los diputados prestan juramento o promesa en la forma que lo determina el Reglamento de la Cámara.

C A P I T U L O I I

FUNCIONAMIENTO

PRESIDENCIA

ARTICULO 145°- El Vicegobernador de la Provincia es el Presidente de la Cámara de Diputados pero no tiene voto, excepto en los casos que empate. La Cámara nombra anualmente en su primera sesión ordinaria, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo da. entre sus integrantes, quienes cuando ejerzan la presidencia

de la Cámara tendrán voto y decidirán en caso de empate.

DECISIONES

ARTICULO 146°- Las decisiones de la Cámara son por simple mayoría de votos, salvo los casos el que expresamente esta Constitución prevea otra mayoría.

FACULTADES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 147°- La Uámara es el único juez de las faltas cometidas dentro o fuera de su recinto contra el orden de sus sesiones, y puede reprimirlas hasta con el arresto que no pase del término de dos días, con las limitaciones expresadas en esta Constitución.

REGLAMENTO

ARTICULO 148°- La Cámara de Diputados dicta su propio Reglamento Interno.

INVESTIGACIONES

ARTICULO 149°- La Cámara puede, por medio de sus comisiones o comisionando a alguno de sus miembros, examinar el estado del tesoro público, investigar sobre la gestión de funcionarios de la administración y a aneitdades privadas en cuanto en estas estuvieren comprometidos interess del Estado, y resolver en cuanto al resultado de lo examinado o investigado. En todos los casos no se debera interferir en el área de atribuciones de otros poderes y se deberán resguardar los derechos y garantíasindividuales. La Uámara puede solicitar los informes que crea convenientes a personas públicas y privadas de cualquier naturaleza. Para practicar allanamientos debe requeurir autorización de jue competente.

DECISIONES

ARTICULO 146°- Las decisiones de la Cámara son por simple mayoría de votos, salvo los casos en que expresamente esta Constitución prevea otra mayoría.

FACULTADES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 147°- La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro o fuera de su recinto, contra el orden de sus sesiones, y puede reprimirlas hasta con el arresto que no pase del término de dos días, con las limitaciones expresadas en esta Constitución

REGLAMENTO

ARTICULO 148°- La Cámara de Diputados dicta su propio Reglamento Interno.

INVESTIGACIONES

ARTICULO 149°- La Cámara puede, por medio de sus comisiones o comisionando a alguno de sus miembros examinar el estado del tesoro público, investigar sobre la gestión de funcionarios de la administración y a entidades privadas en cuanto en estas estuvieren comprometidos intereses del Estado y resolver en cuanto al resultado de lo examinado o investigado. En todos los casos no se deberá interferir en el área de atribuciones de los otros poderes y se deberán resguardar los derechos y garantías individuales. La Cámara puede solicitar los informes que crea convenientes a personas públicas y privadas de cualquier naturaleza. Para practicar allanamientos debe requerir autorización de juez competente.

C A P I T U L O I I I

ATRIBUCIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

ATRIBUCIONES

ARTICULO 150°- Son atribuciones de la Cámara de Diputados:

1) Dictar las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución sin alterar su espíritu.

2) Aprobar o desechar los tratados o convenios que el Poder Ejecutivo acuerde con el Estado Nacional, otras provincias o municipios del país, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, estados extranjeros u organismos internacionales.

Si el pronunciamiento no se produjese en el término de noventa días de efectuada su presentación a la Cámara, el tratado se considerará aprobado, salvo en el supuesto de tratados o convenios con estados extranjeros organismos internacionales o entes extranjeros en que se considerará rechazado.

3) Establecer tributos en todo el territorio de la provincia - destinados al servicio de la administración, seguridad y bienestar del pueblo.

4) Aprobar, modificar o rechazar el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos que remita el Poder Ejecutivo anualmente para el período subsiguiente o por uno mayor, siempre que no exceda el término del mandato del gobernador en ejercicio. Si la Cámara rechaza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, rige el del año anterior.

La Cámara no dará aprobación a ninguna Ley de presupuesto en la que no se hubiere dispuesto una distribución de gastos anuales

no inferiores al seis por ciento para el Poder Judicial y uno por ciento para el Poder Legislativo.

5) Efectuar el control y evaluar la conveniencia, oportunidad y mérito de las cuentas de inversión sobre la gestión presupuestaria ejecutada y que remite el poder administrador, aprobándolas o rechazándolas.

6) Establecer o modificar los límites de los departamentos de la Provincia, tomando como base los antecedentes históricos, su extensión y población con el voto de los dos tercios de sus miembros.

7) Reconocer nuevos municipios en razón del número de sus pobladores e importancia de las actividades que allí se realicen, conforme a lo que se establece en esta Constitución.

8) Dictar la ley orgánica de los municipios de segunda y tercera categoría . En los casos de escisión o fusión se debe llamar a consulta popular a todos los electores de los municipios involucrados.

9) Crear y suprimir empleos no indicados por esta Constitución para la administración de la Provincia determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación. Una ley puede establecer la carrera administrativa determinando las condiciones de idoneidad requeridas para el ingreso a ese cargo normas de funcionalidad y demás deposiciones sobre la materia.

10º) Acordar amnistia salvo las relacionadas con los entes comprendidos en la Sección segunda de esta Constitución.

11) Otorgar honores por servicios de gran importancia prestados

a la Provincia. Conceder pensiones y recompensas de estímulo, no pudiendo decretarse estas a favor de los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos.

12) Declarar las causales de utilidad pública o de interés general para expropiaciones por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que ha de hacerse la previa indemnización.

13) Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, determinando sus intereses y las bases y condiciones para su amortización, emitir títulos públicos y cualquiera otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.

14) Legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial.

15) Arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial.

16) Acordar subsidios a las municipalidades, y dictar leyes de coparticipación tributaria para estas.

17) Autorizar la cesión de terrenos e inmuebles fiscales con objeto de utilidad social expresamente determinada, debiendo contar para ello con los dos tercios de los votos de sus miembros.

18) Recibir el juramento al gobernador, al Vicegobernador o a quien lo reemplace y considerar y resolver sobre sus renunciaciones.

19) Resolver sobre licencia al gobernador o a quien lo reemplaza para salir fuera de la provincia, cuando su ausencia fuere por un período mayor de treinta días.

20) Elegir senadores al Congreso de la Nación en la forma que lo determine la Constitución Nacional e instruirles para su gestión en el Senado de la Nación cuando se trate de asuntos en que

resulten involucrados los intereses de la Provincia.

21) Crear la institución de Defensor del Pueblo el que será designado para la defensa de los derechos comprendidos en la sección primera de esta Constitución y aquellos cuyo ejercicio, por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos, no puede ser promovido por persona o grupo de personas en forma individual. En el ejercicio de la acción de amparo por amenazas o violación de tales derechos o intereses, tiene participación necesaria y la representación conjunta con los interesados.

22) Crear la Comisión de Control y Seguimiento Legislativo con facultades suficientes para verificar la ampliación de las leyes.

23) Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese en el término y con la anticipación determinada por la ley.

24) Dictar o modificar los códigos electoral, de procedimientos judiciales y administrativos, de talas rural, bromatológico, de aguas, fiscal y otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia provincial.

25) Establecer sanciones a sus miembros cuando entorpezcan por acción u omisión la integración del quorum o la labor parlamentaria.

26) Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea necesaria, entendiéndose denegado el acuerdo para nombramientos si dentro de los treinta días de recibida la comunicación del poder Ejecutivo. La Cámara no se hubiese expedido .

- 27) Designar a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura a los magistrados judiciales, Fiscal General de la Corte de Justicia, titulares del Ministerio Público y Fiscal del Estado.
- 28) Pedir informes al Poder Judicial, relativos a la administración de justicia.
- 29) Disponer con los dos tercios de los votos del cuerpo, la disolución de los Concejos Deliberantes municipales o la intervención de su Departamento Ejecutivo, cuando se hubieren producido graves conflictos de poderes entre ambos o se hubieren comprobado graves irregularidades en la gestión de los negocios públicos.
- 30) Designar en la primera sesión ordinaria el legislador titular y suplente que representen a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

C A P I T U L O I V

CLASE, ORIGEN, FORMACION, SANCION DE LAS LEYES Y COMISIONES QUORUM

ARTICULO 151°- La Cámara de Diputados sesiona con la presencia de la cuarta parte de sus miembros, pero para tomar resoluciones se requiere la presencia de la mitad más uno.

ARTICULO 152°- La Cámara de Diputados se reúne en sesiones ordinarias, todos los años desde el primer día hábil del mes de abril hasta el último del mes de noviembre, pudiendo por sí sola prorrogarlas, hasta un término de treinta días.

ARTICULO 153°- La Cámara de Diputados puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, o por el presi-

dente del cuerpo, cuando así lo solicite la tercera parte de sus miembros, en este último caso, la Cámara llamará a sesionar dentro de los ocho días de recibida la petición.

VALIDEZ DE TITULOS. REMOCION

ARTICULO 154º- La Cámara de Diputados es el único juez de la validez de la elección, título, correcciones, remoción y exclusión de sus miembros, puede, con dos tercios de los votos presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física, psíquica, legal o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlos de su seno. En todos estos casos debe asegurarse al legislador su derecho de defensa, las sesiones en que se trate la remoción de un legislador son públicas si este no solicitare lo contrario. Para decidir sobre la renuncia que voluntariamente hicieren a sus cargos los Diputados, bastará la simple mayoría de los votos de los presentes.

INTERPELACION

ARTICULO 155º- La Cámara de Diputados puede llamar a su Sala a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que se estimen convenientes, previa comunicación de los puntos a informar y explicar; aquellos están obligados a concurrir a tales fines en la sesión inmediata, si en la nota de aviso no se hubiera determinado fecha exacta. El plazo para concurrir no puede ser inferior a los diez días.

El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir a la Cámara de Diputados cuando estime conveniente, en reemplazo del o los mi-

nistros interpelados.

CLASE DE LEYES

ARTICULO 156°- Las leyes pueden ser:

- 1°) Decisorias, aquellas que son dictadas como decisiones legislativas para generar diversas posiciones de gobierno dirigidas a la satisfacción del bien común. Las decisiones legislativas se adoptan según el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes con los dos tercios de votos de los miembros presentes y no pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo.
- 2°) De base o programas legislativos, son aquellas dirigidas a establecer el marco normativo dentro del cual se deben desenvolver la legislación técnica reglamentaria. Las leyes de base están sujetas al trámite ordinario de formación legislativa establecida en esta Constitución.
- 3°) Técnicas o reglamentarias, son aquellas de regular a regular en detalle el ejercicio de los derechos, la labor de gobierno o la legislación prevista en el apartado anterior. Esta legislación puede ser dictada por el Poder Ejecutivo quedando sujeta al trámite de aprobación hecha por parte de la Cámara de Diputados, según las disposiciones de esta Constitución.
- 4°) Medidas, son aquellas dirigidas a resolver o disponer sobre situaciones no recurrentes de carácter administrativo las cuales son aprobadas por el trámite abreviado en el seno de las comisiones internas de la Cámara. Cuando este tipo de leyes implican un acto de control, no pueden ser objeto de veto por el Poder Ejecutivo.

DE NECESIDAD Y URGENCIA

ARTICULO 157º- El Poder Ejecutivo puede dictar leyes de necesidad y urgencia cuando las circunstancias no hicieren posible aplicar alguno de los trámites ordinarios dispuestos por esta Constitución. En estos casos en el mismo acto, el Poder Ejecutivo debe, bajo sanción de nulidad, elevar la respectiva ley a la Cámara de Diputados, para su consideración. Si el cuerpo se encontrare en receso, dicha elevación sirve de acto de convocatoria y las leyes de necesidad y urgencia serán ratificadas o rectificadas en el término de treinta días. Si en ese período no hubiere pronunciamiento de la Cámara, la ley quedará aprobada, Rectificada o vetada la ley por el Poder Legislativo, no pueden quedar afectados los derechos adquiridos como consecuencia de su aplicación.

No pueden ser materia de la legislación de necesidad y urgencia las decisiones legislativas, ni las de base o programas legislativos, ni las atribuciones otorgadas por esta Constitución al Poder Legislativo en el artículo 150, salvo en sus incisos 1, 3, 9, 12 ,14 y 16 primera parte.

ORIGEN DE LOS PROYECTOS

ARTICULO 158º- Las leyes pueden tener origen en proyecto. presentados por Diputados, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial en los casos autorizados en esta Constitución.

TRAMITE ORDINARIO

ARTICULO 159º- El reglamento de la Cámara de Diputados determina el trámite ordinario en la presentación de proyectos, estudio,

consideración y sanción de las leyes.

TRAMITE ESPECIAL

ARTICULO 160°- Las leyes técnicas o reglamentarias, en cuanto a su formación y sanción, se ajustan al trámite ordinario previsto en este capítulo cuando los proyectos fueran presentados por Diputados. Pero cuando el proyecto fuera elaborado por el Poder Ejecutivo tendrá trámite especial consistente en tenerla por sancionada si dentro de los treinta días de ingresado a la Cámara, ésta no le formule observaciones o no la vete en forma total.

En este último supuesto el Poder Ejecutivo sólo puede insistir una vez más, durante el mismo período legislativo. En el supuesto de un veto parcial el Poder Ejecutivo debe adecuarlo a las observaciones formuladas por la Cámara de Diputados o insistir en ello las veces que estime conveniente. En el supuesto del veto total o parcial en este tipo de leyes, por parte de la Cámara de Diputados, este cuerpo puede decidir abocarse a su tratamiento debiendo seguir en tal caso el trámite ordinario para su formación y sanción, esta circunstancia debe ser comunicada al Poder Ejecutivo. En materia de legislación penal o tributaria, la Cámara de Diputados tiene el poder exclusivo del tratamiento de los respectivos proyectos y esta facultad no puede ser delegada.

REQUISITO PARA LA APROBACION FICTA

ARTICULO 161°- La Cámara de Diputados no puede utilizar el procedimiento de aprobación ficta para las leyes técnicas o reglamentarias, sino cuando medie con antelación el dictado por

parte del cuerpo de una ley de base sobre la materia que se trate . La Cámara de Diputados puede obviar la sanción de leyes de base cuando decida asumir por sí la labor técnica reglamentaria.

DESPACHO DE COMISION

ARTICULO 162°- Las comisiones interna de legisladores tienen la atribución de producir despacho en el trámite de formación de leyes medidas, con el alcance que los respectivos proyectos obtienen sanción legislativa, si los mismos no son observados en la primera sesión de tablas de la Cámara . Basta que uno solo de los bloques de legisladores acreditados haga observación al proyecto o que se solicite que el mismo sea tratado en plenario para que aquel vuelva a comisión a esos efectos.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

ARTICULO 163°- Las leyes de base o programas legislativos tienen que ser compatibles con las leyes decisorias, la restante legislación con las referidas leyes y con las de base o con los programas legislativos, siendo aplicable a dichos efectos el procedimiento de control de constitucionalidad previsto por esta Constitución.

Las leyes decisorias, las de base y los programas legislativos, solo pueden ser modificadas en una sesión de la legislatura especialmente convocada al efecto.

ADECUACION REGLAMENTARIA

ARTICULO 164°- Cuando la Cámara de Diputados sancione una ley decisoria o de base o programa legislativo, sobre materia que

hubiere sido objeto con anterioridad, de legislación técnica o reglamentaria, quedan implícita y automáticamente derogadas todas las disposiciones operativas resulten incongruentes a la nueva legislación. En tales supuestos la Cámara y/o el Poder Ejecutivo según correspondiere, arbitrarán lo pertinente para la sustitución, modificación o adecuación de la reglamentación técnica o reglamentaria.

COMISIONES

ARTICULO 165°- La Cámara de Diputados formará comisiones internas según las materias que establezca su reglamento interno encargado de intervenir en la preparación del material legislativo previsto en esta Constitución. Ellas estarán integradas respetando la proporción de la representación parlamentaria del plenario de la Cámara.

LABOR PARLAMENTARIA

ARTICULO 165°- Una comisión de labor parlamentaria establecerá el orden de la tarea legislativa. Determina, en cada caso, cual es el tipo de legislación que debe tratar la Cámara, a los efectos de fijar el respectivo procedimiento para la formación y sanción de las leyes.

ATRIBUCIONES

ARTICULO 167°- En el seno de las comisiones legislativas pueden producirse resoluciones, declaraciones y pedidos de informes, así como realizar homenajes, en los términos de las previsiones reglamentarias y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo anterior.

REMISION

ARTICULO 168º- Cuando un proyecto de ley es sancionado por la Cámara de Diputados, esta lo remite dentro de los cinco días al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique. El Poder Ejecutivo puede vetar dicho proyecto. Si la clase del mismo lo permite según esta Constitución. Este veto puede ser total o parcial, y debe ser hecho dentro del término de diez días.

VETO TOTAL O PARCIAL

ARTICULO 169º- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara y si esta insistiese en su sanción, con dos tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse el proyecto en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el Poder Ejecutivo, este sólo podrá promulgar la parte no vetada, si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto, previa decisión favorable en tal sentido por parte de la Cámara de Diputados.

PROMULGACION TACITA

ARTICULO 170º- Las leyes sancionadas, comunicadas al Poder Ejecutivo dentro de los últimos diez días de clausurada la Cámara, sólo se entenderán vetadas enviando a la Secretaría de la misma el mensaje del caso, sin cuyo requisito se las tendrá por promulgadas.

FORMULA

ARTICULO 171º- En la sanción de las leyes se usarán las fórmulas. "La Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan sanciona con fuerza de ley" o "El Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan sanciona con fuerza de ley", según correspondiere.

COMISION PERMANENTE

ARTICULO 172º- La Cámara de Diputados designará antes de entrar en receso una comisión permanente de su seno; a la que corresponderán las siguientes funciones según la actividad de la administración, ejercitar los poderes de la Cámara de Diputados según el mandato dado por sus miembros promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones legislativas.

SECCION QUINTA

PODER EJECUTIVO

C A P I T U L O I

NATURALEZA Y DURACION

EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

ARTICULO 173º- El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un gobernador y en su defecto por un vicegobernador elegido de la manera prescripta en esta sección y según las condiciones que en ella se establecen.

REQUISITOS

ARTICULO 174º- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere.

- 1) Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero o argentino natura-

lizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía.

2) Tener treinta años de edad

3) Ser elector y tener cinco años de domicilio inmediato en la Provincia, a no ser que la ausencia y la falta de inscripción en el registro cívico sea debido a servicio para la Nación o la Provincia.

DURACION DEL MANDATO. REELECCION.

ARTICULO 175°- El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente una sola vez. El Gobernador y el Vicegobernador reelectos no pueden postularse para el período siguiente como miembros del Poder Ejecutivo.

CESE DEL MANDATO

ARTICULO 176°- El Gobernador y el Vicegobernador cesan en sus mandatos el mismo día en que expire el período correspondiente, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que lo completen más tarde o de su prorroga por un día más.

INMUNIDADES - TITULO TRATAMIENTO.

ARTICULO 177°- El Gobernador y el Vicegobernador gozan de las mismas inmunidades que los diputados. El ciudadano que acceda al Poder Ejecutivo tiene el título de Gobernador de la Provincia de San Juan y recibe el tratamiento de "Señor Gobernador". Los que detentan ilegítimamente esos cargos violando esta Constitución, no pueden usar aquel título ni recibir el tratamiento mencionado.

JURAMENTO

ARTICULO 178º- Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y el Vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados y en su defecto ante la Corte de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, las leyes de la Nación y de la Provincia.

RESIDENCIA

ARTICULO 179º- El Gobernador y el Vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la Ciudad de San Juan, Capital de la Provincia. No pueden ausentarse fuera de ella por más de treinta días sin permiso de la Cámara de Diputados.

PROHIBICION DE AUSENTARSE

ARTICULO 180º- Los ciudadanos que hubieren ejercido el cargo de Gobernador y de Vicegobernador, no podrán ausentarse de la Provincia sin autorización de la Cámara, hasta tres meses después de haber concluido su mandato.

EMOLUMENTOS

ARTICULO 181º- Los servicios del Gobernador y del Vicegobernador son remunerados con fondos del Tesoro de la Provincia. Su renuncia es fijada por ley y no puede ser disminuida durante el período de su mandato. Mientras se mantengan en el ejercicio de sus funciones no podrán practicar otro empleo, arte, profesión o comercio, ni recibir otros emolumentos de la Nación o de la Provincia.

ACEFALIA INICIAL

ARTICULO 182º- Si el ciudadano que ha sido electo Gobernador falle-

iese, renunciase, o no pudiese ocuparlo antes de acceder al cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección.

Si el día en que deba cesar el gobernador saliente, no estuviere proclamado el nuevo, ocupará el cargo el Vicegobernador electo, mientras dure esa situación.

ACEFALIA SIMULTANEA

ARTICULO 183º- El Vicegobernador reemplaza al gobernador por el resto del período según el caso de fallecimiento, destitución o renuncia o hasta que haya cesado la inhabilidad temporal en caso de enfermedad, suspensión o ausencia.

En caso de impedimento o ausencia del Vicegobernador en las circunstancias anteriores, ejercerá el Poder Ejecutivo el Vice Presidente Primero de la Cámara de Diputados y en su defecto , el vice Presidente Segundo, quienes prestarán juramento de ley al tomar posesión de este cargo.

ACEFALIA TOTAL

ARTICULO 184º- En caso de impedimento definitivo o renuncia del Gobernador y del Vicegobernador y restando más de dos años para concluir el período de gobierno quien ejerza el Poder Ejecutivo convocará para elección de Gobernador y de Vicegobernador a fin de completar el período, dentro de los cinco días desde la fecha en que asumió sus funciones. Si faltase menos de dos años pero más de tres meses para cumplirse el período de gobierno, la elección de Gobernador la efectuará la Cámara de Diputados de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y a simple pluralidad en la segunda.

C A P I T U L O I I

ELECCION DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

ELECCION - EPOCA

ARTICULO 185°- El Gobernador y el Vicegobernador son elegidos directamente por los electores de la Provincia a simple mayoría de votos en distrito único. La elección tendrá lugar conjuntamente con la de diputados provinciales del año que corresponda.

VALIDEZ DELA ELECCION

ARTICULO 186°- El Tribunal Electoral decide sobre la validez de la elección.

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 187°- Si el Tribunal Electoral anula total o parcialmente la elección, el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones generales o parciales en las mesas electorales en las que no se hubiere sufragado o en las que se hubieren - anulado los comicios, conforme lo disponga la ley.

NUEVA ELECCION

ARTICULO 188°- En el caso en que dos o más candidatos obtuvieran igual número de votos para gobernador y para Vicegobernador, se procederá a una nueva elección, al solo efecto de elegir entre las fórmulas que hubieran empatado en la anterior votación. Esta elección se debe practicar en un término que no exceda los treinta días después de aprobado el comicio anterior.

C A P I T U L O I I I

ATRIBUCIONES, DEBERES Y PROHIBICIONES

ATRIBUCIONES Y DEBERES

ARTICULO 189º- El Gobernador o quien ejerza el Poder Ejecutivo en su caso, tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- 1) Es el mandatario legal de la Provincia, jefe de la Administración y la representa en todas sus relaciones oficiales.
- 2) Concorre a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, ejerce el derecho de iniciativa ante la Cámara de Diputados, participa en la discusión por sí o por medio de sus Ministros, promulga y expide decretos o reglamentos para su ejecución sin alterar su espíritu , veta leyes y designa el representante del Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.
- 3) Reglamenta las leyes de la Nación y los tratados internacionales aprobados por el Congreso cuando deban ser cumplidos o aplicados en territorio de la Provincia, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional, no los haya reglamentado. Que su

3)

4) Nombra con acuerdo de la Cámara de Diputados contador y tesorero de la provincia y a todos aquellos funcionarios que por mandato de esta Constitución o la ley requieran anuencia legislativa . Durante el receso de la Cámara de Diputados, - los nombramientos que requieran acuerdo se tratan en comisión, con cargo de dar cuenta y solicitarla con la 1a. sesión que aquella celebre, bajo sanción de que si así no se hiciera, los funcionarios cesarán en sus empleos. Nombra y renueva a todos los otros funcionarios y empleados de la administración pública conforme a la ley.

5) Presenta a la Cámara de Diputados dentro de los 3 primeros meses de sesiones ordinarias, el proyecto de presupuesto general de gastos, el plan de recursos y las cuentas generales. El plazo de presentación sólo podrá ser prorrogado por un término no mayor de 30 días.

6) Informa a la Cámara de Diputados al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, del Estado general de la administración del movimiento de fondos que se hubiera producido dentro o fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y de las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas.

7) Recauda las rentas y las invierte con estricta sujeción a sus leyes y hace publicar mensualmente el estado de la teso-

rería general.

8) Convoca a elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y leyes respectivas sin que por ningún motivo puedan ser diferidas, convoca a la cámara de diputados o sesiones extraordinarias .

9) causa de utilidad común especialmente en materia cultural y educacional, económica y de administración de justicia con aprobación de la cámara. Cuanso se trate de convenios celebrados con entes públicos extranjeros se dara conocimiento previo al Congreso de la Nación.

10) y sociedades en general para asegurar el cumplimiento de los fines respectivos, pudiendo decretar la intervención con conocimiento de la Cámara cuando se trate de funcionarios designados con su acuerdo.

o extranjeros, para común, especialmente en materia cultural, educacional, económica y de administración de justicia con aprobación de la Cámara cuando se trate convenios celebrados con entes públicos , extranjeros se dará conocimiento previo al Congreso de la Nación.

- 10) Ejerce la fiscalización, control y tutela sobre las empresas del Estado o con participación estatal y sociedades en general para asegurar el cumplimiento de los fines respectivos pudiendo decretar su intervención cono conocimiento de la Cámara cuando se trate de funcionarios designados con su acuerdo.
- 11) Puede intervenir los municipios por las causas y en la forma que esta Constitución determina.
- 12) Ejerce el poder de policía de la Provincia y presta el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de la justicia, nacionales y provinciales, a la Cámara de Diputados al Tribunal de Cuentas y a las municipalidades conforme a la ley y - cuando lo solicitan.
- 13) Tome las medidas necesarias para conservar la paz, el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta constitución y leyes vigentes. Provee al ordenamiento y regimen de los servicios públicos.
- 14) Conoce ordinariamente y resuelve en las causas y recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los

de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas provinciales, siendo sus resoluciones recurribles ante la justicia;

15) Ordena arrestos y detenciones hasta por 2 días con las limitaciones de esta Constitución para las leyes vigentes.

16) Es agente inmediato y directo del gobierno Nacional para hacer cumplir en la Provincia, la Constitución y las leyes de la Nación

17) Dicta leyes de necesidad y urgencia. En receso de la Cámara de Diputados, debe convocar a sesiones extraordinarias para tratar esas leyes en un plazo no mayor de cinco días

18) Dicta leyes reglamentarias

19) Concede indultos y conmuta penas previo informe de la Corte de Justicia, con excepción de las que resulten de la sección segunda.

20) Contrata obras de interés general, inclusive por el sistema de peaje.

21) Otorga pensiones graciabiles.

PROHIBICIONES

ARTICULO 190°- Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta Constitución, al que ejerce el Poder Ejecutivo le está absolutamente prohibido.

1) Arrogarse facultades judiciales o entorpecer el cumplimiento de las resoluciones que decreten

2) Imponer contribuciones, decretar embargos y aplicar penas.

CAPITULO I V

MINISTERIOS

DESIGNACION

ARTICULO 191°- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a cargo de los ministros designados por el Gobernador cuyo número no será inferior a cinco días. Una ley cuya iniciativa es exclusiva el Poder Ejecutivo, determinará el número, rama y funciones.

CONDICIONES

ARTICULO 192°- Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser Diputado. También se exige no tener parentesco dentro del cuarto grado de afinidad o consanguinidad con quien ejerce la función de Gobernador.

EMOLUMENTO Y REMOCION

ARTICULO 193°- Los Ministros gozan de un sueldo que no puede ser disminuido durante el ejercicio de sus funciones. El gobernador puede remover a estos funcionarios toda vez que lo crea conveniente.

JURAMENTO

ARTICULO 194°- Los Ministros, al acceder al cargo, prestarán juramento ante el Gobernador de desempeñarlo fielmente. Los funcionarios lo harán ante los ministros del ramo, prometiendo además todos de un modo especial, sujetar a sus subalternos al estricto cumplimiento de sus deberes.

COMPETENCIA-RESPONSABILIDADES

ARTICULO 195°- El Ministro refrenda y legaliza con su firma las resoluciones del Gobernador, sin la cual no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Es así solidariamente responsable de los actos que realice con el Gobernador. Solo puede resolver por si mismo en lo referente a asuntos internos y disciplinarios de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámites. Es responsable de todas las resoluciones y órdenes que autorice y solidariamente de lo que resuelva con sus pares, sin que pueda eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de órdenes del Gobernador.

RELACION CON LA CAMARA

ARTICULO 196°- Los Ministros deben asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados, cuando fueren llamados por ella. Pueden concurrir cuando lo estimen conveniente y tomar participacion en sus discusiones, pero no tienen voto. Están obligados a remitir a la Cámara los informes, memorias y antecedentes que esta les solicite sobre asuntos de sus respectivos departamentos.

SECCION SEXTA

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

COMPOSICION

ARTICULO 197°- El Poder Judicial de la Provincia es desempeñado por una Corte de Justicia, Cámaras, Jueces y Jueces de Paz Letrados y demás tribunales que la ley establezca.

INDEPENDENCIA

ARTICULO 198°- El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad e independencia ante los otros poderes del Estado.

LEY ORGANICA

ARTICULO 199°- La ley determinará el orden jerárquico, la competencia, incompatibilidades, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de los órganos y miembros del Poder Judicial, y reglará la forma en que habrán de actuar y aplicar el ordenamiento jurídico.

INAMOVILIDAD E INMUNIDADES

ARTICULO 200°- Los magistrados y representantes del ministerio público conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución. Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. Sus retribuciones serán establecidas por ley no pueden ser disminuidas con descuentos que no sean los que aquella dispusiera con fines de previsión o con carácter general. La inamovilidad comprende el grado y la sede. No pueden ser trasladados sin su consentimiento. Solo pueden ser removidos en la forma y por las causas previstas por esta Constitución. Los jueces no pueden ser responsabilizados por sus decisiones, salvo en las excepciones expresamente especificadas por la ley.

CAPITULO II

CONSTITUCION Y ORGANIZACION

CORTE DE JUSTICIA

ARTICULO 201°- La Corte de Justicia está integrada por cinco miembros, como mínimo, y se divide en salas; solamente por ley podrá aumentarse el número que siempre deberá ser impar.

La Presidencia del cuerpo es desempeñada anualmente y por turno, por cada uno de sus miembros, comenzando por el de mayor edad.

MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 202°- El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial . Es integrado y desempeñado por el Fiscal General de la Corte de Justicia, por los Fiscales de Cámara, por los Agentes Fiscales y por los Asesores y Defensores oficiales. La ley orgánica determinará el número, jerarquía, funciones y modo de actuar. El Fiscal General de la Corte de Justicia ejerce superintendencia sobre los demás miembros que componen el Ministerio Público.

JUSTICIA DE PAZ LETRADA

Artículo 203°- La Justicia de Paz Letrada es órgano del Poder Judicial. La ley orgánica de tribunales organiza la Justicia de Paz Letrada en la Provincia, teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, la extensión y población de las mismas y fija su jurisdicción, competencia, funcionamiento y retribución.

REQUISITOS

ARTICULO 204°- Para ser miembro de la Corte de Justicia y

Fiscal General se requiere ser argentino, nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, poseer título de abogado y tener diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.

Las condiciones para ser miembro de las Cámaras, Jueces, Agentes Fiscales, Defensores y Asesores son: ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, poseer título de abogado, tener cinco años de ejercicio profesional o desempeño de la magistratura y tener veinticinco años de edad.

Para ser juez de paz letrado se requiere ser argentino nativo o naturalizado con cinco años de ejercicio de la ciudadanía, poseer título de abogado y ser mayor de edad.

En todos los casos los magistrados y miembros del ministerio público deben tener una residencia continuada en la Provincia y previa a su designación de cinco años. Esta exigencia no será requerida para los jueces de paz letrados. Para estos últimos la obligatoriedad de la residencia será ~~hecha~~ por ley.

INCOMPATIBILIDADES

ARTICULO 205°- Los magistrados e integrantes del ministerio público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones u otras actividades dentro o fuera de la Provincia exceptuando la docencia universitaria.

DESIGNACION

ARTICULO 206°- Los miembros de la Corte de Justicia, el Fiscal

General de la Corte, todos los magistrados judiciales y titulares del Ministerio Público, son nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Las vacantes de funcionarios judiciales deben ser cubiertas dentro de los noventa días de producidas. Si así no lo fuere la Corte de Justicia las cubrirá con carácter provisorio hasta tanto el Consejo de la Magistratura formule la propuesta a la Cámara de Diputados y esta haga la designación.

C A P I T U L O I I I

ATRIBUCIONES Y DEBERES

ARTICULO 207º-La Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones y deberes.

- 1) Representa al Poder Judicial de la Provincia y ejerce la superintendencia sobre la administración de justicia.
- 2) Nombra, traslada y remueve a los empleados del Poder Judicial.
- 3) Nombra con jueces en el número y casos que la ley determine.
- 4) Dicta el reglamento interno del Poder Judicial;
- 5) Prepara anualmente el presupuesto de gastos e inversiones, del Poder Judicial, en concordancia con el Poder Ejecutivo, para su consideración por la Cámara de Diputados, el que puede exceder el período de un año.
- 6) Dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por ley;
- 7) Informa en relación a la administración judicial cuando le son requeridos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo o el De-

fensor del Pueblo.

8) Puede enviar a la Cámara de Diputados, con el carácter de iniciativa proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento del Poder Judicial, de la Policía Judicial, creación de servicios administrativos, conexos y de asistencia judicial, como asimismo los códigos y leyes de procedimientos judiciales y sus modificaciones.

9) Ejerce control en el regimen interno de las cárceles y establecimientos de detenidos.

10) Ejerce superintendencia sobre la Policía Judicial

11) Comunica en forma inmediata a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal sus pronunciamientos sobre inconstitucionalidad de las leyes, decretos u ordenanzas.

12) Reglamenta los derechos y las obligaciones de los empleados judiciales mediante acordadas.

JURISDICCION

ARTICULO 208º- La Corte de Justicia tiene como jurisdiccional las siguientes atribuciones:

1) Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:

A) En los conflictos entre los Poderes Públicos de la Provincia y en los que se suscitaren entre los tribunales inferiores de justicia, con motivo de sus respectivas jurisdicciones y competencias.

B) En los conflictos de las municipalidades entre sí y entre estas y los poderes del Estado.

C) En los recursos extraordinarios de Casación e inconstitucio-

nalidad de conformidad a las leyes de procedimientos.

2) Conoce en las demandas por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que se promuevan directamente por vía de acción y en caso concreto, según lo establezca esta Constitución y las leyes.

3) Convoce y resuelve en grado de apelación.

A) En las causas sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, promovidas ante los tribunales inferiores;

B) En los recursos sobre inaplicabilidad de la ley y los demás que autoricen las leyes de procedimientos.

4) Conoce en los recursos de que por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores, con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimiento establezca.

5) Conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley.

6) La Corte de Justicia, en jurisdicción provincial, el Tribunal Superior de toda causa para dictar la sentencia definitiva y a los fines de las cuestiones constitucionales, de naturaleza federal incluidas en ellas. Todo tribunal provincial tiene competencia y obligación en cualquier tipo de causa para resolver las cuestiones constitucionales de naturaleza federal incluída en las mismas.

JURISPRUDENCIA VINCULANTE

ARTICULO 209°- La interpretación que haga la Corte de Justicia en sus pronunciamientos plenarios sobre el texto de esta Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resolucio-

nes , es de aplicación obligatoria para todos los tribunales inferiores. La ley establece la forma y el procedimiento para obtener la revisión de la jurisprudencia.

COMPETENCIA Y JURISDICCION DE TRIBUNALES INFERIORES-REVISION

ARTICULO 210°- La Ley Orgánica de Tribunales determina la competencia , jurisdicción y funcionamiento de los demás organismos del Poder Judicial. Procede el recurso de revisión, contra todas las sentencias definitivas dictadas por jueces cuyos nombramientos no reunan los requisitos establecidos en esta Constitución y en los demás casos que la ley le establezca.

TRATAMIENTO

ARTICULO 211°- Los miembros del Poder Judicial tienen el siguiente tratamiento:

- 1) Los miembros de la Corte de Justicia: "Señor Ministro"
- 2) Los miembros de la Cámara: "Señor Juez de Cámara"
- 3) Los demás jueces: "Señor Juez".

PUBLICIDAD

ARTICULO 212°- Los tribunales de la Provincia deben informar y publicar periódicamente las causas que pasen a estado de sentencia , consignando la fecha en que los autos quedan a disposición del tribunal para su resolución. Dela misma forma deben hacer conocer que las causas han sido sentenciadas. La ley reglamenta la forma en que se cumplirán estas obligaciones.

C A P I T U L O I V

POLICIA JUDICIAL

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 213º- El Poder Judicial dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones. La Corte de Justicia organiza la Policía Judicial, de acuerdo a esta Constitución y a la ley, esta Policía es de su exclusiva dependencia.

C A P I T U L O V

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INTEGRACION

ARTICULO 214º- El Consejo de la Magistratura está integrado por dos abogados en ejercicio de la profesión, inscriptos en la matrícula de la provincia, domiciliados en la misma y que reúnan las condiciones requeridas por esta Constitución para ser miembro de la Corte de Justicia, un legislador provincial un miembro de la Corte de Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo.

ELECCION

ARTICULO 215º- Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:

- 1) Los abogados mediante elección única, directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, bajo el control de la entidad de ley que maneje la matrícula.
- 2) El legislador, por designación de la Cámara de Diputados.
- 3) El miembro de la Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros.
- 4) El ministro por designación del Gobernador de la Provincia.

En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El ejercicio de estas funciones constituye carga pública y el mandato dura cuatro años, pudiendo ser reelectos. El asiento del Consejo de la Magistratura lo es en el de la Corte de Justicia.

FUNCIONES

ARTICULO 216º- Son funciones del Consejo de la Magistratura.

1º- Proponer por terna remitida a la Cámara de Diputados, el nombramiento de magistrados judiciales, titulares del Ministerio Público y Fiscal del Estado.

2º- Proponer a la Cámara de Diputados el traslado de los magistrados y miembros del Ministerio Público.

3º- Organizar y resolver los concursos abiertos de antecedentes y oposición para las vacantes e integración de las ternas de nombramiento;

4º- Dictar su reglamento de organización y funcionamiento.

VACANCIA

ARTICULO 217º- Comunicada una vacancia por la Corte de Justicia al Consejo de la Magistratura, este debe proponer la terna respectiva a la Cámara de Diputados, dentro de los sesenta - días de recibida la comunicación.

FUNCION AUXILIAR DE LA JUSTICIA

ARTICULO 218º- La abogacía es una función pública no estatal, auxiliar del Poder Judicial.

La totalidad de los abogados inscriptos en la matrícula conforman el Foro de Abogados.

La Ley Orgánica determina la Constitución, organización, jurisdicción

dicción y funcionamiento de la entidad, que ejerce el control y la superintendencia de la matrícula, las atribuciones disciplinarias, la organización y el control de la elección de los abogados que integren el Consejo de la Magistratura.

SECCION SEPTIMA

DEL JUICIO POLITICO Y DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

C A P I T U L O I

DEL JUICIO POLITICO

AMBITO PERSONAL RENUNCIANTES

ARTICULO 219°- El Gobernador, el Vicegobernador y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los miembros de la Corte de Justicia, Fiscal General de la Corte y el Fiscal de Estado sólo pueden ser denunciados ante la Cámara de Diputados por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes.

Cualquier ciudadano podrá denunciar el delito o falta, a efectos de que se promueva la acusación.

SALAS

ARTICULO 220°- Anualmente la Cámara en su primera sesión, se divide por sorteo en dos Salas compuesta cada una por la mitad de sus miembros, a los fines de la tramitación del Juicio Político.

En caso de que la composición de la Cámara fuese impar, la Sala Segunda se integra con un miembro más.

La Sala Primera tiene a su cargo la acusación, y la Sala Segunda es la encargada de juzgar.

Cada Sala es presidida por un diputado elegido de su seno.

SALA ACUSADORA

ARTICULO 221°- La Sala acusadora nombra anualmente en la misma sesión, una Comisión de investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que lo haga.

Dicha Comisión tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que funda la acusación, teniendo para ese efecto, las más amplias facultades.

INSTRUCCION

ARTICULO 222°- La Comisión investigadora practica las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presenta dictamen a la Sala acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo necesitándose mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros cuando el dictamen fuera favorable a la acusación.

SUSPENSION DE FUNCIONES

ARTICULO 223°- Desde el momento en que la sala acusadora admite la acusación, el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

COMISION ACUSADORA

ARTICULO 224°- Admitida la causación por la Sala acusadora, esta nombra una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la Segunda Sala, constituida en tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante el presidente.

SENTENCIA

ARTICULO 225°- La Sala de sentencia procede de inmediato al estudio de la acusación, defensa y prueba, para pronunciarse en

definitiva en el término de treinta días. Vencido ese término sin pronunciarse fallo , el acusado volverá al ejercicio de sus funciones con derecho a percibir los haberes no cobrados y sin que el juicio puede repetirse por los mismos hechos.

VOTACION

ARTICULO 226°- Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Segunda Sala. La votación es nominal, registrándose en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación.

EFFECTOS

ARTICULO 227°- El fallo no tiene más efecto que el de destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales ordinarios.

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 228°- La Cámara de Diputados dictará una ley de procedimientos para esta clase de juicio, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.

C A P I T U L O I I

JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AMBITO PERSONAL

ARTICULO 229°- Los jueces de Cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz, defensores públicos, agentes fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, el Contador y Tesorero de la Pro-

vincia, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes.

INTEGRACION Y RECUSACION

ARTICULO 230°- El Jurado de Enjuiciamiento está integrado con un miembro de la Corte de Justicia designado por sorteo por ella; dos Diputados elegidos por la Cámara y dos abogados de la matrícula elegidos de la misma manera en que se eligen los que integran el Consejo de la Magistratura y que reúnan las condiciones para ser miembros de la Corte, con la antelación suficiente para que esté en condiciones de constituirse a partir del primer día de enero de cada año.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento pueden ser recusados y excusarse por causa fundada, debiendo en tal caso integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva.

SUSPENSION

ARTICULO 231°- El funcionario acusado puede ser suspendido en su cargo por el Tribunal durante el curso de la sustanciación de la causa.

SENTENCIA

ARTICULO 232°- El Tribunal dicta sentencia dentro del término perentorio de treinta días desde que la causa hubiere quedado en estado de resolver, absolviendo o destituyendo al acusado. En el primer caso, el funcionario queda restablecido en la posesión de su cargo y en el segundo, separado definitivamente del

y sujeto a los tribunales ordinarios, debiendo en tal caso el tribunal comunicarlo a la autoridad correspondiente a efectos de que se provea a la designación de su reemplazante.

CAUSALES ESPECIALES

ARTICULO 233°- Además de los delitos y faltas de los funcionarios sujetos a la jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento que determina la ley respectiva, son causales de remoción para los magistrados del Poder Judicial, la mala conducta, la negligencia, el desconocimiento reiterado y notorio del derecho y la morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones.

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 234°- El procedimiento es fijado por una ley especial dictada por la Cámara de Diputados, la que garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso legal.

SECCION OCTAVA

CONSULTA POPULAR

CAPITULO UNICO

CONDICIONES

ARTICULO 235°- Mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, se puede someter a consulta popular de los electores cualquier cuestión que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión popular.

INICIATIVA

ARTICULO 236°- La iniciativa requiriendo la consulta popular puede originarse en el Poder Ejecutivo o a propuesta de uno

o más legisladores, y la ley que al efecto se dicte no puede ser vetada.

CARACTERISTICA

ARTICULO 237°- Cuando la consulta popular este ordenada en esta Constitución el voto será obligatorio y el pronunciamiento vinculante cualquiera sea el número devotos emitidos

En los demás casos el voto podrá ser obligatorio u optativo y con efecto vinculante o no según se disponga. Cuando la consulta fuere optativa se requiere, para que su resultado fuere válido, que haya sufragado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos.

ELECTORES Y SISTEMA ELECTORAL

ARTICULO 238°- Son electores en una consulta popular, todos los ciudadanos inscriptos en el último padrón electoral.

El sistema electoral se ajusta a lo previsto por esta Constitución.

SECCION NOVENA

REGIMEN MUNICIPAL

C A P I T U L O I

DISPOSICIONES GENERALES

MUNICIOS

ARTICULO 239°- Todo centro poblacional de más de dos mil habitantes dentro del ejido, puede constituir municipio, que será gobernado con arreglo a las prescripciones de esta Constitución, de las cartas municipales y de la Ley Orgánica que en su consecuencia dicte el Poder Legislativo.

CATEGORIAS

ARTICULO 240º- Los Municipios serán de tres categorías a saber:

- 1) Los Municipios de "primera categoría", las ciudades de más de treinta mil (30.000) habitantes.
- 2) Los Municipios de "segunda categoría" las ciudades de más de diez mil habitantes (10.000)
- 3) Los Municipios de "tercera categoría" las ciudades villas o pueblos de más de dos mil (2.000) habitantes.

Los censos oficiales nacionales o provinciales legalmente practicados determinarán la categoría de cada Municipio.

C A P I T U L O I I

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

CARTAS MUNICIPALES

ARTICULO 241º- Los municipios de primera categoría dictarán su propia Carta Municipal, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución. La Carta será dictada por una convención municipal convocada por el departamento ejecutivo comunal, en virtud de ordenanza sancionada al respecto. La convención municipal está integrada por un número igual al doble de los miembros del Concejo Deliberante, y serán elegidos por el pueblo de sus respectivas jurisdicciones, por sistema de representación proporcional. Para ser Convencional Municipal se necesita reunir los mismos requisitos exigidos que para ser Concejal. Las Cartas fijarán el procedimiento para sus reformas posteriores.

CONDICIONES BASICAS

ARTICULO 242º- Las Cartas Municipales deberán asegurar:

- 1) Los principios del régimen democrático pariticipativo, representativo y republicano;
- 2) La existencia de un Departamento Ejecutivo unipersonal y de otro deliberativo;
- 3) Un régimen electoral por sistema de representación proporcional;
- 4) Un régimen de control de legalidad del gasto.

LEY ORGANICA

ARTICULO 243º- Los municipios de segunda y tercera categoría se regirán por la Ley Orgánica que al efecto dicte la Cámara de Diputados, sobre las bases establecidas en esta Constitución.

Se componen de dos departamentos, uno ejecutivo y otro deliberativo.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. INTENDENTE

ARTICULO 244º- El Departamento Ejecutivo de las municipalidades es ejercido por un intendente, elegido por el voto directo del pueblo a simple pluralidad de sufragios, el que está obligado a hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante, informar anualmente de su administración ante éste, ejercer la representación de la municipalidad y demás atribuciones que la Carta Municipal o la Ley Orgánica prescriban. Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por un período consecutivo más. Son requisitos para ser inten-

dente, los mismos establecidos que para ser Diuptado Provincial, y un año de residencia inmediata y continua en el municipio.

CONCEJO DELIBERANTE

ARTICULO 244. El Departamento Ejecutivo de las municipalidades es ejercido por un intendente, elegido por el voto directo del pueblo a simple pluralidad de sufragios, el que está obligado a hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante, informar anualmente de su administración ante éste, ejercer la representación de la municipalidad y demás atribuciones que la Carta Municipal o la Ley Orgánica prescriban. Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por un período consecutivo más. Son requisitos para ser intendente, los mismos establecidos que para ser Diputado Provincial, y un año de residencia inmediata y continua en el municipio.

CONCEJO DELIBERANTE

ARTICULO 245°- El Departamento Deliberativo de las municipalidades está integrado por un concejo, compuesto por cinco concejales fijos, a los que se suma uno por cada quince mil habitantes, elegidos directamente por el pueblo de acuerdo al sistema de representación proporcional. Ningún Concejo Deliberativo puede estar integrado por más de doce miembros. Duran - cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Son requisitos para ser Concejál. Tener más de veintiun años de edad, y estar inscripto en los padrones r-spectivos, en caso

de ser extranjero, tiene una residencia mínima y continua de cinco años en el municipio.

El asiento del Concejo Deliberante está en el ejido de la municipalidad, pudiendo sesionar en los distintos poblados villas o distritos sometidos a su jurisdicción, cuando por razones de conveniencia resuelva hacerlo por simple mayoría de votos.

El Presidente del Concejo tiene voto y decide en caso de empate.

Simultáneamente con los Concejales titulares se eligen concejales suplentes.

MANIFESTACION DE BIENES

ARTICULO 246°- Los Intendentes Municipales y los miembros de los Concejos Deliberantes, están obligados, previo a acceder a sus cargos, a manifestar sus bienes en la forma que las cartas municipiapales o la Ley Orgánica determinen.

AUTONOMIA

ARTICULO 247°- Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera, a todos los municipios, los de Primera Categoría tienen además autonomía institucional. Todos los municipios - ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder.

ELECTORES

ARTICULO 248°- Son electores municipales:

- 1) Todos los argentinos inscriptos en el registro electoral con domicilio real en el territorio o jurisdicción municipal.
- 2) Los extranjeros mayores de dieciocho años con más de dos años de domicilio real inmediato y continuo en el municipio

1 tiempo de su inscripción en el padrón municipal.

INMUNIDADES Y RESPONSABILIDADES POLITICAS

ARTICULO 249º- Los miembros del Ejecutivo y Deliberativo municipal no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitieren en el desempeño de sus mandatos.

El Concejo es el único juez de sus miembros y resuelve sobre su remoción.

La responsabilidad política del intendente será juzgada por el Concejo, pudiendo ser removido por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, en cuyo caso el fallo se someterá a consulta popular dentro de los treinta días siguientes.

En ambos casos se asegura el derecho a la defensa.

INTERVENCION

ARTICULO 250º- El Poder Legislativo puede intervenir los municipios por las causales del artículo 150º inciso 2º.

El Poder Ejecutivo sólo puede hacerlo en los siguientes casos:

- 1) Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total;
- 2) Para normalizar la situación en caso de subversión del orden institucional.

La intervención solo puede ordenarse por ley y por tiempo determinado.

ATRIBUCIONES Y DEBERES

ARTICULO 251º- Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a los principios de sus Cartas y Ley Orgánica, los

siguientes:

- 1) Convocar a elecciones;
 - 2) Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
 - 3) Contraer empréstitos con objeto determinado, con dos tercios de votos de los miembros en ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos, puede ser superior al veinticinco por ciento de los recursos ordinarios afectables;
 - 4) Nombrar funcionarios y empleados municipales, y removerlos con causa;
 - 5) Crear Tribunales de Faltas y Policía Municipal;
 - 6) Contratar servicios públicos y otorgar permisos y concesiones a particular, con límite de tiempo;
 - 7) Adquirir o construir, por el sistema que fije la ley, las obras que estime convenientes, inclusive por el sistema de peaje;
 - 8) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los bienes municipales
 - 9) Realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado, municipales, provinciales, nacionales o extranjeros; en este último caso con conocimiento previo de la Cámara de Diputados de la Provincia;
 - 10) Impulsar la organización de uniones vecinales de fomento;
 - 11) Utilizar la consulta popular cuando lo estime necesario .
- Una ley establece las condiciones en que se ejercerán los dere-

chos de iniciativa y revocatoria;

12) Dictar ordenanzas y reglamentos sobre urbanización, tierras fiscales, municipales transportes y comunicaciones urbanas, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, costumbre y moralidad, educación, vías públicas, paseos y cementerios, de abastecimiento, ferias y mercados municipales, forestación, deportes, registros de marcas y señales, contravenciones, y en general todas las de fomento y de interés comunal.

13) Crear recursos permanentes o transitorios;

14) Acordar licencias comerciales dentro de su ejido;

15) Organizar servicios asistenciales en forma directa y/o con la colaboración de la Provincia, Nación o entidades prestatarías de estos servicios;

16) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de sus habitantes. Crear establecimientos educativos en los distintos niveles y bibliotecas públicas, propiciando la formación de las populares;

17) Todas las demás atribuciones y facultades que se derivan de las enumeradas precedentemente, dictando las ordenanzas y reglamentos necesarios para el ejercicio de los poderes de los municipios y proveer lo conducente a su prosperidad y bienestar, pudiendo imponer sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes tales como multas, demolición de construcciones, secuestros, destrucción y comiso de mercadería. A tal efecto podrán requerir al juez competente las órdenes de allanamiento necesarias;

18) Convenir con la Provincia o con otros municipios la formación de organismos de coordinación y cooperación necesarias para la realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes;

19) Participar, por medio de un representante designado al efecto en los organismos provinciales de planificación o desarrollo, cuyas disposiciones afecten intereses municipales.

C A P I T U L O I V

COMISIONES VECINALES

ARTICULO 252°- Los municipios pueden crear Comisiones Vecinales en aquellos grupos poblacionales de más de quinientos habitantes que así lo requieran , para un mejor gobierno comunal, por razones geográficas, históricas, sociales, de servicio o economías.

La Ley Orgánica o Carta Municipal ordena la forma de constitución, régimen y funcionamiento de las Comisiones Vecinales.

C A P I T U L O V

RECURSOS

TESORO

ARTICULO 253°- El tesoro del municipio estará formado por:

1°- Los impuestos cuya percepción no haya sido delegada a la provincia, los servicios retributivos, tasas y patentes municipales;

2°- La contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como consecuencia de una obra pública y municipal.

- 3°- Las multas y recargos por contravenciones;
- 4°- El producto de la enajenación de bienes municipales, servicios de peaje y renta de bienes propios;
- 5°- Las donaciones y subsidios que perciban;
- 6°- El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos;
- 7°- Todos los demás recursos que le atribuye la Nación o la Provincia o que resulten de convenios intermunicipales;
- 8°- Tienen derecho a un porcentaje determinado por ley, según la categoría del municipio, del total que la provincia perciba en concepto de coparticipación federal y en el mismo tiempo y forma que aquella lo perciba. También tienen derecho a un porcentaje determinado por ley, de la totalidad de los impuestos percibidos por la provincia. La coparticipación municipal de los impuestos nacionales y provinciales tiende a favorecer a los municipios de menores recursos, y a aquellos que se encuentren ubicados en áreas y zonas de frontera.

BIENES

ARTICULO 254°- Constituyen bienes del dominio municipal todas las tierras fiscales ubicadas dentro de sus respectivos ejidos, excepto las pertenecientes a la Nación o a la Provincia.

PUBLICIDAD

ARTICULO 255°- El municipio da publicidad periódicamente del estado de sus ingresos y gastos y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada en la forma que lo determinen la ley orgánica o cartas municipales.

SECCION DECIMA

TRIBUNAL DE CUENTAS

CAPITULO UNICO

JURISDICCION Y COMPETENCIA

ARTICULO 256°- Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la provincia y con poder suficiente para aprobar o desaprobar la legitimidad en la percepción e inversión de caudales públicos hecha por los funcionarios y empleados de todos los poderes públicos , entes de la administración centralizada, descentralizada y municipal, empresas públicas, empresas con participación estatal, sociedades del Estado e instituciones privadas que perciban fondos del Estado, quienes están obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación . En este último caso, el Tribunal indica también los funcionarios o personas responsables y el monto o causas de los cargos respectivos.

Las rendiciones deben llegar al Tribunal dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del respectivo ejercicio.

El Tribunal se pronuncia en el término de un año desde la presentación, vencido el cual quedan de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere. El término no corre si la presentación de la cuenta es fragmentaria, incompleta , insuficiente o en pugna con el ordenamiento que determine la ley.

Los fallos que emite hacen cosa juzgada en cuanto así la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo solo susceptibles de los recursos que la ley establezca por ante la Corte de Justicia.

INTEGRACION Y REQUISITOS

ARTICULO 257°- El Tribunal de Cuentas está integrado por un Presidente y un Vicepresidente, los que deben reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte de Justicia y tres vocales con título universitario habilitante en materia contable, económica, financiera o administrativa, inscritos en la respectiva matrícula, con ciudadanía en ejercicio, veinti cinco años de edad y tengan al menos cinco años de efectivo ejercicio profesional o desempeño de cargo que requiera tal condición.

ELECCION Y DURACION

ARTICULO 258°- Los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos de la siguiente manera:

- 1°) El Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales, por la Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución.
- 2°) Los dos Vocales restantes por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando en sus cargos el mismo período que

que los Diputados, pudiendo ser reelectos.

En el caso de resultar una sola minoría, esta propondrá los dos Vocales.

EJECUTORIEDAD

ARTICULO 259°- Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta días después de su notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por el Fiscal del Estado ante quien corresponda.

INDEPENDENCIA

ARTICULO 260°- La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza:

- 1°) Una retribución establecida por Ley, que no puede ser disminuida por descuentos que no sean los que esta dispusiera con fines de previsión o con carácter general;
- 2°) La facultad de preparar su propio presupuesto y la de nombrar o remover su personal;

Salta

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SALTA

PREAMBULO

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Salta, reunidos en Convención Constituyente, con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos; ratificar los inalterables valores de la solidaridad, la paz y la cultura nacional; proteger la familia, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales; asegurar el acceso a la educación y a la cultura; establecer el derecho y el deber al trabajo, su justa retribución y dignificación; estimular la iniciativa privada, la producción y la co-gestión; procurar la equitativa distribución de la riqueza, el desarrollo económico, el afianzamiento del federalismo, la integración regional y latinoamericana; instituir la autonomía municipal; organizar el Estado Provincial bajo el sistema representativo republicano de acuerdo a la Constitución Nacional, en una democracia participativa y pluralista, adecuada a las exigencias de la justicia social, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.

SECCION PRIMERA

C A P I T U L O I

Declaraciones generales y forma de Gobierno

Artículo 1º- Organización del Estado y la sociedad.

La Provincia de Salta, como parte integrante de la República Argen-

tina, organiza su gobierno bajo el sistema republicano y representativo.

Reafirma su inquebrantable unidad de destino con las demás provincias, territorios nacionales y tierras aún irredentas, en el marco del federalismo.

Esta Constitución promueve la democracia social de derecho, basada en el trabajo de personas libres, iguales y solidarias.

ART. 2º- Titularidad y defensa de la soberanía.

La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituídas y por sí, de acuerdo con las formas de participación que la presente Constitución establece.

Esta Constitución no pierde vigencia aún cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia.

En tal caso, tan pronto como el pueblo recobre la libertad, se restablecerá su imperio y serán juzgados los responsables y quienes hubieren colaborado, los que, además, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, sean éstos electivos o no, y son declarados infames traidores a la soberanía popular.

El no acatamiento de las órdenes y actos de tales usurpadores será legítimo.

Los actos y leyes que realicen y dicten podrán ser declarados nulos.

ART. 3º- Cláusula federal.

A los poderes públicos corresponde:

- 1) Ejercer los derechos y competencias no delegados al gobierno federal, para hacer plenamente efectivo el sistema federal adoptado en la Constitución Nacional.

- 2) Promover un federalismo de concertación con el gobierno federal y entre las provincias, con la finalidad de satisfacer intereses comunes y para participar en organismos de consulta y decisión de nivel federal y establecer relaciones intergubernamentales o interjurisdiccionales , mediante tratados y convenios.
- 3) Practicar en los lugares transferidos por compra o cesión al gobierno federal las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento del objetivo de la utilidad nacional de los mismos.
- 4) Concertar con la Nación regímenes de coparticipación impositiva.
- 5) Procurar y gestionar la desconcentración de la administración nacional.

ART. 4°- Indelegabilidad de facultades.

Los poderes públicos no pueden delegar facultades conferidas por esta Constitución, ni atribuirse otras que las expresamente acordadas por ella.

ART. 5°- Responsabilidad del Estado.

El Estado y, en su caso, sus funcionarios y empleados son responsables por los daños que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales.

El Estado Provincial es plenamente justiciable sin necesidad de autorización previa, en los términos de las leyes pertinentes.

Dos embargos no pueden recaer sobre los bienes afectados a la función asistencial del Estado ni exceder el veinticinco por ciento de los recursos ordinarios.

ART. 6°- Territorio y límites.

Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden.

La ley que autorice su modificación requiere los dos tercios de votos del número total de miembros de cada Cámara.

ART. 7º- Capital y asiento de las autoridades.

La ciudad de Salta es la capital de la Provincia y en ella residen las autoridades que ejercen el gobierno.

Por ley puede disponerse el traslado de la capital a otro lugar del territorio provincial. La misma requiere el voto de los dos tercios del total de los miembros de cada Cámara. Dicha ley no importa reforma de esta Constitución.

Art. 8º- División territorial e integración regional.

El territorio de la Provincia se divide en departamentos y municipios.

El Estado Provincial promueve la integración social, económica y cultural de las regiones con características e intereses comunes, mediante la creación de instituciones que tengan a su cargo la - planificación y ejecución del desarrollo regional, con participación en los organismos del Gobierno.

ART. 9º.- Fines del Estado y valor del Preámbulo.

El Preámbulo resume los fines del Estado Provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes.

Su texto es fuente de interpretación y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de todas las cláusulas de esta Constitución. No puede ser invocado para ampliar las competencias de los poderes públicos.

ART. 10.- Respeto y protección de la vida.

La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son intangibles. Su respeto y protección es deber de todos, y en especial de los poderes públicos.

ART. 11.- Libertad de culta - Culto católico.

Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho de todos para ejercer libre y públicamente su culto, según los dictados de su conciencia y sin otras restricciones que las que prescriben la moral y el orden público.

Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.

El Gobierno de la Provincia coop5ra al sostenimiento y protección del culto católico, apostólico y romano.

ART. 12°.- Principio de libertad

Ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.

Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendana la moral o al orden público ni perjudiquen los derechos de terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

ART. 13°- Principio de igualdad .

Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No se admiten fueros personales.

Quedan suprimidos todos los títulos y tratamientos honoríficos o de excepción para los cuerpos, magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera sea su investidura.

Los poderes públicos aseguran las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, procurando remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Garantizase la igualdad del hombre y la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

ART. 14 °- Principio de solidaridad.

La Provincia reconoce y garantiza los derechos inviolables de la persona , sea como individuo, sea en el seno de las formaciones sociales donde aquélla desarrolle su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, - económica y social.

ART. 15°- Aborígenes.

La Provincia protege al aborigen por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración en la vida nacional y provincial, a su radicación en la tierra, a su elevación económica, a su educación y a crear la conciencia de sus derechos, deberes, dignidad y posibilidades emergentes de su condición de ciudadano.

ART. 16°- Derechos y garantías - Reglamentación - Operatividad.

Todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta Constitución de conformidad con las leyes que reglamenten razonablemente su ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos en ella no pueden ser alterados - por disposición alguna.

Tales enunciaciones no son negatorias de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen de la libertad, igualdad y dignidad de la persona humana, de los requerimientos de la justicia social,

de los principios de la democracia social de derecho, de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Tales derechos tienen plena operatividad, sin que su ejercicio puede ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación.

C A P I T U L O I I

Deberes y derechos individuales

ART. 17º- Derechos fundamentales.

Todos los habitantes de la Provincia son, por naturaleza, libres y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad, actividad, prosperidad, intimidad personal y familiar, así como en su propia imagen.

Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley.

ART. 18º- Inviolabilidad de la defensa.

Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos en sede judicial, administrativa y en el seno de las entidades de derecho privado.

La ley prevé la asistencia letrada gratuita a las personas de modestos recursos.

ART. 19º- Libertad personal.

La libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido - sin orden de autoridad judicial, salvo el caso de flagrante delito y demás excepciones extraordinarias que prevé la ley.

Toda restricción de la libertad física se dispone dentro de los límites absolutamente indispensables para la investigación del -

ilícito o para evitar que el imputado pueda eludir la acción de la justicia o en relación con la gravedad de los hechos.

Todo detenido debe ser notificado en el acto de la detención, en forma comprensible y fehaciente, de la causa de la misma y conducido de inmediato ante el juez competente, quien ordena inmediatamente un examen psicofísico del mismo.

El Estado garantiza la asistencia letrada del imputado en las diligencias policiales y judiciales, y la asistencia de oficio cuando no se designe defensor particular. La ley regula la excarcelación de oficio.

Las torturas, tratos inhumanos o degradantes comprometen la responsabilidad de los agentes públicos, funcionarios y jueces que los realicen, consientan o se abstengan de denunciarlos. La ley establece las sanciones para estos casos.

ART. 20°.- Responsabilidad penal - Presunción de inocencia - Juez competente.

La responsabilidad penal es personal.

Nadie es considerado culpable hasta la sentencia definitiva ni puede ser penado o sancionado por acciones u omisiones que, al momento de producirse, no constituyan delito, falta o contravención.

Todos tienen derecho a ser juzgado por juez previamente competente. Nadie puede ser juzgado por comisiones o tribunales especiales, sea cual fuere la denominación que se les dé.

Nadie será acusado o juzgado dos veces por un mismo delito, falta o contravención.

La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma puede agravar la situación del imputado, procesado o condenado.

La duda actúa en favor del imputado.

En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermano, afines hasta segundo grado, tutores, pupilos o personas de ostensible trato familiar.

ART. 21º.- Régimen penitenciario

Las penas privativas de la libertad tienen como fin la reeducación y la reinserción social de quienes las sufren. Las cárceles son sanas y limpias. Todo penado tiene el deber de trabajar con derecho a una justa remuneración y a los beneficios de la seguridad social, como asimismo a mantener relaciones familiares y acceder a la instrucción.

Los detenidos están separados de los procesados y estos de los condenados. Los menores y mujeres son alojados en establecimientos separados.

Los condenados por tribunales de la Provincia cumplen la pena en cárceles de su jurisdicción. Las excepciones a estas previsiones sólo pueden disponerse por decisión judicial fundada o por ley.

ART. 22º.- Derecho a la privacidad.

Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados, en virtud de orden escrita de juez competente.

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional, el magistrado que lo dispone debe fundar la decisión.

- Las autoridades policiales proporcionan antecedentes penales o ju-

diciales de los habitantes exclusivamente en los casos previstos por la ley.

ART. 23º- Libertad de expresión.

Todos tienen libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información.

Todos tienen derecho a la libre producción y creación intelectual, literaria artística y científica.

Ninguna autoridad provincial o municipal dicta leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula. Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agravante, sufra perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su rectificación o respuesta.

En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, la que debe expedirse en trámite sumarísimo.

Se excluye de este derecho a los funcionarios por informaciones referidas a su desempeño o función.

Los delitos cometidos en uso de la libertad de expresión son juzgados en procedimiento ordinario y sancionados con arreglo al Código Penal.

ART. 24º.- Libertad de enseñar y aprender.

Esta Constitución garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender.

ART. 25°- Derecho de reunión y petición.

Queda asegurado a todas las personas de derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, siempre que no turben el orden público, así o no también el de peticionar individual o colectivamente ante todas o cada una de las autoridades.

En ningún caso una reunión de personas puede atribuirse la representación de los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre.

ART. 26°- Libertad de asociación.

Todas las personas tienen derecho de asociarse libremente con fines lícitos, sin necesidad de autorización previa.

ART. 27°- Derecho de tránsito.

Todos los habitantes que se encuentren legalmente en el territorio de la Nación tienen derecho de entrar, permanecer, transitar y salir de la provincia, llevando sus bienes y sin perjuicio del derecho de terceros.

ART. 28°- Libertad de trabajo.

La libertad de trabajo y del ejercicio de cualquier actividad económica y profesional es un derecho asegurado a toda persona, siempre que no sea contraria al orden público o al derecho de terceros.

ART. 29°- Admisibilidad en el empleo público.

Todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. La ley determina los casos en que se requiera la ciudadanía.

ART. 30°- Protección del medio ambiente - Defensa de la calidad de vida.

Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo.

Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias.

C A P I T U L O I I I

Deberes y derechos sociales

T I T U L O I

De la familia

ART. 31º- Reconocimiento y protección de la familia.

La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad.

Los poderes públicos protegen y reconocen sus derechos para el cumplimiento de sus fines.

La madre goza de especial protección y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su esencial función familiar.

ART. 32º- De la infancia.

El Estado asegura la protección de la infancia, cubriendo sus necesidades afectivas, ambientales, de educación, salud, alimentación y recreación.

ART. 33º- De la juventud

El Estado promueve el desarrollo integral de los jóvenes, posibilita su perfeccionamiento y su aporte creativo.

Propende a lograr una plena formación cultural, cívica y laboral, que desarrolle la conciencia nacional, que lo arraigue a su medio y que asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.

ART. 34º- De la ancianidad.

Se reconoce a la ancianidad el derecho a una existencia digna, considerándola como una etapa fecunda de la vida, susceptible de una integración activa sin marginación, y es deber del Estado proteger, asistir y asegurar sus derechos.

La Provincia procura a los habitantes de la tercera edad:

- 1) La asistencia.
- 2) La vivienda
- 3) La alimentación
- 4) El vestido
- 5) La salud física
- 6) La salud moral
- 7) El esparcimiento
- 8) El trabajo acorde con sus condiciones físicas
- 9) La tranquilidad
- 10) El respeto

ART. 35°- De los discapacitados.

Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales o psíquicos la asistencia apropiada, con especial énfasis en la terapia rehabilitadora, y en la educación especializada.

Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros plenos de la comunidad.

ART. 36°- De la vivienda

Los poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda digna y promueven la constitución del asiento del hogar como bien de familia.

T I T U L O I I

De la seguridad social y la salud

La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas frente a las contingencias limitativas en su vida individual o social.

El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad social y estimula los sistemas de instituciones creados por la Comunidad con el fin de superar sus carencias.

ART. 38º- Seguro social.

El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter de integral e irrenunciable, coordinándose la acción y legislación provincial con la nacional.

Los interesados participan en el gobierno del sistema que establezca la ley.

ART. 39.- Régimen previsional.

El régimen jubilatorio provincial es único para todas las personas y asegura la equidad y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.

El haber previsional debe ser móvil y guardar estrecha relación con la remuneración del mismo cargo en actividad.

ART. 40º- Derecho a la salud.

La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social.

Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades .

ART. 41°.- De los planes de salud.

El Estado elabora el Plan de Salud Provincial con la participación de los sectores socialmente interesados, contemplando la promoción, prevención, restauración y rehabilitación de la salud, estableciendo las prioridades con un criterio de justicia social y utilización racional de los recursos. Coordina con la Nación y las otras provincias, las políticas pertinentes, propendiendo a la integración regional en el aspecto asistencial, en la investigación y en el control de las patologías que les son comunes. El sistema de salud asegura el principio de libre elección del profesional.

T I T U L O I I I

Del trabajo

ART. 42°- Protección del trabajo.

El trabajo en sus diversas formas, es un derecho y un deber en la realización de la persona y en su activa participación en la construcción del bien común. Por su alta finalidad social goza de la especial protección de las leyes, que deberán procurar al trabajador las condiciones de una existencia digna y libre.

La Provincia reconoce al trabajo como la fuente genuina del progreso y bienestar de todos sus habitantes. A través de él las personas manifiestan su capacidad creadora.

ART. 43°- Derechos del trabajador.

Los poderes públicos, ejerciendo las facultades propias del poder de policía, reconocen y resguardan los siguientes derechos del trabajador:

- 1) Derecho de trabajar.

- 2) Derecho a una retribución justa.
- 3) Derecho a la capacitación
- 4) Derecho a condiciones dignas de trabajo.
- 5) Derecho a la preservación de la salud.
- 6) Derecho al bienestar.
- 7) Derecho a la seguridad social.
- 8) Derecho a la protección de la familia.
- 9) Derecho al mejoramiento económico.
- 10) Derecho a la defensa de los intereses profesionales.

ART. 44°- Procedimiento laboral.

Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador o sus derecho-habientes.

Se propende a que el procedimiento sea oral, sumario y sustanciado ante tribunales colegiados, con las limitaciones en materia de recursos, que señala la ley.

ART. 45°- Derechos gremiales.

Los trabajadores y los dirigentes sindicales no pueden ser discriminados ni perjudicados por sus actividades gremiales.

Las organizaciones profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las leyes de la Nación y de la Provincia.

Los sindicatos no pueden ser intervenidos ni sus sedes clausuradas, ni sus fondos bloqueados sino por orden de Juez competente.

C A P I T U L O I V

La educación y la cultura

ART. 46°- Derecho a la educación.

La educación es un derecho de la persona y un deber de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e insoslayable.

ART. 47º- Fin de la educación

El fin de la educación es el desarrollo integral, armonioso y permanente de la persona en la formación de un hombre capacitado para convivir en una sociedad democrática participativa basada en la libertad y la justicia social.

ART. 48º- Sistema educacional.

El sistema educacional contempla las siguientes bases:

- La educación pública estatal es gratuita, común, asistencial y obligatoria en el nivel que fije la ley.
- Promueve el desarrollo de la capacidad crítica del educando.
- Difunde y fortalece los principios reconocidos por esta Constitución.
- Consolida la familia y garantiza la libre elección del establecimiento educacional.
- Establece el conocimiento de la realidad provincial, nacional, latinoamericana y universal.
- Promueve el empleo de los medios y técnicas de comunicación en beneficio de la educación popular.
- Impulsa la educación media, técnica y superior y la investigación científica y tecnológica.
- Integra educación y trabajo, capacitando para las tareas vinculadas a los tipos de producción características de cada zona.
- Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación reli-

giosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

- Promueve la educación del adulto y sostiene la educación especial.
- Las personas y asociaciones tienen derecho a la creación de - instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución. Las mismas son reconocidas, supervisadas y apoyadas en su caso por el Estado.
- Tiende a una mayor participación y desconcentración.
- Difunde la educación sanitaria.

ART. 49º- Gobierno de la educación.

El despacho de los asuntos de educación está a cargo de un Ministerio específico, que ejecuta la política educacional, cultural, científica y tecnológica.

La gestión administrativa y técnica de la educación inicial y primaria compete al Consejo General de Educación, entidad autárquica en la que están representados los docentes y los padres de los - educandos. Sus miembros son nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Pueden crearse Consejos Escolares integrados por padres de alumnos para la atención inmediata de los requerimientos esenciales de la comunidad educativa, sin injerencia en la conducción técnica de la enseñanza.

ART. 50º- Docentes

El Estado Provincial asegura la formación docente y estimula la vocación de perfeccionamiento a través de sistemas que procuren mejorar la calidad de enseñanza.

La ley, a través del Estatuto del Docente, garantiza sus derechos y determina sus deberes.

ART. 51º- Cultura.

El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y elimina toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural.

Promueve las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquéllas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano.

El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado.

Las manifestaciones culturales y tradicionales de reconocido arraigo y trascendencia popular son protegidas y promocionadas por el Estado.

C A P I T U L O V

Derechos Políticos

T I T U L O I

Partidos políticos

ART. 52º- Partidos y movimientos políticos.

Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente con fines políticos, en partidos y movimientos.

Los partidos políticos son instrumentos de participación con los que se expresa la voluntad política del Pueblo para integrar los poderes del Estado. Su organización, estatutos y finalidades, deben respetar los principios democráticos. El Estado les presta ayuda para la formación y capacitación de sus dirigentes, teniendo en cuenta el caudal electoral del último comicio.

ART. 53°- Candidatos.

Compete exclusivamente a los partidos políticos y frentes electorales postular candidatos para las elecciones populares. Los procedimientos de designación de los mismos son democráticos y con manifestación pública de principios y plataformas.

T I T U L O I I

Sistema electoral

ART. 54°- Sufragio - Naturaleza y caracteres.

El sufragio es un derecho que corresponde a todo ciudadano y una función política que tiene el deber de ejercitar, con arreglo a esta Constitución y a la ley.

El voto es universal, secreto y obligatorio. Son electores los ciudadanos inscriptos en el registro cívico electoral, vigente a la época de la respectiva elección y domiciliados en el territorio provincial.

Los extranjeros son electores en el orden municipal en las condiciones que determine la ley.

ART. 55°- Régimen electoral.

La ley establece el régimen electoral. En caso de que la misma opte por el de mayoría, debe asegurar la representación proporcional de las minorías.

Los diputados y senadores son elegidos por el pueblo de los departamentos de la Provincia, formando cada uno de ellos, a ese efecto, un distrito electoral.

La autoridad comicial dispone de la fuerza pública a los efectos

de asegurar la regularidad del acto.

Todos los electores gozan durante el acto comicial de inmunidad de arresto, salvo el caso de flagrante delito o de orden de autoridad competente.

El Poder Ejecutivo puede suspender el comicio excepcionalmente por fuerza mayor, de conformidad a los casos determinados por ley.

ART. 56°- Acción popular por delito electoral.

Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación ejercidos contra los electores antes, durante o después del acto electoral son considerados atentados contra el derecho y la libertad electoral y penados con prisión incommutable. La acción que nace de estos hechos es popular y se puede ejercer hasta un año después de haber sido cometidos.

ART. 57°- Tribunal electoral.

El Tribunal Electoral permanente de la Provincia es presidido por el Presidente de la Corte de Justicia e integrado por dos jueces de la misma y dos de segunda instancia, designados por sorteo y:

- 1) Dispone lo necesario para la organización y funcionamiento de los comicios.
- 2) Oficializa candidaturas con aprobación de las boletas que se utilicen para los comicios.
- 3) Practica el escrutinio definitivo, proclama a los electos y

otorga sus diplomas. Establece los suplentes que entrarán en funciones, de acuerdo con la ley.

4) Juzga la validez de las elecciones.

5) Confecciona, en su caso, registros cívicos electorales.

ART. 58º- Derecho de iniciativa.

Se reconoce a los ciudadanos la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, que deben ser avalados en las condiciones prescriptas por la ley.

No pueden plantearse por vía de iniciativa popular los asuntos - concernientes a la aprobación tratados, presupuesto, creación o derogación de tributos provinciales, a la prerrogativa de gracia y reforma de la Constitución.

ART. 59º- Referéndum.

Las cuestiones de gobierno y el mantenimiento, reforma o derogación de normas jurídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a la consideración del cuerpo electoral, mediante referéndum.

La validez y eficacia del referéndum requiere:

- 1) Convocatoria al cuerpo electoral, dispuesta por ley.
- 2) Que los votos emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos electorales.
- 3) Que la decisión corresponda a la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.

Los poderes públicos realizan la publicidad con carácter estrictamente institucional y facilitan a los partidos políticos en forma

equitativa, los medios para que den a conocer sus posiciones.

No es admisible el referéndum para normas tributarias, presupuestarias o de gracia.

La decisión del electorado es obligatoria para todos los poderes públicos y, en su caso, se promulga y se publica.

C A P I T U L O V . I

Administración pública

ART. 60°- Principios generales.

La administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los intereses del Pueblo. Actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos.

La descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley, atendiendo a los intereses y necesidades de las diferentes regiones de la Provincia.

La administración pública se ajusta al principio de centralización normativa y desconcentración operativa.

Los funcionarios públicos, para ocupar sus cargos, juran fidelidad a la Patria y lealtad a la Constitución Nacional y a la Presente.

ART. 61°- Incompatibilidad e inhabilidades.

Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, salvo la docencia y las excepciones que determine la ley.

Ningún funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o mantener intereses privados contrarios a los del Es-

tado Provincial o de los municipios, bajo sanción de exoneración.

ART. 62º.- Declaración jurada y remuneración extraordinaria.

Los agentes públicos y los funcionarios políticos deben presentar declaración jurada de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión.

No puede dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún miembro de los poderes públicos por servicios prestados o que se le encomienden en el ejercicio de su función.

ART. 63º.- Carrera administrativa.

La carrera administrativa constituye un derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales y municipales.

La ley organiza la carrera administrativa sobre las siguientes bases:

- 1) Determina la jerarquía hasta la cual se extiende la carrera administrativa.
- 2) El ingreso se produce mediante sistemas objetivos de selección. El ascenso se funda en el mérito del agente.
- 3) El agente de carrera goza de estabilidad.
- 4) Corresponde igual remuneración por igual función.
- 5) El agente tiene derecho a la permanente capacitación.
- 6) Los agentes de la administración pública participan a través de sus representantes, en los órganos colegiados de administración de los entes descentralizados, de acuerdo a los términos de las pertinentes leyes.

La ley asigna la partida presupuestaria destinada a los cargos políticos.

El personal comprendido en el párrafo anterior no goza de estabilidad.

ART. 64º- Derecho de agremiación.

Se garantiza a los agentes públicos el derecho de agremiarse libremente en sindicatos, que pueden:

- 1) Concertar convenios colectivos de trabajo.
- 2) Recurrir a la conciliación y al arbitraje.
- 3) Ejercer el derecho de huelga, conforme a la reglamentación, que asegure el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

C A P I T U L O V I I

Finanzas públicas

ART. 65º- Tesoro provincial.

El Estado Provincial provee a los gastos públicos con los fondos del tesoro constituido, conforme a las leyes, con recursos provenientes de:

- 1) Los tributos.
- 2) La renta y el producido de la venta de sus bienes.
- 3) La actividad económica del Estado.
- 4) Los derechos, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sustancias minerales o del uso de bienes de dominio público.
- 5) Los empréstitos y demás operaciones de crédito.

— ART. 66.- Tributos

a legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas.

El mayor valor de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas, es el hecho imponible de la contribución de mejoras, en los términos de la legislación respectiva.

Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación.

ART. 67.- Presupuesto.

El presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado Provincial y prevé los pertinentes recursos.

Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, el - que puede además proponer presupuestos plurianuales sin que, en ningún caso, éstos puedan exceder el período de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal.

El presupuesto no contiene disposiciones creadoras, derogatorias o modificatorias de otras normas.

El presupuesto es remitido a la Legislatura con el pertinente Plan de Obras Públicas.

Toda ley u ordenanza que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento. Tales gastos y recursos deben incluirse en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo - sanción de caducidad.

El tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades indicativas:

- Educación y Cultura.
- Salud Pública y Seguridad Social
- Poderes del Estado y sus órganos.
- Obras Públicas.

ART. 68º- Empréstitos y fondos públicos.

La Legislatura puede autorizar empréstitos sobre el crédito general de la Provincia o emisión de fondos públicos.

La ley que lo autorice debe ser sancionada por los dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara, actuando como originaria la de Diputados.

Toda ley que sancione empréstitos especifica los recursos especiales con que deben atenderse los servicios de la deuda y su amortización, así como los objetos a que se destina el monto del empréstito.

Las sumas que se obtengan por empréstitos no pueden aplicarse a otros objetos que los especificados en la ley que los autorice.

La totalidad de los servicios de intereses y amortización no puede exceder la cuarta parte de los recursos ordinarios del Tesoro Provincial.

C A P I T U L O V I I I

Economía y Recursos Naturales

T I T U L O I

Economía.

ART. 69º- Actividad económica. Distribución de la riqueza.

La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad. La iniciativa económica privada es libre.

Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza, alientan la libre competencia y sancionan la concentración monopólica, la usura y la especulación abusiva.

ART. 70.- Participación en la administración y ganancia de las empresas.

Los poderes públicos estimulan, con incentivos adecuados, a las empresas privadas que hagan partícipe al trabajador en sus ganancias, control de su producción y colaboración en su dirección.

ART. 71.- Cooperativas.

Los poderes públicos reconocen la función económica y social de las cooperativas y alientan su formación y desarrollo.

Las cooperativas que colaboren con los fines del Estado en el desarrollo económico de la Provincia gozan de especial apoyo oficial.

Art. 72.- Gremialismo empresario.

Las asociaciones gremiales empresarias contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios.

ART. 73.- Función social de la propiedad. Expropiación.

La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.

El ejercicio del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social que debe cumplir.

La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

ART. 74º- Desarrollo económico social.

Los poderes públicos:

- Realizan una política orientada al pleno empleo.
- Fomentan la producción agraria y su desarrollo tecnológico.
- Estabilizan la población rural y procuran su acceso a la propiedad.
- Estimulan la industrialización de la Provincia promoviendo, preferentemente, la transformación de las materias primas en el ámbito de aquélla y la radicación de capitales y tecnología.
- Promueven la obtención de nuevos mercados nacionales o internacionales, para los productos locales.
- Elaboran plenes de colonización de tierras en función de su mayor aprovechamiento económico social.

ART. 75º- Planificación. Consulta a los sectores interesados.

Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo interesados, sancionan planes económico-sociales indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal. Dichos planes -

procuran el desarrollo equilibrado y armonioso de la provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del noroeste argentino y de la Nación.

Por ley se crea el Consejo Económico Social integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, la ciencia y la tecnología. Dicho Consejo es órgano de consulta de los poderes públicos. Es obligatorio consultarlo previamente en el caso de planes económico-sociales, culturales, científicos y tecnológicos.

ART. 76°- Crédito.

Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación del crédito hacia tareas productivas, impidiendo la especulación. Ello dentro del marco de las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito.

El Banco Provincial de Salta es un instrumento oficial de la política financiera del gobierno de la Provincia, caja obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales y municipales. Ejecuta la política crediticia de la Provincia y a través de él se canaliza el ahorro orientado a la producción en especial a la industrialización.

Es administrado por un directorio cuya composición en materia de una ley específica, que prevé la representación de las diferentes regiones provinciales y de los sectores de la actividad económica.

ART. 77.- Servicios Públicos

Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios. Se prestan en forma directa, por medio de concesión o a través de órganos constituidos por el Estado, los agentes afectados a la prestación y los usuarios.

T I T U L O I I

Recursos naturales.

ART. 78°- Procesos ecológicos esenciales.

Es obligación del Estado y de toda persona proteger los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de vida, de los que dependen el desarrollo y la supervivencia humana.

Los poderes públicos sancionan una ley general de recursos naturales que prevé los medios y estímulos para alcanzar los objetivos señalados y sanciona los actos u omisiones que los contraríen.

ART. 79°- De la tierra.

La tierra es un instrumento de producción y objeto de una explotación racional para el adecuado cumplimiento de su función social y económica. Es obligación de todos conservar y recuperar, en su caso, la capacidad productiva de ésta, y estimular el perfeccionamiento de las técnicas de laboreo.

ART. 80°- De los recursos mineros.

La Provincia promueve la exploración y explotación de los yacimientos mineros existentes en su territorio, velando por la co-

rrecta aplicación y cumplimiento de las leyes. Procura la industrialización de los minerales en su lugar de origen, favorece la radicación de empresas y atiende el mantenimiento y desarrollo de las comunicaciones y energía, en zonas mineras.

ART. 81°- De las aguas.

Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.

Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas que integran el dominio de la Provincia.

El uso de las aguas del dominio público destinadas a las necesidades de consumo de la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de personas privadas.

El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por la ley y en atención a su función social y económica.

Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de consorcios de regantes.

Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de aquella.

La Provincia regula el aprovechamiento de los ríos interprovinciales que nacen o atraviesan su territorio, mediante leyes o tratados con las otras provincias ribereñas.

ART. 82°- De los bosques.

Los poderes públicos promueven el aprovechamiento racional de los bosques, resguardan la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de mayor interés, a través de la forestación y reforestación.

Para alcanzar tales fines, los poderes públicos, ejercen las facultades inherentes al poder de policía.

ART. 83°- De las fuentes de energía.

Los poderes públicos promueven la utilización y conservación de las fuentes de energía.

En el caso de fuentes de energía situadas en el territorio de la Provincia y cuya explotación corresponda a la Nación, se concertará con el Gobierno Federal las políticas de regalías y contribuciones a percibir de éste. Además, los poderes públicos gestionan la intervención de representantes de la Provincia en el gobierno de los entes federales encargados de la explotación de los recursos naturales previstos en este párrafo. Una ley de la Provincia asigna una participación extraordinaria en las regalías o contribuciones a favor de las regiones y municipios de los cuales se extraigan los recursos.

Los poderes públicos estimulan la investigación, desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales.

C A P I T U L O I X

Garantías.

ART. 84°- Sujeción a la Constitución.

La Constitución de la Nación, las leyes nacionales y esta Constitución, son ley suprema de la Provincia. Los poderes públicos y los habitantes están obligados a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o los reglamentos.

El ejercicio de los derechos subjetivos y de las garantías específicas, reconocidos o declarados en esta Constitución a favor de las personas físicas o jurídicas o de un grupo de ellas, se asegura también mediante las garantías genéricas del amparo, hábeas corpus y la protección de los intereses difusos.

ART. 85°- Amparo.

La acción de amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios de la autoridad, excepto la judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios de los derechos subjetivos y las garantías específicas de esta Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado.

Todo juez letrado es competente para entender en la acción, aún en el caso que integre un tribunal colegiado. La acción de amparo no queda sujeta a las leyes que regulen la competencia de los jueces.

El juez de amparo escucha a la autoridad o particular de quien provenga la amenaza o la restricción.

Los recursos nunca suspenden la ejecución de la sentencia cuando

la misma acoge la pretensión del amparado.

La acción se interpone a través de formas fehacientes, sean cuales fueren éstas.

Salvo en el caso de hechos de inusitada excepcionalidad, quedan prohibidas la recusación y excusación de los jueces. En estos casos se remitirán los autos que admitan aquellas al Ministerio Público para que éste decida si dan lugar a la promoción del procedimiento de remoción del juez.

La no prestación injustificada por parte del Estado de los servicios educativos y de salud da lugar a esta acción.

Todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez de amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución.

Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción.

ART. 86°- Hábeas corpus.

El hábeas corpus procede frente a actos u omisiones de la autoridad o particulares que amenacen o restrinjan indebidamente la libertad ambulatoria del individuo. Procede, además, cuando mediare agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de la libertad.

El hábeas corpus se puede interponer en cualquier forma y los jueces deben declarar su admisibilidad de oficio.

La procedencia del hábeas corpus implica el inmediato cese de la amenaza, de la restricción de la libertad ambulatoria o del

agravamiento ilegítimo de las condiciones de una detención.
Son aplicables las mismas disposiciones previstas en el artículo anterior.

ART. 87º- Legitimación.

Cualquier persona puede deducir la acción de amparo o interponer el hábes corpus en el interés de un tercero sin que sea exigible la acreditación de representación de ningún tipo.

ART. 88º- Protección de intereses difusos.

La ley reglamenta la legitimación procesal de la persona o grupos de personas para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos.

Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa competente, requiriendo su intervención, en caso de que los mismos fueron vulnerados.

ART. 89º- Acción popular de inconstitucionalidad.

Todo habitante puede interponer la acción popular directa para que se declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución.

Los firmantes de una demanda manifiestamente improcedente son sancionados de acuerdo a la ley.

S E C C I O N S E G U N D A

PRIMERA PARTE

Poder Legislativo

C A P I T U L O I

ART. 90 - Composición. Funciones.

La legislatura está compuesta por una Cámara de Diputados y otra de Senadores.

Ejerce el Poder Legislativo mediante leyes, controla la gestión del Poder Ejecutivo y hace efectivas las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia.

C A P I T U L O I I

Cámara de Diputados.

ART. 91°- Forma de elección.

La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente y a simple pluralidad de sufragios por el pueblo de los Departamentos. La ley electoral determina el número de diputados por Departamento, de acuerdo con su población establecida por el último censo nacional o provincial. La composición de la Cámara no puede exceder de sesenta miembros. Cada Departamento está representado por un Diputado como mínimo.

El reemplazo de los diputados que cesen en sus mandatos por muerte, renuncia o cualquier otra causa se hace por el candidato titular que sigue en la lista y no haya resultado electo. Agotada la misma, se continúa con la de suplentes. Estos no gozan de ninguna inmunidad o derecho mientras no sean incorporados a la Cámara.

ART. 92°- Duración.

El cargo de diputado dura cuatro años, pero la Cámara se renueva por mitad cada dos años y sus miembros son reelegibles.

Dicho período de cuatro años del cargo de diputado se cuenta desde el día que se fije para la instalación de la Legislatura que le corresponda, hasta el día que precede a igual solemnidad, cuatro años más tarde.

ART. 93°- Requisitos.

Para ser diputado se requiere ser ciudadano y tener una residencia efectiva de cuatro años inmediatamente anteriores a su elección en el Departamento pertinente. Tener veintiún años de edad como mínimo y en su caso, el ejercicio de la nacionalidad adquirida legalmente durante cinco años.

ART. 94°- Incompatibilidades.

Es incompatible el cargo de diputado con el ejercicio de cualquier cargo electivo en el Gobierno Federal, Provincial, Municipal o de otra provincia y con el ejercicio de una función, comisión o empleo público de la Nación, provincias, municipalidades, salvo la docencia. El que incurriere en alguna de estas incompatibilidades esa de inmediato en sus funciones de diputado.

No pueden ser diputados los eclesiásticos regulares, los oficiales y sufoficiales en actividad de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni los excluidos del registro de electores.

ART. 95°- Competencia exclusiva.

Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

- 1) La iniciativa de creación de las contribuciones e impuestos generales de la Provincia y de las leyes sobre empréstitos y - emisión de fondos públicos.

- 2) Acusar ante el Senado a los altos funcionarios y magistrados de la Provincia, que según esta Constitución quedan sometidos a juicio político por delitos en el ejercicio de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo.

ART. 96°- Desafuero.

Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no puede procederse contra su persona sin que se solicite por tribunal competente el allanamiento de la inmunidad del acusado, a cuyo efecto se remitirán los antecedentes a aquella Cámara y no podrá allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de votos de los miembros presentes.

C A P I T U L O I I I

Cámara de Senadores

ART. 97°- Forma de elección - Requisitos.

El Senado se compone de tantos miembros cuantos sean los Departamentos de la Provincia, correspondiendo un senador a cada Departamento. Se elige también un senador suplente.

Son requisitos para ser Senador tener treinta años de edad y reunir las demás condiciones necesarias para ser Diputado.

ART. 98°- Acuerdos.

El Senado presta su acuerdo a los nombramientos y remociones de los funcionarios que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito. No son exigibles más acuerdos que los previstos en esta Cons-

titución.

ART. 99º- Incompatibilidades.

Son también aplicables al cargo de Senador, las incompatibilidades establecidas en el artículo 94.

ART. 100 - Duración.

El cargo de Senador dura cuatro años, pero la Cámara se renueva por mitada cada dos años.

ART. 101.- Atribuciones exclusivas.

Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal, prestando sus miembros nuevo juramento para este caso. Cuando el acusado fuere el gobernador o vicegobernador de la Provincia, debe presidir el Senado el Presidente de la Corte de Justicia, pero no tiene voto salvo en caso de empate.

ART. 102.- Duración del juicio político.

En ningún caso el juicio político puede durar más de cuatro meses contados desde la fecha en que la Cámara de Diputados declare haber lugar a su formación; puede prorrogar sus sesiones para terminarlos dentro del plazo expresado. Vencido el término mencionado sin haber recaído resolución, queda absuelto el acusado.

ART. 103.- Fallo del Senado.

El fallo del Senado, en estos casos, no tiene más efecto que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar puestos de

honor o a sueldo de la Provincia. Ningún acusado puede ser declarado culpable sin una mayoría de los dos tercios de votos de los miembros presentes. Debe votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el acta de sesiones el voto de cada Senador.

ART. 104.- Acusación ante tribunales ordinarios.

El que sea condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a acusación, juicio y castigo por ante los tribunales ordinarios.

ART. 105.- Presidencia del Senado.

El vicegobernador de la Provincia es el Presidente del Senado, con voz pero sin voto, salvo en caso de empate.

ART. 106.- Vicepresidentes.

El Senado designa sus vicepresidentes

C A P I T U L O I V

Disposiciones comunes a ambas Cámaras

ART. 107.- Tiempo de las elecciones.

Los Diputados y Senadores son elegidos simultaneamente con el gobernador y vicegobernador, salvo cuando sólo haya renovación parcial de las Cámaras.

ART. 108.- Sesiones ordinarias.

Las Cámaras abren sus sesiones ordinarias por sí mismas el 1º de abril de cada año y las cierran el 30 de noviembre. Funcionan en la Capital pero pueden hacerlo por causas graves en otro punto del territorio de la Provincia, previa resolución de ambas Cámaras.

Las sesiones ordinarias pueden prorrogarse por resoluciones concordes de ambas Cámaras, adoptadas antes de fenecer el período.

ART. 109.- Sesiones extraordinarias.

El Poder Ejecutivo puede convocar a las Cámaras extraordinarias siempre que el interés público lo reclame. Son también convocadas cuando así lo pidiere, con solicitud escrita y motivada, la tercera parte de los miembros de una de las Cámaras. El pedido se presenta al Poder Ejecutivo, quien hace la convocatoria y da a publicidad la solicitud.

Si éste no convoca, y un tercio de la otra Cámara pidiere también la convocatoria, la harán los presidentes.

En estas sesiones sólo se tratan los asuntos que motivan la convocatoria.

ART. 110.- Quórum.

Para funcionar se necesita una mayoría absoluta, pero un número menor puede reunirse al solo efecto de acordar las medidas que estime necesarias para compeler a los inasistentes.

ART. 111.- Suspensión de sesiones.

Ninguna de las Cámaras puede suspender sus sesiones por más de tres días sin acuerdo de la otra.

ART. 112.- Facultades de investigación.

Es atribución de cada Cámara constituir comisiones para investigar cualquier dependencia centralizada, descentralizada, empresas públicas, sociedades del Estado o en las que participe la Provincia,

a los fines del ejercicio de sus propias atribuciones. También puede investigar actividades que comprometan el interés general. En su actividad no pueden interferir el ejercicio de las atribuciones . También puede investigar actividades que comprometan el interés general.

En su actividad no pueden interferir el ejercicio de las atribuciones que integran la zona de reserva de los otros poderes, ni afectar los derechos y garantías consagrados en esta Constitución.

ART. 113.- Asistencia de los Ministros.

Los Ministros del Poder Ejecutivo están facultados para asistir a las sesiones de cada Cámara, con voz pero sin voto. Pueden ser acompañados por los Secretarios de Estado dependientes de su Ministerio o por la máxima autoridad de los entes descentralizados, quienes asisten con voz pero sin voto.

Los Ministros, Secretarios de Estado y las máximas autoridades de los entes descentralizados deben comparecer ante la Cámara o sus comisiones , cuando son citados a fin de suministrar informes.

Corresponde a toda la administración centralizada, descentralizada o sociedades en las que participe la Provincia, responder por escrito los requerimientos de informes de cada Cámara o de sus comisiones.

ART. 114.- Reglamento - Mesa Directiva.

Cada Cámara dicta y se rige por un reglamento especial y nombra su mesa directiva.

ART. 115 - PRESUPUESTO - EMPLEADOS..

Forman también su presupuesto, el que debe considerarse por la Legislatura conjuntamente con el presupuesto general, y establecen la forma de nombramiento de sus empleados.

ART. 116 - Sesiones públicas.

Forman también su presupuesto, el que debe considerarse por la Legislatura conjuntamente con el presupuesto general, y establecen la forma de nombramiento de sus empleados.

ART. 116 - Sesiones públicas

Las sesiones de ambas Cámaras son públicas y sólo pueden hacerse secretas por asuntos graves y de acuerdo de la mayoría.

ART. 117 - Inmunidad de opinión.

Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

ART. 118 - Inmunidad de arresto.

Los diputados y Senadores gozan de inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el cese de su mandato, y no pueden ser arrestados por ninguna autoridad sino en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito pasible de pena corporal, dándose inmediata cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la inmunidad personal.

ART. 119.- Desafuero.

Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado.

ART. 120.- Facultad de corrección.

Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto, concurrir los dos tercios de votos de los miembros presentes; pero basta la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renunciaciones que voluntariamente hicieren de su cargo.

ART. 121 - Juramento.

En el acto de su incorporación los Senadores y Diputados prestan juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de acuerdo a lo que prescribe esta Constitución y la de la Nación.

ART. 122.- Inhabilidades.

No pueden ser elegidos legisladores los condenados por sentencia, mientras dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración; los fallidos no rehabilitados; los afectados de incapacidad física o moral; ni los deudores morosos del fisco provincial, después de sentencia judicial que los condene.

ART. 123.- Violación de fueros parlamentarios.

Cada Cámara tiene autoridad para corregir, con arresto que no pa-

se de un mes a toda persona de fuera de su seno que viole sus privilegios, con arreglo a los principios parlamentarios; pudiendo, cuando a su juicio el caso fuera grave y lo hallase conveniente, ordenar que el inculpado sea sometido a los tribunales para su enjuiciamiento.

C A P I T U L O V

Atribuciones y deberes del Poder Legislativo

ART. 124.- Competencia.

Corresponde al Poder Legislativo:

1) Sancionar las leyes reglamentarias de los Derechos, Deberes y Garantías consagrados por esta Constitución.

2) Sancionar la Ley de Presupuesto General.

Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la Legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlos, tomando como base las leyes vigentes.

Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura sancione una nueva Ley de Gastos y Recursos, se tienen por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en vigor.

La Ley de Presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de la hacienda central, hacienda descentralizada y haciendas paraestatales y fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio.

El presupuesto a aprobar por la Legislatura refleja analíticamente los ingresos y gastos.

No pueden las Cámaras pasar a receso sin haber aprobado el pre-

supuesto y sin haber considerado la Cuenta General del Ejercicio.

3) Aprobar, observar o desechar anualmente la Cuenta General - del Ejercicio que le remita el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, correspondiente al movimiento de la totalidad de la hacienda publica provincial realizado durante el año anterior.

4) Disponer la descentralización de servicios de la Administración Provincial y la constitución de empresas públicas y sociedades del Estado.

5) Facultar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos u operaciones de créditos y acordar aportes no reintegrables a las municipalidades.

6) Reglamentar y autorizar los juegos de azar y destreza.

7) Aprobar o desechar los tratados suscriptos por la Provincia con otras provincias o con la Nación, pudiendo autorizar que el Poder Ejecutivo realice aquellos que no impongan obligaciones - significativas a la Provincia.

8) Fijar las divisiones territoriales de la Provincia.

9) Conceder amnistías generales.

10) Autorizar las medidas de defensa en los casos en que la seguridad pública de la Provincia lo exija.

11) Establecer los impuestos y contribuciones para los gastos del servicio público.

12) Legislar sobre tierras públicas de la Provincia, debiendo dictarse una ley general sobre la materia.

- 13) Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles y administrativas de los funcionarios y empleados públicos provinciales y municipales.
- 14) Conceder exenciones por un tiempo limitado a los autores o inventores y primeros introductores de nuevas industrias para explotar en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Federal.
- 15) Crear y reglamentar facultativamente la organización y funcionamiento de un cargo de Comisionado Legislativo, que tendrá como función peticionar ante la administración en interés de los habitantes de la Provincia, en representación del Poder Legislativo.
- 16) Sancionar las otras leyes previstas en la Constitución y las que se relacionen con todo interés público general de la Provincia, que, por su naturaleza y objeto no correspondan a la Nación o que no fueren atribuciones propias de los otros poderes del Estado provincial.

C A P I T U L O V I

Procedimiento para la formación de las leyes .

ART. 125- Cámara de origen

Toda la ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras, excepto aquellas cuya iniciativa se confiere privativamente a la de Diputados. Se propone en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder Ejecutivo.

ART. 126.- Cámara revisora.

Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, para para su re-

visión a la otra, y si ésta también lo aprobase se comunica el Poder Ejecutivo para su promulgación.

ART. 127. Proyectos desechados.

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras puede repetirse en las sesiones del mismo año. Pero si sólo es adicionado o corregido por la Cámara revisora, vuelve a la de su origen, y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasa al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son desechadas, vuelve por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora; y si aquí fuesen sancionadas nuevamente por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes, pasa el proyecto a la otra Cámara, y no se entiende que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

ART. 128 - Promulgación.

El Poder Ejecutivo debe promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de los diez días hábiles de haberse sido remitidos por la Legislatura; pero puede devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación, ni los ha devuelto con sus objeciones, son ley de la Provincia, debiendo promulgarse en el día por el Poder Ejecutivo.

Art. 129 - Receso legislativo - Veto.

Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar la clausura

de las sesiones de las Cámaras, el Poder Ejecutivo debe, dentro de dicho término, devolver el proyecto vetado a la secretaría de la Cámara que lo haya remitido, sin cuyo requisito no tiene efecto el veto.

ART. 130 - Trámite de proyecto observado.

Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, es considerado primero por la Cámara de origen, pasando luego a la revisora, y si ambas insisten en la sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla. En caso contrario no puede repetirse en las sesiones del mismo año. Si se aceptan por mayoría en ambas Cámaras las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, el proyecto queda convertido en ley.

ART. 131 - Proyecto observado. Promulgación.

Si un proyecto de ley observado vuelve a ser sancionado en uno de los dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede observarlo de nuevo y está obligado a promulgarlo como ley.

ART. 132 - Numeración de leyes.

Cuando se hace la publicación oficial de las leyes de la Provincia, se enumeran ordinalmente y en adelante se tiene la numeración correlativa por la fecha de la promulgación.

ART. 133 - Fórmula de sanción.

En la sanción de las leyes se usa la siguiente forma:

"El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de ley".

C A P I T U L O V I I

De la Asamblea General

ART. 134 - Atribuciones.

Ambas Cámaras sólo se reúnen para el desempeño de las funciones siguientes:

- 1) La apertura de las sesiones ordinarias.
- 2) Recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia.
- 3) Admitir o desechar la renuncia que de su cargo hiciere el gobernador o vicegobernador de la Provincia.
- 4) Efectuar la elección de senadores al Congreso de la Nación.

ART. 135 - Presidencia.

Las reuniones de la Asamblea General son presididas por el vicegobernador. En su defecto subsidiariamente por el vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o el senador de mayor edad.

ART. 136 - Quórum

No puede funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

SECCION SEGUNDA

SEGUNDA PARTE

Poder Ejecutivo

C A P I T U L O I

ART. 137 - Gobernador y vicegobernador.

El Poder Ejecutivo de la Provincia es desempeñado por un ciudadano

con el título de Gobernador de la Provincia. Al mismo tiempo y por el mismo período se nombra un vicegobernador.

El Gobernador formula y dirige las políticas de la Provincia y representa a la misma. Es el Jefe de la administración centralizada y descentralizada.

El vicegobernador es su reemplazante legal.

Duran cuatro años en sus funciones, no pueden ser reelectos en el período siguiente a su elección, ni sucederse recíprocamente y cesan el mismo día en que expira el período legal, sin que por ninguna causa pueda éste prorrogarse ni completarse.

ART. 138 - Calidades.

Para ser gobernador o vicegobernador se requiere:

- 1) Ser argentino nativo o por opción.
- 2) Tener por lo menos 30 años de edad y ser elector.
- 3) Haber residido en la Provincia durante los cuatro años anteriores inmediatos a la elección, y durante cinco el ciudadano por opción, salvo que la ausencia haya sido causada por servicios públicos a la Nación o a la Provincia.

ART. 139 - Elecciones.

El gobernador y vicegobernador son elegidos por el voto directo del pueblo y a simple mayoría de sufragios.

Con una antelación mínima de seis meses a la conclusión del período gubernativo, el Poder Ejecutivo convoca a elecciones de Gobernador y Vicegobernador.

Praticado el escrutinio general y el de las elecciones complementarias en su caso, el Tribunal Electoral proclama en acto público gobernador y vicegobernador a los ciudadanos electos, comunicándoles inmediatamente ese resultado a fin de que manifiesten su aceptación en el término de tres días.

En caso de empate la Asamblea Legislativa resuelve, cumpliendo su cometido en una sola sesión.

ART. 140. Remuneración - Ausencia de la capital - Inmunidades - Juramento.

El gobernador y vicegobernador gozan de la remuneración prevista por la ley y durante su desempeño no pueden ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación, de la Provincia o Municipio. Gozan desde el momento de su elección hasta el término de sus funciones de las mismas inmunidades que los legisladores. El gobernador no puede ausentarse de la capital ni del territorio de la Provincia por mas de treinta días corridos, sin permiso de la Legislatura.

El gobernador y vicegobernador juran ante la Asamblea Legislativa.

ART. 141.- Atribuciones y deberes.

El gobernador, o su reemplazante legal, tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- 1) Representa a la Provincia en todas sus relaciones oficiales.
- 2) Ejerce la potestad de dirigir toda la administración provincial.
- 3) Ejerce la potestad reglamentaria. En la reglamentación de las leyes no puede alterar su espíritu.

- 4) Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, iniciándolas, tomando intervención en su discusión - por intermedio de los ministros y promulgándolas o vetándolas total o parcialmente.
- 5) Indulta y conmuta penas, previo informe de la Corte de Justicia sobre su conveniencia y oportunidad. No ejerce esta facultad - respecto de los funcionarios públicos condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y de los funcionarios destituídos por juicio político.
- 6) Informa a las Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de cada año, sobre el estado general de la Provincia.
- 7) Nombra y remueve por sí solo a los ministros, funcionarios y agentes de la Administración con sujeción a esta Constitución y a las leyes; y con acuerdo del Senado, en los casos previstos - por aquélla.
- 8) Presenta a la Legislatura antes del 1 de agosto el Proyecto de Ley de Presupuesto.
- 9) Hace recaudar las rentas de la Provincia y ejecutar judicialmente su cobro. Decreta su inversión con arreglo a la ley y dispone la publicidad, periódicamente, del estado de la Tesorería.
- 10) Convoca a elecciones provinciales.
- 11) Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura indicando los asuntos que determinan tal convocatoria.
- 12) Conviene con la Nación y demás provincias regímenes de coparticipación o multilaterales de carácter impositivo y sobre regalías,

con aprobación del Poder Legislativo.

- 13) Celebra tratados o acuerdos para la gestión de intereses propios de la Provincia, con la Nación y las demás provincias, con aprobación del Poder Legislativo.
- 14) Impulsa negociaciones o entendimientos con otras naciones y organismos internacionales para la gestión de intereses de la Provincia, sin afectar la política exterior, cuya conducción es competencia del Gobierno Federal.
- 15) Concede pensiones con arreglo a la ley.
- 16) Auxilia con la fuerza a los poderes públicos.
- 17) Actúa como agente natural del Gobierno Federal para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación.
- 18) Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes.

ART. 142 - Decretos de estado de necesidad y urgencia.

En caso de estado de necesidad y urgencia, o que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal de Estado y a los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa.

Informa de ello a la Provincia mediante un mensaje público.

En tal caso, debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando de inmediato a sesión extra-

ordinaria si estuviere en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática.

Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado por ésta, el decreto de estado de necesidad y urgencia queda convertido en ley.

ART. 143. Reemplazos - Acefalía:

En los casos de ausencia definitiva o temporaria del gobernador, éste es reemplazado por el vicegobernador hasta la conclusión del período por el que fueron electos o hasta la desaparición de la causa de la ausencia temporaria.

Si se produce ausencia, separación o impedimento simultáneo, temporario o definitivo del gobernador y del vicegobernador. El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por el vicepresidente del Senado; a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados; en defecto de ambos, por un ministro conforme al orden de prelación establecido por ley.

En caso de acefalía total y definitiva, el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo convoca al pueblo de la Provincia dentro de los quince días de ocurrida la vacante, dando sesenta días de término a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de éste falte por lo menos un año.

En caso de acefalía en el cargo de vicegobernador, la elección para su reemplazo debe ser convocada conjuntamente con la próxima elección de gobernador.

Si el ciudadano elegido gobernador, antes de tomar posesión de su

cargo, renuncia o por cualquier impedimento no puede ocuparlo, se procede a una nueva elección. El Poder Ejecutivo debe convocar la misma dentro de los quince días de producida la vacancia, dando treinta días de término para la realización de la elección. Si antes de ese día el gobernador saliente ha cesado en su cargo, el vicegobernador electo ocupa el mismo hasta que el gobernador electo sea proclamado.

C A P I T U L O I I

Ministros

ART. 144.- Funciones - Ley de Ministerios.

El despacho de los asuntos de la Provincia está a cargo de ministros que refrendan los actos del gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez.

Pueden, por sí solos, resolver todo lo referente al régimen interno y disciplinario de sus respectivos ministerios.

Una ley, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, determina el número de ministros y secretarios de estado, sus competencias y atribuciones.

El gobernador puede delegar en un ministro sus potestades administrativas, encomendarle la tarea de coordinación entre los distintos ministerios y la de exposición de los planes de gobierno y de su ejecución ante las Cámaras Legislativas.

ART. 145. Requisitos - Incompatibilidades - Responsabilidad.

Los Ministros deben tener 25 años de edad y reunir las demás condiciones para ser elegidos Diputados: tienen iguales incompatibi-

lidades que los legisladores.

Perciben la remuneración que marca la ley.

Son solidariamente responsables con el gobernador de los actos que autoricen, sin que sea admisible la excusa de una orden - de éste.

SECCION SEGUNDA

TERCERA PARTE

Del Poder Judicial y Ministerio Público

C A P I T U L O I

Poder Judicial

ART. 146. Composición.

El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Corte de Justicia compuesta por un número impar de jueces establecido por ley, y demás tribunales inferiores que la ley determine, fijándoles su jurisdicción y competencia.

ART. 147. - Independencia.

El Poder Judicial, para afirmar y mantener la inviolabilidad de su independencia orgánica y funcional, tiene todo el imperio necesario.

ART. 148. Presidencia - Salas.

El Presidente de la Corte de Justicia es elegido cada dos años entre sus miembros.

Para ejercitar su competencia por vía recursiva la Corte puede dividirse en Salas.

ART. 149.- Atribuciones y competencias.

La Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás que le confiere la ley conforme a sus funciones y jerarquía, tiene las siguientes atribuciones y competencias:

I. Atribuciones:

- a) Ejerce la superintendencia de la Administración de Justicia.
- b) Dicta los reglamentos necesarios para el mejor desempeño de la función judicial.
- c) Nombra y remueve a los funcionarios y empleados del Poder Judicial.
- d) Confecciona su presupuesto de erogaciones.
- e) Tiene iniciativa legislativa, no exclusiva, con respecto a la ley de organización del Poder Judicial, Códigos Procesales y demás leyes referidas directamente al funcionamiento de este Poder.
- f) Tiene voz, a través de uno de sus miembros, en las deliberaciones legislativas en las que se trate su presupuesto o alguna de las leyes referidas en el inciso anterior.
- g) Supervisa el sistema carcelario de la Provincia.

Es la intérprete final, en el ámbito provincial, de las constituciones de la Nación y de la Provincia.

II. Le compete conocer y decidir en forma originaria:

- a) Las acciones sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución.
- b) En los conflictos de jurisdicción y competencia entre los

Poderes Públicos, provinciales y municipales, entes públicos, autoridades, entre las ramas de un mismo poder y en los que se susciten entre los Tribunales de Justicia.

- c) En los recursos de amparo y hábeas corpus contra cualquier decisión, acto u omisión de alguna de las Cámaras Legislativas o del titular del Poder Ejecutivo.

III. Le compete conocer y decidir por vía recursiva:

- a) En los recursos contra las decisiones de tribunales inferiores, contrarias a la Constitución Nacional y a esta Constitución.
- b) En los Recursos de Casación y demás recursos que prevean las leyes.
- c) En los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas.
- d) En los recursos contra las decisiones de los Jueces de Primera Instancia en los juicios de expropiación y procesos administrativos; y en los recursos contra las decisiones de los jueces inferiores en las acciones de amparo y hábeas corpus.

ART. 150 - Requisitos.

Para ser juez de Corte o de Cámara, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener por lo menos treinta años de edad, diez en el ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura o ministerio público, y cuatro años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

Para los demás jueces, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado, tener veintiseis años de edad y seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o en la función judicial o ministerio público y cuatro años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.

ART. 151. Incompabilidades.

Los jueces y secretarios no pueden realizar actividad política partidaria.

Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios.

ART. 152. Designaciones.

Los jueces de la Corte de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Duran seis años en sus funciones, pudiendo ser nombrados nuevamente, en cuyo caso son inamovibles.

Los demás jueces son designados de la misma manera, y son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño, y no estén en condiciones de obtener jubilación ordinaria.

La ley instrumenta y garantiza la capacitación de los miembros del Poder Judicial y la carrera judicial abierta y con igualdad de oportunidades.

ART. 153. Remoción.

Los jueces de la Corte de Justicia están sujetos a juicio político, con idéntico procedimiento que el previsto para la remoción del Gobernador, por las causales de delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Los demás jueces pueden ser acusados por cualquiera del pueblo o por el ministerio público, por las mismas causales previstas para los jueces de la Corte, por ante un Jurado de Enjuiciamiento integrado por: Un juez de la Corte que lo preside, dos diputados dos senadores, el Fiscal del Estado y un abogado de la matrícula electo entre sus pares por voto secreto. Sus miembros son elegidos cada dos años; pueden ser reelectos.

El Tribunal juzga en juicio público que debe concluir dentro de los cuatro meses contados a partir de la interposición de la acusación, bajo sanción de caducidad. El fallo no tiene más efectos que destituir al acusado y aún declararlo inhábil para ocupar cargo en la Provincia. En su caso se remiten los antecedentes a la Justicia Ordinaria.

El no juzgamiento en término, por causa imputable a los miembros del Tribunal, es causal de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, de los responsables. Una ley regula todo lo atinente al funcionamiento de este Tribunal, respetando, bajo sanción de nulidad, las reglas precedentemente establecidas.

ART. 154. Inmunidades.

Los jueces gozan de las mismas inmunidades que los miembros del -

El ministerio público es ejercido por un Procurador General de la Provincia, con el auxilio de los fiscales, defensores, asesores y demás funcionarios que establezca la ley, la que determina su orden jerarquico, número, sede, atribuciones, responsabilidades y normas de funcionamiento.

ART. 158 - Requisitos - Designación - Inmunidades e incompatibilidades.

El procurador general debe reunir las mismas condiciones que los jueces de la Corte de Justicia, dura seis años en el cargo, pudiendo ser designado nuevamente y es nombrado y removido de la misma forma que aquellos.

Los demás miembros del Ministerio Público deben ser abogados, ciudadanos argentinos y cumplir con los demás requisitos que establece la ley, de acuerdo a la jerarquía que ésta determina, y son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Procurador General, requiriéndose acuerdo del Senado para aquellos a los que la ley otorgue estabilidad relativa, la que no será mayor de seis años: pueden ser designados nuevamente. Los miembros que gozan de estabilidad relativa son removidos por las mismas causales y en la misma forma que los jueces.

Los miembros del Ministerio Público gozan de las mismas inmunidades y tienen las mismas incompatibilidades que los jueces.

ART. 159.- Atribuciones y deberes.

Son sus atribuciones y deberes las fijadas por la ley y especialmente:

Poder Legislativo y su retribución no puede ser suspendida ni disminuída sino por leyes de carácter general, extensivas a todos los poderes del Estado.

ART. 155.- Organización de la Justicia de Paz .

Una ley organiza la Justicia de Paz Lega y Letrada, teniendo en cuenta las divisiones administrativas, extension y población de la Provincia. Fija su jurisdicción, competencia, procedimiento y requisitos para el cargo de juez.

Para la Justicia de Paz Lega se procura que el procedimiento sea verbal y actuado. El juez resuelve a verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo fundar sus resoluciones en el principio de equidad.

ART. 156.- Nombramiento - Remoción - Inmunidades.

Los jueces de Paz son nombrados por la Corte de Justicia a propuesta del intendente o directamente por aquella en donde no los hubiera.

Son remunerados y duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente, gozando de las mismas inmunidades que los demás jueces y son removidos por las mismas causas que éstos, mediante acusación de cualquiera del pueblo, hecha por ante la Corte de Justicia, la que debe reglamentar el procedimiento garantizando el derecho de defensa.

C A P I T U L O I I

Del Ministerio Público

— ART. 157 - Composición.

- a) Intervenir en toda causa judicial en la que esté interesado el orden público.
- b) Vigilar el respeto de los derechos, deberes y garantías constitucionales.
- c) Velar por el cumplimiento de los plazos procesales, la celeridad y buena marcha de la Administración de Justicia, teniendo facultades para acusar a los miembros del Poder Judicial ante el Tribunal de Juicio Político o Jurado de Enjuiciamiento.
- d) Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los Derechos Humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de reclusión.
- e) Ejercitar las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubiesen incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.
- f) Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública.

ART. 160.- Autonomía funcional.

En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público.

ART. 161.- Asistencia.

Los Poderes Públicos de la Provincia están obligados a prestar a este Ministerio la colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones.

SECCION SEGUNDA

CUARTA PARTE

Organos Auxiliares de Control

C A P I T U L O I

Fiscal de Estado

ART. 162. Funciones

El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa del patrimonio del Fisco. Es parte legítima en los juicios administrativos y en todos aquéllos en que se afecten intereses y bienes de la Provincia.

Solicita la declaración judicial de ineficacia de toda norma que perjudique los intereses del Fisco.

Se encuentra legitimado para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución o acto de cualquier autoridad de la Provincia que sean contrarios a las prescripciones de esta Constitución.

Emite dictamen sobre las cuestiones que el Gobernador de la Provincia le someta aon respecto a los actos de su competencia.

El Fiscal de Estado debe reunir las mismas condiciones que los jueces de la Corte de Justicia y tiene iguales inmunidades, incompatibilidades y prohibiciones. Es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y queda sometido a Juicio Político. Su gestión se extiende por todo el período del Gobernador que lo nombró, o de su reemplazante legal.

Hay también procuradores fiscales encargados de intervenir en los juicios que afecten intereses o bienes del Estado, que les sean encomendados por el Poder Ejecutivo, y son nombrados y removidos por éste, a propuesta del Fiscal de Estado.

C A P I T U L O I I

Tribunal de Cuentas

ART. 163.- Organización y atribuciones.

El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo el control externo de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública provincial y municipal.

La ley reglamenta su composición en número impar no inferior a tres ni superior a siete. Sus miembros deben ser abogados y contadores públicos u otros graduados con títulos universitarios que aseguren idéntica idoneidad determinada por ley. Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas inmunidades que los jueces, son removidos por las mismas causas que éstos y mediante Juicio Político.

Es de competencia del Tribunal de Cuentas:

- 1) Ejercer el control de la hacienda provincial, municipal, entes descentralizados, empresas públicas, haciendas paraestatales, sociedades del Estado o con participación estatal y beneficiarios de aportes o subsidios.
- 2) Observar en forma originaria y aprobar o desaprobar las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos y formular, en su caso, los cargos correspondientes.
- 3) Entender en forma originaria en los juicios de cuenta y responsabilidad en los casos, con las modalidades y recursos que establece la ley.

- 4) Observar la Cuenta General del Ejercicio, remitiendo informe a la Legislatura o a los respectivos órganos deliberativos municipales, publicándolo en el Boletín Oficial.
- 5) Formular dentro del plazo de sesenta días, sus observaciones a los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública. Los actos observados deben ser insistidos dentro del término de ciento ochenta días, y en tal caso, las observaciones se publican en el Boletín Oficial.
- 6) Dictaminar con carácter previo en las transacciones patrimoniales administrativas que realice la Provincia y en las judiciales que revistan importancia.
- 7) Nombrar y remover a su personal y dictar su propio reglamento interno.

La representación en juicio del Tribunal de Cuentas, la ejerce el Fiscal de Estado.

SECCION TERCERA

CAPITULO UNICO

Régimen Municipal

Art. 164.- Naturaleza. Límites.

Todo centro poblacional permanente que cuente con el número mínimo de novecientos habitantes constituye un municipio encargado del gobierno y administración de sus intereses y servicios. Goza de autonomía política, administrativa y financiera.

La delimitación de la jurisdicción territorial de los municipios

corresponde a la Legislatura. Toda modificación ulterior de estos límites se dispone por ley de la Provincia, con previa consulta popular realizada en la forma que señale la ley.

Los municipios pueden establecer delegaciones en las concentraciones poblacionales que no reunan el mínimo de habitantes fijado para constituir una comuna.

Art. 165.- Gobierno municipal.

El gobierno de los municipios se compone de:

- 1) Un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente que es elegido en forma directa y a simple mayoría de sufragios.
- 2) Un Consejo Deliberante cuya integración se establece sobre la siguiente base poblacional:

De 900 a 2.000 habitantes	3 concejales
De 2001 a 5.000 habitantes	4 concejales
De 5001 a 10.000 habitantes	6 concejales
De 10001 a 15.000 habitantes	7 concejales
De 15001 a 20.000 habitantes	8 concejales
De 20001 a 50.000 habitantes	9 concejales
De 50001 en adelante	12 concejales, más uno por cada 40.000 habitantes o fracción no inferior a 20.000 habitantes.

Cuando los municipios superen los 500.000 habitantes, el número de miembros de los Concejos puede reajustarse por la Legislatura, aumentándose la base poblacional para su elección, pero nunca disminuyéndola.

Los concejales se eligen directamente por el sistema electoral de representación proporcional.

Art. 166.- Condiciones de elegibilidad - Duración.

Para ser concejal se requiere:

- 1) Ser argentino nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía y estar inscripto en el registro cívico nacional o provincial.
- 2) Ser mayor de edad.
- 3) Ser vecino del municipio con una residencia inmediata anterior de dos años.

Para ser Intendente se debe tener veinticinco años de edad como mínimo, cuatro de ejercicio de la ciudadanía y las demás calidades para ser concejal.

Los Intendentes duran cuatro años, los concejales dos años. Todos son reelegibles.

ART. 167 - Cuerpo electoral municipal.

El registro de los electores municipales se compone de:

- 1) Los inscriptos en el registro cívico electoral.
- 2) Los extranjeros, mayores de dieciocho años, con dos años de residencia inmediata en el municipio, al momento de su inscripción en el registro suplementario especial.

ART. 168. Cartas Municipales - Leyes de Municipalidades.

Los Municipios de más de diez mil habitantes dictan su Carta Municipal, como la expresión de la voluntad del pueblo, en un todo

de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución. A tal efecto convocan a una convención Municipal. Los miembros de la misma son electos por el sistema proporcional que fije la Ley Electoral. y su número no excede del doble de la composición del Consejo Deliberante. Para desempeñarse como Convencional deben reunirse los mismos requisitos exigidos para ser Concejal.

La iniciativa para dictar o reformar la Carta Municipal, corresponde al Intendente, al Consejo Deliberante o por iniciativa popular cuando reúna los requisitos legales. La declaración de necesidad requiere el voto de las dos terceras partes de los Miembros del Consejo Deliberante.

Es condición de eficacia de las cartas Municipales y de sus reformas, su previa aprobación por ley de la Provincia, a los efectos de su compatibilización. La Legislatura debe expedirse en un plazo máximo de ciento veinte días, transcurrido el cual sin que lo hiciera, quedan automáticamente aprobadas.

Los municipios de diez mil habitantes o menos, se rigen por las disposiciones de la Ley de Municipalidades. Sin perjuicio de ello, a pedido de cada Municipio, se contemplan sus situaciones particulares por una ley especial que se dicte a tal efecto.

ART. 169. Recursos municipales.

Constituyen recursos propios de los Municipios:

- 1) El impuesto a la propiedad inmobiliaria urbana
- 2) Los impuestos cuya facultad de imposición corresponde por ley a las Municipalidades.

- 3) El impuesto a la radicación de automotores en los límites de cada uno de ellos.
- 4) Las tasas.
- 5) Las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales.
- 6) Las contraprestaciones por uso diferenciado de los bienes municipales.
- 7) La coparticipación en los impuestos que recaude la Nación o la Nación o a la Provincia con las alícuotas que fije la ley.
- 8) Los créditos, donaciones y subsidios.
- 9) Todos los demás ingresos determinados por las normas municipales en los límites de su competencia.

Con parte de los recursos coparticipados se constituye un Fondo Compensador que adjudica la Legislatura por medio del Presupuesto, a los Municipios cuyos recursos resultaren insuficientes para atender los servicios a su cargo.

La ley prevé sistemas de transferencia puntual y automática de los recursos en favor de los Municipios.

ART. 170. Competencias municipales

Compete a los municipios, sin perjuicio de las facultades provinciales, con arreglo a las Cartas Orgánicas y Leyes de Municipalidades:

- 1) Darse su propia organización normativa, económica, administrativa y financiera.
- 2) Aprobar su presupuesto.

- 3) Establecer por ordenanzas tasas y tarifas.
- 4) Recaudar e invertir sus recursos. Dar a publicidad por lo menos trimestralmente el estado de sus ingresos y egresos y una memoria sobre la labor desarrollada, dentro de los sesenta - días de vencido el ejercicio.
- 5) Contraer empréstitos con fines determinados, con la aprobación de los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros - del Concejo Deliberante. En ningún caso el servicio para el pago de empréstitos puede exceder la cuarta parte de las rentas municipales, ni la previsión financiera para tal objeto aplicarse a otro fin.
- 6) Prestar los servicios públicos locales por sí o por concesión.
- 7) La preservación del patrimonio histórico y arquitectónico local.
- 8) Lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad.
- 9) La recreación, deporte, esparcimiento y espectáculos públicos.
- 10) La realización de obras públicas.
- 11) El fomento de la educación y la cultura.
- 12) La regulación de los cementerios y los servicios fúnebres.
- 13) La cooperación con la Provincia o la Nación en asistencia social, salud pública, preservación del medio ambiente y recursos naturales.
- 14) Usar y disponer de sus bienes. Cuando se trate de enajenar o gravar bienes inmuebles, la aprobación del acto requiere el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de los concejales.

- 15) Intervenir, en su caso, en el supuesto del artículo 88 segundo párrafo.
- 16) Gestionar por vía judicial, luego de agotada la instancia administrativa, la cobranza de las rentas del Municipio.
- 17) La iniciativa legislativa en materia de expropiación por causa de utilidad pública municipal.
- 18) La facultad de crear Tribunales de Cuentas y de Faltas de conformidad a sus respectivas Cartas Orgánicas.
- 19) Celebrar convenios con otros Municipios, con la Provincia o la Nación, con empresas públicas o entidades autárquicas en la esfera de su competencia.
- 20) Dictar todas las ordenanzas y reglamentos necesarios para el cumplimiento directo de sus fines.

ART. 171. Recursos no renovables.

De los fondos provenientes de la explotación de los recursos no renovables que perciba la Provincia, se adjudica a los Municipios - donde se encuentren ubicados un porcentaje establecido por ley.

ART. 172. Publicidad - Conflictos - Democracia semi-directa.

Las Cartas Municipales y la Ley de Municipalidades regulan las vías y procedimientos para asegurar la publicidad de todos los actos de los Municipios y la legal y apropiada inversión de sus recursos.

Compete a la Corte de Justicia de la Provincia conocer en los conflictos entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada Municipio.

Los electores municipales tienen los derechos de iniciativa y referéndum. Su ejercicio se rige por las disposiciones de la ley provincial que regula la práctica de las mencionadas formas de democracia semi-directa.

ART. 173 - Intervención.

La Provincia puede intervenir a alguno o a todos los Poderes Municipales en los siguientes casos:

- 1) Acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades.
- 2) Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
- 3) Cuando no se cumpla con el pago de los servicios de empréstitos, si en más de un ejercicio resulta un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera o no preste adecuadamente los servicios públicos locales.
- 4) Por las demás causales que prevea la Carta Orgánica Municipal y la Ley de Municipalidades.

La Legislatura dispone la intervención de un Municipio por plazo determinado, mediante ley aprobada por el voto de los dos tercios de los miembros presentes.

ART. 174.- Inmunidades. Incompatibilidades.

El Intendente, los concejales y los convencionales municipales no pueden ser acusados, procesados, interrogados judicialmente, molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por las opiniones o votos que hayan emitido en el desempeño de sus cargos. Tienen iguales incompatibilidades que los legisladores.

ART. 175. Destitución.

Corresponde la destitución del Intendente por condena penal o por mal desempeño de su cargo. Para declarar la necesidad de su remoción se requiere los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante.

El Intendente puede apelar con efecto suspensivo ante la Corte de Justicia de la Provincia, la que debe expedirse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la entrada del caso, el que se examina libremente con el más amplio poder de revisión y recepción de pruebas.

ART. 176.- Ausencia o inhabilidad del Intendente.

En caso de ausencia o impedimento transitorios del Intendente, el Presidente del Concejo Deliberante lo reemplaza.

Si la ausencia o inhabilidad es definitiva y falta más de un año para completar el período del mandato, debe convocarse a elecciones.

ART.177 - Facultades disciplinarias. Exclusión.

El Concejo Deliberante puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto concurrir los dos tercios de votos del total de sus miembros.

SECCION CUARTA

C A P I T U L O U N I C O

Poder Constituyente

ART. 178 - Declaración de necesidad de reforma.

Esta Constitución puede reformarse en todo o en parte por una Convención convocada al efecto, siempre que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara.

Declarada tal necesidad la Presidencia del Senado la comunica al Poder Ejecutivo y al Tribunal Electoral y manda hacerla pública en toda la Provincia. El Poder Ejecutivo convoca a elección de convencionales, la que tiene lugar en el plazo mínimo de noventa días contados desde la publicación. En su caso, esta elección puede coincidir con la primera general que se realice en la Provincia.

El Poder Ejecutivo puede instar la declaración de necesidad de reforma.

La declaración de necesidad de reforma fija las materias sobre las que ésta debe versar y determina el plazo de duración de la convención. En el supuesto de reforma parcial la Convención Constituyente puede prorrogar sus sesiones por un tiempo igual a la mitad del plazo original; en el supuesto de reforma total esta prórroga puede extenderse por un tiempo igual al originario.

Si la Convención no cumpliera su cometido en el plazo legal y si se tratara de un supuesto de reforma total, todas sus sanciones son ineficaces. En el mismo supuesto, para el caso de reforma parcial son eficaces las sanciones realizadas dentro del plazo.

ART. 179 .- Composición de la Convención. Instalación de ésta. Quórum. Sanción y promulgación.

La Convención Constituyente se compone de un número igual al de -

Diputados de la Provincia.

Los Convencionales deben reunir las mismas condiciones que las exigidas para ser diputado y gozan de idénticas inmunidades. No existe incompatibilidad entre las funciones de convencional - constituyente y cualquier otra de la Nación, la Provincia o los Municipios.

La declaración de la necesidad de la reforma debe indicar la fecha del comienzo de las deliberaciones de la Convención; si nada se dijese, ésta debe constituirse en un plazo máximo de tres meses contados desde la elección popular.

El quórum para sesionar es de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros y sus decisiones se adoptan por simple mayoría.

La Convención Constituyente sanciona, promulga y publica sus decisiones que deben ser observadas por todos como la expresión de la voluntad popular.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: La presente Constitución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, la que debe efectuarse dentro de los quince días de su sanción.

Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el cuerpo.

El Gobernador de la Provincia, los Presidentes de las Cámaras Legislativas, el Presidente de la Corte de Justicia prestan juramento ante la Convención Constituyente.

Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funciona-

rios integrantes de cada uno de estos, juren esta Constitución. El día 17 de junio de 1986, como homenaje al General Don Martín Miguel de Guemes, el pueblo de la Provincia es invitado a jurar fidelidad a la presente en actos públicos.

SEGUNDA: Todas las normas de organización de los Poderes previstas en esta Constitución deben ser sancionadas o dictadas dentro del plazo de un año. Pendiente dicho plazo continúan vigentes las actuales normas de organización que no sean incompatibles con esta Constitución.

TERCERA: Quedan derogadas a partir de la vigencia de esta Constitución todas las normas reglamentarias de la acción de amparo.

CUARTA: Hasta tanto se dicte la ley de creación del fuero respectivo, la Corte de Justicia entenderá, en forma ordinaria, en los procesos administrativos referidos a derechos subjetivos e intereses legítimos. Es condición de admisibilidad de la demanda o acción la previa denegación expresa o tácita, por parte de la autoridad administrativa, de la pretensión, salvo cuando sea demandada la Provincia o sus entidades autárquicas como persona de derecho privado.

Los jueces inferiores en ejercici, designados con acuerdo del Senado antes de la instalación de esta Convención, adquieren la estabilidad prevista por esta Constitución a partir de su jura. Los jueces de la Corte en igual situación son inamovibles por el lapso de seis años contados desde la fecha de su designación.

Los jueces designados antes de la instalación de esta Convención, se encuentran en la misma situación jurídica de aquéllos que sí los tienen.

Los jueces designados con posterioridad a la instalación de esta Convención, con acuerdo del Senado, que reúnan los requisitos establecidos en esta Constitución, tienen la estabilidad - por el tiempo fijado por la Constitución reformada, bajo cuya vigencia fueron prestados sus acuerdos.

Hasta tanto se dicte la ley de enjuiciamiento de jueces inferiores, el Jury de Enjuiciamiento conserva su actual composición y deberá juzgar con arreglo a las reglas del artículo 153 de esta Constitución, siendo de aplicación las actualmente vigentes que no se opongan a las del citado artículo.

Continúan en sus puestos los actuales Jueces de Paz Legos mientras se dicte la pertinente ley de organización de dicho servicio de justicia y se provean las designaciones de acuerdo a esta Constitución.

Continúan vigentes las normas del Ministerio Público hasta tanto se sancionen las nuevas disposiciones para el mismo, sus miembros continúan en funciones y mantendrán el régimen de estabilidad bajo el cual les fue prestado el acuerdo, hasta tanto se dicte la ley de organización respectiva y se provean las designaciones con arreglo a la misma y a esta Constitución.

Hasta tanto se dicten las normas respectivas, el trámite y resolución de las libertades condicionales, será competencia del juez de ejecución.

QUINTA: Declárase absolutamente nulo el decreto N°229/56 por el cual fue derogada la Constitución de 1949, sin perjuicio de la

estabilidad de todos los actos jurídicos y de todas las decisiones de autoridad sancionadas con arreglo a la Constitución Provincial de 1929 entre 1956 y 1986. Derógase por esta vía legítima las Constituciones sancionadas en 1929 y 1949.

SEXTA: La cláusula de incompatibilidad prevista en el primer párrafo del artículo 61 tendrá efecto a partir de la fecha de vigencia de la ley que determine las excepciones.

El artículo 63 se aplica a partir de la fecha en que entre en vigencia la ley que lo reglamente y en el plazo que no exceda de dieciocho meses.

La disposición del último párrafo del artículo 63 entra en vigencia con la próxima ley de presupuesto.

SEPTIMA: Mientras las comunas en condiciones de darse su propia Carta Municipal no lo hagan, se rigen por la Ley de Municipalidades.

OCTAVA: La Legislatura sanciona la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en el primer período de sesiones que celebren después de la presente reforma.

Hasta que ello ocurra el Cuerpo continuará integrado por sus actuales miembros que cuentan con el acuerdo del Senado.

La cobertura definitiva de vacantes se hace respetando las proporciones que fije la ley, de acuerdo con el artículo 163.

Sancionada la ley, el Tribunal de Cuentas solicita las habilitaciones presupuestarias necesarias para cumplir las funciones que esta Constitución agrega a las actuales, siéndole exigible la ob-

servancia de dicha ley desde que tales habilitaciones sean satisfechas .

NOVENA: La disposición contenida en el inciso 9 del artículo 141 se aplica a partir de la organización y establecimiento de los Juzgados competentes.

DECIMA: Hasta tanto se dicten las pertinentes leyes reglamentarias, subsisten los actuales regímenes legales y autoridades de entidades públicas cuya estructura y organización hayan sido materia de esta Constitución, salvo en los casos previstos en las demás normas transitorias.

El Poder Ejecutivo solicita acuerdos del Senado para aquellos funcionarios que a partir de la presente deben ser nombrados con la intervención de dicho Cuerpo.

DECIMA PRIMERA: El Presidente de la Convención Constituyente y los Secretarios del Cuerpo son los encargados de realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución dela Convención.

El Presidente de la Comisión redactora juntamente con un cuerpo de diez constituyentes integrados por los Miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria y tres Convencionales, tendrán a su cargo por mandato de la Asamblea:

a) Aprobar las Actas de Sesiones que no hubieran sido aprobadas por el Cuerpo; b) Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución; c) Cuidar la publicación del mismo en el Boletín Oficial; d) Actuar en forma coadyuvante con el Presidente

de la Convención en la realización de los actos previstos en el primer párrafo.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, por mandato del Cuerpo, continúa integrada al efecto de realizar el control del traspaso de bienes, emitir dictamen definitivo sobre la ejecución presupuestaria y efectuar la aprobación final de los gastos por los períodos que no lo hubiese hecho el Cuerpo.

Todos los actos enunciados en esta Disposición deben cumplirse en un plazo máximo e improrrogable de sesenta días corridos.

DECIMO SEGUNDA: Las disposiciones transitorias serán suprimidas del texto de esta Constitución en las sucesivas ediciones de la misma a medida que se dé cumplimiento a ellas, y pierdan su vigencia.

DECIMO TERCERA: Durante los próximos diez años a contar desde la sanción y promulgación de esta Constitución, se aplica el sistema electoral proporcional, conforme a las siguientes reglas:

- a) El total de votos obtenidos por cada lista, que haya alcanzado el 5% como mínimo de los votos válidos emitidos, es dividido por 1 (uno), por 2 (dos), por 3 (tres), y así sucesivamente hasta llegar al número de los cargos que se elijan.
- b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, son ordenados de mayor a menor en igual número de los cargos a cubrir.
- c) Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de votos obtenidos por las respectivas -

listas, y si han obtenido igual número de votos, se practica un sorteo.

d) A cada lista le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b).

Transcurrido el plazo de diez años puede dictarse por ley un nuevo sistema, en su defecto continúa vigente el presente.

DECIMA CUARTA: Los actuales legisladores continúan en funciones hasta el vencimiento de los plazos por los que fueran electos. En 1987 son elegidos sesenta diputados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 91 de la Constitución. La Cámara sortea oportunamente los miembros de la misma que deben cesar en 1989.

DECIMO QUINTA: Acatando la voluntad popular esta Convención queda disuelta a las doce de la noche del día 2 de junio de 1986.

Dr. REYNALDO ALFREDO NOGUEIRA.

Presidente

H. Convención Constituyente

Dr. Salum Amado

Vicepresidente 1º

Ing. Héctor Alberto Gardey

Vicepresidente 2º

Ernesto S. Cacciabue

Secretario

Agustín Porcelo

Secretario

José V. Medina

Secretario

Corresponde al texto aprobado por la Honorable Convención Consti-

tuyente, lo que certificamos de acuerdo al mandato de la Décima Primera Cláusula Transitoria. Salta, 14 de junio de 1986. Firmado: Ricardo Gómez Díez, Hugo Luis Poma, Carlos Arturo Ulivarri, Néstor Sansone, Fermín Ricardo Aranda, Francisco Miguel Avila Ricci, Enrique Díez Gómez, Ferrando Saravia Toledo, Walter Neil Buhler, Edmundo Pieve.

L E Y N°4.702

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Art. 1°- Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia sancionada en el año 1962, actualmente en vigencia, en los siguientes puntos:

- a) Preámbulo.
- b) Declaraciones, Derechos, Garantías - Arts.1° al 30°inclusive.
- c) Régimen Electoral - Arts. 31° al 35°inclusive.
- d) Poder Legislativo - Arts. 36° al 52°inclusive.
- e) De la formación y Sanción de las Leyes - Arts. 53° al 54° inclusive.
- f) Atribuciones del Poder Legislativo - Art. 55°.-
- g) Poder Ejecutivo del Gobernador - Arts. 56° al 65 inclusive.
- h) De los Ministros - Arts. 66°al 76°inclusive.
- i) Atribuciones del Poder Ejecutivo - Art. 77°-
- j) Del Contador - Arts. 78° al 81° inclusive.
- k) La elección de Gobernador - Arts. 82° al 90° inclusive
- l) Del juicio Político - Arts. 91° al 93° inclusive
- m) Poder Judicial - Art. 94° al 112° inclusive.
- n) Atribuciones del Poder Judicial - Arts. 113°al 116°inclusive.
- ñ) Justicia de Paz - Art. 117° al 122°inclusive.

- o) Responsabilidades de los Miembros del Poder Judicial - Arts. 123° al 136° inclusive.
- p) Administración Departamental - Régimen Municipal - Arts. 137° al 152° inclusive.
- q) Régimen Educacional - Arts. 153° al 161° inclusive.
- r) Reforma de la Constitución - Arts. 162° al 166° inclusive.
- s) Disposiciones transitorias - Art. 167°.

En consecuencia dispónese la convocatoria a elecciones de la Convención Reformadora con los alcances establecidos en los Arts. 162° y siguientes de la Constitución Provincial para tratar su reforma.

Art. 2°- Públiquense los puntos sobre los que deberá versar la reforma de la Constitución Provincial, durante el término de dos meses de la promulgación de la presente ley, en los principales periódicos, de la Provincia de San Luis y en el Boletín Oficial y Judicial.

Art. 3°- Convócase al electorado de la Provincia de San Luis para - el día 16 de noviembre de 1986 a comicios generales para la elección de sesenta convencionales titulares y sesenta convencionales suplentes. A tal efecto cada departamento de la Provincia tendrá la siguiente representación:

Departamento de La Capital

14 Convencionales titulares y 14 suplentes.

Departamento General Pedernera

14 Convencionales titulares y 14 Suplentes.

Departamento Ayacucho

6 Convencionales titulares y 6 Suplentes.

Departamento Chacabuco

6 Convencionales titulares y 6 suplentes

Departamento Gobernador Dupuy

4 Convencionales titulares y 4 suplentes

Departamento Coronel Pringles

4 Convencionales titulares y 4 suplentes.

Departamento Belgrano

4 Convencionales titulares y 4 suplentes

Departamento Junín

4 Convencionales titulares y 4 suplentes

Departamento Libertador General San Martín

4 Convencionales titulares y 4 suplentes.

Art. 4º- Los Convencionales Provinciales se elegirán conforme a las disposiciones de los Arts. 165º, 36º, 38º, 39º, 40º y 45º de la Constitución Provincial, por el sistema proporcional establecido en los arts. 5º y concordantes de la Ley N° 22.838.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, y a los fines de cumplimentar lo preceptuado por el artículo 17 y sus correlativos y concordantes de la Ley N° 3141, los Partidos Políticos por esta única vez deberán registrar el "LEMA", bajo el cual intervendrán en la elección. A los efectos de lo precedentemente determinado se entiende por lema, "la denominación de un Partido Político en todos los actos y procedimientos electorales".

Conjuntamente con el registro de lema, los Partidos Políticos deberán registrar los diferentes "SUB-LEMAS" y/o lista de ciudadanos -

que reúnan los requisitos establecidos para la representación de minorías en sus respectivas cartas orgánicas y/o estatutos partidarios, lo que deberá ser acreditado en forma fehaciente ante las autoridades partidarias pertinentes, mediante la presentación de avales que representen el 25% del total de sufragios emitidos en la última elección interna partidaria de la sección electoral correspondiente.

A los efectos de lo determinado precedentemente se entiende por "SUB-LEMA", la nómina de ciudadanos que representan a una fracción o sector interno de un partido político para todos los actos y procedimientos electorales.

La elección se realizará por esta Ley, por las disposiciones provinciales vigentes y las del Código Nacional Electoral que no se le opongan y en lo que fueren aplicables.

Art. 5º- La Convención Reformadora se instalará e iniciará su labor el día 15 de diciembre de 1986 a las 10,00 horas, en el local que determine el Poder Ejecutivo, debiendo finalizar su cometido antes del día 15 de Marzo de 1987.

Art. 6º- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
RECINTO DE SESIONES de la Legislatura de la Provincia de San Luis,
a los dieciocho días del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y seis.

Es copia

FIRMADO:

MARIA EUGENIA MOYANO
Secretaria Legislativa
H. Legislatura de la
Pcia. de San Luis

JOSE ADAN QUIROGA
Presidente H. Legislatura
de la Pcia. de San Luis

AUTONOMIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Hasta la sanción de la Real Ordenanza de Intendente de 1782, La Rioja se hallaba políticamente subordinada a la Gobernación de Salta del Tucumán, que correspondía a las actuales provincias del Noroeste.

En el ordenamiento dispuesto en esa fecha Córdoba pasó a ser cabeza de una jurisdicción formada por La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Estas últimas habían dependido de la Capitanía de Chile.

El principal cargo político adjudicado a La Rioja fué el de Subdelegado de Hacienda. El primer riojano que ocupó esas funciones fué Juan José de Villafañe y Dávila.

En 1815 comienza la descomposición efectiva de la armazón político-colonial en nuestro país.

El 29 de marzo de 1815 Córdoba proclama por órgano del Cabildo su derecho a gobernarse sola. Inmediatamente elige gobernador al Coronel José Javier Díaz.

El 11 de abril, Díaz comunica su separación de Buenos Aires y reclama a La Rioja su continuidad de dependencia a Córdoba.

En La Rioja se produce confusión. El 24 de marzo de 1815 se realiza un Cabildo Abierto. Como resultado de la Asamblea La Rioja se separa de Córdoba y adhiere a Buenos Aires. Fué nombrado gobernador Ramón Brizuela y Doria. Pero las divergencias entre los Brizuela y Doria con los Ocampo y los Villafañe, la antinomia entre los artiguistas y los partidarios del Directorio, la intervención de los Congre-

sales de Tucumán, signan de confusión, intranquilidad y convulsiones los cinco años siguientes de la vida política riojana, hasta que en 1820 el gobernante cordobés Díaz manda al Cabildo de La Rioja las instrucciones a que debían sujetarse las elecciones generales que le encargara convocar el Cabildo Abierto de Córdoba. Hecho el escrutinio el 1º de marzo de 1820 resultó"... sin discrepancia de un solo sufragio, uniformemente declarada la independencia provincial".

Ese mismo día el pueblo eligió gobernador intendente al General - Francisco Antonio Ortiz de Ocampo.

LA CONFEDERACION ARGENTINA

La política de Urquiza después de Caseros llamó a la tarea de organizar el país a todos sus compatriotas: "antiguos rosistas por convicción o conveniencia, federales auténticos y los emigrados unitarios que pudieron retornar al país después del 3 de febrero". Con ese espíritu el Acuerdo de San Nicolás convoca a diputados para el Congreso Constituyente de Santa Fé y recomienda que se elija a "personas penetradas de sentimientos nacionales, que estén convencidas que el bien de los pueblos no se consigue por exigencias parciales sino por la consolidación de un régimen nacional regular y justo".

Pero en su artículo 6º el Acuerdo prescribía: "Los gobernadores interpondrán su influencia para hacer recaer la designación en persona de la mayor probidad, patriotismo e inteligencia". Con esa - recomendación, en La Rioja el gobernador Manuel Vicente Bustos -

pretendió "interpone su influencia". En un clima confuso y un proceso aún no esclarecido, se eligió representantes de la provincia a don Angel Elías y a Diego de Alvear, ninguno de los dos era riojano y no se incorporaron al cuerpo constituyente.

Luego se dió mandato a Regis Martínez, cordobés. Nunca se cubrió la segunda banca.

El 1º de marzo de 1853 el congresal Martínez suscribió el texto constitucional que cumplía con una larga aspiración del país.

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

La Constitución Nacional de 1853 determina en su artículo N°5 que las provincias confederadas dictarán por sí sus respectivas constituciones de acuerdo con el sistema y los principios adoptados por la Constitución Nacional.

En La Rioja, el gobernador Francisco Solano Gómez dictó el decreto de convocatoria a elección de constituyentes el 30 de enero de 1855.

La Convención entró a deliberar el 19 de marzo de 1855. Concluyó su labor en un tiempo brevísimo: el 23 de marzo de ese mismo año. Fué un traslado casi textual de la Constitución de Mendoza proyectada por Juan Bautista Alberdi. La Constitución se juró el 23 de diciembre de ese año en el atrio de la Iglesia Matriz.

El 23 de julio de 1886, a poco de asujir la gobernación Francisco Vicente Bustos, la Cámara de Diputados sancionó una ley declarando la necesidad de una reforma de la Constitución Provincial. Inmedia-

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

La Constitución Nacional de 1853 determina en su artículo N°5 que las provincias confederadas dictarán por sí sus respectivas constituciones de acuerdo con el sistema y los principios adoptados por la Constitución Nacional.

En La Rioja, el gobernador Francisco Solano Gómez dictó el decreto de convocatoria a elección de constituyentes el 30 de enero de 1855. La Convención entró a deliberar el 19 de marzo de 1855. Concluyó su labor en un tiempo brevísimo: el 23 de marzo de ese mismo año. Fué un traslado casi textual de la Constitución de Mendoza proyectada por Juan Bautista Alberdi. La Constitución se juró el 23 de diciembre de ese año en el atrio de la Iglesia Matriz. El 23 de julio de 1886, a poco de asumir la gobernación Francisco Vicente Bustos, la Cámara de Diputados sancionó una ley declarando la necesidad de una reforma de la Constitución Provincial. Inmediatamente el Gobernador Bustos dictó un decreto nombrando una comisión para estudiar las reformas necesarias. Para esta comisión tardó 22 años en expedirse. El primero de junio de 1909 se reunió para escuchar el proyecto de su miembro informante el Dr. Joaquín V. González. Su informe fué calurosamente aplaudido. La Constitución fué promulgada por el Poder Ejecutivo el 22 de junio de 1909.

El Ingeniero Carlos Vallejo durante su gobernación (1932-1935), promovió la reforma de la Constitución Provincial de 1909. Las reformas se promulgaron en 1933 (elección directa de Gobernador y Vice-

gobernador , período gubernamental de 4 años - Innovación en el procedimiento de la designación de jueces).

ORGANIZACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL

PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo está ejercido por la Legislatura, la cual está integrada por la Cámara de Diputados. Los diputados son elegidos directamente por los electores populares, en razón de un diputado por 5.000 habitantes o una fracción que no baje de 2.500.

Después de cada censo de ley, se debe fijar el cociente de la representación, de manera que el número de diputados no sea mayor de 25 y menor de 18. Se debe distribuir la representación de modo que corresponda por lo menos 1 diputado por cada distrito electoral o departamento de la provincia.

Los diputados duran cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente, pero la cámara se renueva por mitades cada dos años.

Para ser diputado se necesita ser ciudadano argentino, de origen nacional o naturalizado, mayor de edad y domiciliado en la provincia con dos años de residencia.

No pueden ser elegidos los empleados a sueldo del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, los eclesiásticos regulares, los condenados por delitos que merezcan pena corporal que exceda de un año, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los deudores morosos del fisco.

La Legislatura se debe reunir en sesiones ordinarias todos los años entre el 1° de junio y el 30 de setiembre, pudiendo prorrogarlas

por sí sola hasta 60 días más. El Poder Ejecutivo puede prorrogarlas o convocar a sesiones extraordinarias. También puede convocarla su Presidente cuando lo requieran por escrito 5 de sus miembros. La Cámara está presidida por el Vice-Gobernador de la Provincia.

PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo de la Provincia está ejercido por un Gobernador, o, en su defecto, por un Vice-Gobernador.

El Gobernador y el Vice Gobernador son elegidos directamente por los electores de la Pcia. a simple pluralidad de sufragios.

Para ser elegidos se requiere haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano argentino si hubiese nacido en país extranjero, tener 30 años de edad y dos de domicilio en la provincia inmediatamente anteriores a su elección, si no hubiese nacido en ella.

En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del Gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vice Gobernador. En defecto de éste, por el Vice-presidente primero de la Legislatura, o, en último caso por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. Si el impedimento del Gobernador y del Vice Gobernador es permanente, quien lo reemplace (Vice presidente 1º de la Legislatura o Presidente del Superior Tribunal de Justicia) debe convocar a elecciones de Gobernador y Vice Gobernador dentro de 10 días para un nuevo período constitucional. En ese caso, la elección no podrá recaer en la persona que está ejerciendo temporariamente el Poder Ejecutivo.

El despacho de todos los negocios del Poder Ejecutivo de la Provincia se dividirá en dos departamentos: uno de Gobierno e Instrucción Pública y otro de Hacienda y Obras Públicas, los que estarán a cargo de Ministros que refrendarán los actos del Gobernador, sin cuyo requisito éstos carecerán de eficacia.

Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser diputado y estar fuera del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el Gobernador.

El Gobernador puede remover estos funcionarios toda vez que lo crea conveniente.

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia compuesto por 5 jueces. Hacen parte de este Poder los Jueces de 1a. Instancia, los Fiscales, Defensores y demás tribunales que establezca la ley, pero el Superior Tribunal representa la plenitud del Poder Judicial.

Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y Procurador Fiscal se requiere: ciudadanía en ejercicio, haber cumplido 30 años de edad y ser abogado recibido en una Universidad de la Nación con cuatro años de práctica profesional.

El Gobernador, con acuerdo de la Legislatura, nombra los miembros del Superior de Justicia, Jueces de la. Instancia, Fiscales y Defensores. Estos son nombrados por un período de un año. Los que al terminar su período sean reelegidos, son en adelante inamovibles, salvo en el caso de juicio político.

EL ESCUDO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

El 1º de julio de 1926 la Legislatura de la Provincia de La Rioja promulgó la ley N° 421 en la que se aprobaba el proyecto presentado el 25 de setiembre de 1921 por el diputado Don Carlos M. Quiroga, quien había trabajado intensamente para determinar cual era el verdadero escudo de la provincia entre los que se usaban hasta esa fecha.

LEY N°421

Art. 1º- Declárase auténtico y por consiguiente único escudo de la Provincia de La Rioja el que se acompaña a la presente Ley en forma facsimilar.

Art. 2º- Dicho escudo que simboliza la autonomía de este Estado Federal, tiene la forma, dimensiones y atributos que se expresan:

- a) Una elipse cuyo eje vertical mide 27 milímetros de alto y 18 milímetros el horizontal o menor, o sean dos tercios de la longitud del mayor.
- b) Rodean a la mencionada elipse dos ramas de oliva de color verde natural, símbolo de la paz.
- c) Ambos ramos van unidos por un lazo de cinta azul y blanca emblema de nuestras tradiciones emancipadoras.
- d) En la parte superior de la elipse va el sol, un sol naciente simbolizando libertad.
- e) Y, finalmente, ocupando la parte inferior y céntrica de la elipse, se destaca una montaña que tiene desde la base a la cúspide, 22 milímetros de altura, de color gris oscuro, sobre un campo azul

pálido crepuscular, asumiendo la forma general de un cono.

Art. 3º- El Poder Ejecutivo ordenará la confección artística de acuerdo a las leyes de la heráldica del mencionado escudo, con sujeción a esta ley.

Art. 4º- Mandará hacer igualmente, tres ejemplares en bronce o acero con esta leyenda: "Escudo de la Provincia de La Rioja, Ley N° 421 - Julio 1º de 1926", los que se conservarán: uno en esta Legislatura, otro en la Casa de Gobierno y el tercero en el Archivo de los Tribunales.

Art. 5º- Cuatro meses después de la promulgación de la presente ley, serán declarados nulos y sin ningún valor legal todos los demás escudos que se hallen actualmente en uso.

Art. 6º- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley y la hará conocer juntamente con el escudo en todas las reparticiones del Gobierno, establecimientos de educación y demás órganos de difusión, la prensa, etc.

Art. 7º- Los gastos que demande la presente ley se harán en Rentas Generales con imputación a la misma.

Art. 8º- De forma

CONSTITUCION DE LA
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

P R E A M B U L O

Los representantes del pueblo de la Provincia de La Rioja reunidos en Convención Constituyente y en cumplimiento del mandato conferido;

INVOCANDO A DIOS FUENTE DE TODA RAZON Y JUSTICIA

Creemos en la primacía de la persona humana y que todos los hombres son iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal anteriores a esta Constitución y superiores al Estado; que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza así como ámbito natural de la cultura y la educación; que el trabajo es deber y derecho de todos los hombres y representa la base del bienestar de toda comunidad organizada; que la justicia es valor primario de la vida y que el ordenamiento social se ciementa en el bien común y la solidaridad humana.

DECIDIDOS a promover la creación de una sociedad justa y libre, exenta de toda discriminación por razones de credo, raza, sexo o condición social, abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma al mundo; RESUELTOS a consolidar un Estado democrático basado en la participación popular que garantice a través de instituciones estables y legítimas la plena vigencia de todos los derechos que esta Constitución reconoce y consagra;

PROCURAMOS consolidar los intereses históricos de nuestro pueblo y vigorizar las expresiones de la cultura regional como base de

la identidad popular y condición de la unión nacional y latinoamericana;

PROCLAMAMOS la dignidad creadora del trabajo, la participación de todos en el disfrute de la riqueza, el respeto de la Constitución y la ley por gobernantes y gobernados, la periodicidad y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen la función pública;

EVOCANDO la gesta justiciera de Juan Facundo Quiroga, Angel Vicente Peñaloza, Felipe Varela y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales y el largo combate de nuestro heroico pueblo riojano para alcanzar un verdadero federalismo y un definido régimen de libertad y justicia social;

EN NOMBRE DE NUESTRO PUEBLO, SANCIONAMOS Y PROMULGAMOS ESTA CONSTITUCION PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA.

PROEMIO

Esta es la Constitución Política de los riojanos. Lo es porque a ellos se dirige y de ellos emana.

La Constitución es un libro del pueblo. Su lenguaje ha de ser sencillo y su estilo directo. Al mismo tiempo es una obra de alta técnica en la formulación de los derechos y en el ordenamiento y articulación de las instituciones del Estado. Por otro lado, el sentido de las disposiciones, el fundamento de los derechos que consagra y la funcionalidad de las instituciones estatales que estructura, en suma, el contenido de la Constitución, debe reflejar los intereses esenciales del pueblo, sus necesidades actuales y futuras, sus anhelos y legítimas expectativas, así como sus tradiciones y estilos de ser y proceder.

Por ello, la Convención era consciente del peso histórico de su misión así como de las dificultades que debía superar para cumplirla. En el ánimo de todos los diputados constituyentes pesaba esta responsabilidad, y fue asumida en toda su plenitud. La Convención advirtió que para consumir su tarea debía necesariamente tomar como punto de partida la realidad riojana. Y así lo hizo. En primer lugar en el seno de la Convención, donde cada diputado pudo aportar datos imprescindibles y de inestimable valor, ya que estaba compuesta por genuinos representantes de nuestro pueblo y no por dotaciones de élite. Y además, mediante dos formas de consulta directa a través de asambleas populares y por la recepción de contribuciones, puntos de vista y sugerencias, de parte de ciudadanos y organizaciones de nuestra comuni-

dad.

Así se explica que, compartiendo la responsabilidad, el punto de partida y la vocación de servir a la unidad del pueblo antes que a intereses de partido o de sector, en un acto que enaltece a la democracia, los bloques justicialista y radical integraron la Convención, hayan producido este hecho insólito en el historial de las convenciones constituyentes: sancionar por unanimidad, salvo en un ínfimo número de disposiciones, la nueva Constitución.

Esta Carta Fundamental supera viejas concepciones que la humanidad ya ha dejado atrás y consagra un sistema político inspirado en la solidaridad social, al tiempo que avanza en el fortalecimiento de los principios de la República y de la participación democrática.

La Constitución es un programa político que demanda acciones concretas del Estado y requiere la participación activa de las organizaciones sociales y de los ciudadanos. De modo que todos somos sujetos de la historia y a través del protagonismo universal que promueve la democracia, desarrollando al máximo los principios rectores de la organización republicana, podremos edificar una sociedad solidaria, adecuada a una calidad de vida humana, para todos, sin marginaciones, a la que ya no podemos renunciar.

La Constitución es un programa para afrontar ese futuro, y está en manos de todos realizarlo.

Dr. Domingo Carlos Tulián
Presidente
Convención Constituyente

C A P I T U L O I

P R I N C I P I O S D E O R G A N I Z A C I O N P O L I T I C A

Artículo 1. SOBERANIA POPULAR: El poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la Provincia, quien lo ejerce por medio de sus legítimos representantes y por las otras formas de participación democrática establecidas en esta Constitución.

Artículo 2. FORMA DE GOBIERNO: La Provincia de La Rioja, parte integrante de la República Argentina, adopta para su gobierno - la forma representativa, republicana, democrática y social y en ejercicio de su autonomía, no reconoce más limitaciones a su poder que las expresamente delegadas en la Constitución Nacional al Gobierno Federal.

Artículo 3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA POLITICO: El Estado Provincial garantiza a través de todos sus actos el logro de la democracia participativa en lo económico político, social y cultural. La actividad de todos los órganos del Poder Público está sujeta a los principios republicanos, en particular a la publicidad de los actos, legalidad de las acciones de los funcionarios, periodicidad de las funciones y efectiva rendición de cuentas.

Artículo 4. DISTRIBUCION DEL PODER: El Poder del Estado Provincial está distribuído de acuerdo a lo establecido en esta Constitución en funciones conforme a las competencias que ella establece.

Artículo 5. PREAMBULO: El Preámbulo no es una mera enunciación de principios, sino fuente interpretativa y de orientación para

establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente Constitución.

Artículo 6. LIMITES Y DIVISION POLITICA: La Provincia tiene los límites que por derecho le corresponden con arreglo a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los tratados que se celebren. No podrán ser alterados sino por ley ratificada por consulta popular. El territorio de la Provincia está dividido en dieciocho departamentos, con sus actuales límites determinados por la ley, los que no podrán ser modificados sin previa consulta popular de los departamentos involucrados.

Artículo 7. SEDE DE LAS AUTORIDADES: Las autoridades centrales del gobierno residen en la ciudad de La Rioja Capital de la Provincia, salvo que por ley sujeta a consulta popular se fije otra sede.

Artículo 8. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: Ninguna norma jurídica tendrá efecto retroactivo ni podrá afectar los derechos adquiridos o alterar las obligaciones contractuales.

Artículo 9. INCONSTITUCIONALIDAD: Toda ley decreto, ordenanza o disposición contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución debe ser declarada inconstitucional por los jueces, a requerimiento de parte o de oficio.

Artículo 10. SUPRESION DE TRATAMIENTOS HONORIFICOS. Quedan suprimidos los tratamientos honoríficos a funcionarios y magistrados o cuerpos colegiados de la Provincia, cualquiera sea su investidura.

Artículo 11. SOSTENIMIENTO DEL CULTO CATOLICO: El gobierno de la

Provincia coopera a sostener el Culto Católico Apostólico y Romano.

Artículo 12. ALZAMIENTO: Los que se alzaren para cambiar esta - Constitución, deponer los órganos de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, como así también los funcionarios políticos que en la Provincia formaren parte del gobierno de facto que surgiere del alzamiento o subversión serán pasibles de las sanciones civiles, penales y políticas que determinen las leyes y esta Constitución. Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política que omitieren la ejecución de actos en defensa del mismo, serán pasibles de idénticas sanciones.

Los habitantes de la Provincia están obligados a organizarse en defensa del orden constitucional.

Artículo 13. LIMITES DE LA LIBERTAD: La Provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad, sin perjuicio del derecho individual o colectivo de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinario, sometido únicamente a las prescripciones de la ley .

La Provincia no reconoce organizaciones, cualesquiera sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales y sociales reconocidas por esta Constitución o atentanarias del sistema democrático republicano en que esta se inspira.

Artículo 14. INHABILITACIONES: Quienes ejercieren funciones de responsabilidad política en los gobiernos de facto o pertenezcan

a la dirigencia de las organizaciones referidas en el artículo anterior, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.

Artículo 15. DEMANDAS CONTRA EL ESTADO: El Estado Provincial, las Municipalidades y entidades descentralizadas, pueden ser demandadas sin necesidad de autorización previa, pero no se trabará embargo sobre bienes o fondos indispensables para cumplir sus fines o servicios públicos. Podrá hacerse efectivo - sobre otros bienes o recursos cuando el Estado o las entidades demandadas no dieran cumplimiento a la sentencia dentro de los tres meses posteriores a que la misma quede firme. La Cámara de Diputados o el Concejo Deliberante, en su caso, deberá autorizar los créditos necesarios para cumplir la sentencia. Se declaran inembargables los bienes destinados a los servicios de Asistencia Social y Educación.

Artículo 16. GESTION INTERNACIONAL: La Provincia detenta la facultad de efectuar en el orden internacional gestiones, actos o convenios que fueren necesarios para la satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de la política exterior delegada al Gobierno Federal.

Artículo 17. GESTION INTERJURISDICCIONAL: La Provincia podrá celebrar acuerdos, efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral o regional, con otras provincias o con la Nación en el ámbito de sus intereses propios y sin afectar los poderes políticos delegados al Gobierno Federal. En particular, podrá acordar con la Nación sobre coparticipación de los efectos ne-

gativos de la política económica nacional y participación en todo órgano que administre facultades concurrentes, regímenes concertados y empresas interjurisdiccionales o del Estado Nacional que exploten recursos en su territorio.

Artículo 18. INTERVENCION FEDERAL: En caso de intervención Federal, los actos que sus representantes ejecuten en el desempeño de sus funciones serán exclusivamente administrativos, con excepción de los que deriven del estado de necesidad.

Serán válidos en la Provincia sólo si hubieren sido realizados de acuerdo con ésta Constitución y las leyes provinciales. La nulidad podrá ser declarada a instancia de parte.

Los funcionarios y empleados designados por la intervención quedarán en comisión el día en que termine la misma. Los sueldos, retribuciones, compensaciones, viáticos y demás adicionales del Interventor Federal, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y funcionarios no escalafonados designados por la Intervención, no serán abonados por el gobierno de la provincia.

C A P I T U L O I I

D E R E C H O S Y G A R A N T I A S

Artículo 19. DERECHOS HUMANOS. Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho a defender su vida, libertad, reputación, integridad moral y física y seguridad individual. Nadie puede ser privado de su libertad sino por vía de penalidad, con arreglo a una ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia de juez competente.

No podrán crearse organizaciones oficiales especiales, que so pretexto de seguridad atenten o violen los derechos humanos.

Nadie podrá ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo ordene, consienta, ejecute, instigue o encubra y el Estado reparará el daño que el hecho provoque. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida.

Artículo 20. ACCIONES PRIVADAS. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Artículo 21. IGUALDAD: Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política.

El Estado propenderá al pleno desarrollo de la persona humana y a la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia, removiendo los obstáculos de orden jurídico, económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los mismos, impidan tal realización.

Artículo 22. PRESUNCION DE INOCENCIA: Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada previo proceso legal.

— Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, pue-

de ser privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma sin orden escrita de juez competente, la que deberá ser fundada en semiplena prueba de su culpabilidad.

Artículo 23. IN DUBIO PRO REO: Desde la iniciación del proceso penal, el o los jueces que intervinieren están obligados a aplicar el principio in dubio pro reo.

Tampoco podrán los jueces aplicar por analogía las incriminaciones legales, ni interpretar extensivamente la ley penal en contra del sospechado.

Siempre se aplicará, aún con efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado.

Artículo 24. DETENCION DE PERSONAS. En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados y las personas comprendidas en tales situaciones no podrán ser enviadas a establecimientos fuera de la provincia. De esta medida se dará cuenta en forma inmediata al juez competente y se pondrá a su disposición al detenido con los antecedentes del caso dentro de las veinticuatro horas.

La privisión preventiva no podrá prolongarse más allá del término fijado por la ley para la finalización del proceso en cuyo caso el detenido recuperará de inmediato la libertad.

Con la privación de la libertad de una persona se labrará un acta que será firmada por ella si es capaz, donde constará la razón del procedimiento, el lugar donde será conducido y el

magistrado interviniente, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darle cuenta de inmediato a un familiar del detenido o a quien éste indique y al Ministerio Público a los efectos de su defensa.

Queda prohibida la restricción a la libertad ambulatoria para averiguación de antecedentes.

Artículo 25. CUSTODIA DE PRESOS: Todo encargado de la custodia de presos debe, al recibirlos, exigir y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario es pasible de las sanciones previstas por la ley. La misma obligación de exigir la indicada orden bajo igual responsabilidad incumbe al ejecutor del arresto o detención.

Artículo 26. CARCELES: Las cárceles y demás lugares destinados al cumplimiento de las penas de privación de la libertad serán sanas, limpias y organizadas con el fin de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, que incluirá el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que conduzca a mortificar física o moralmente a los detenidos hará responsable a quien la ejecute, autorice o consienta. Deberá garantizarse la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas.

Una ley especial dispondrá la creación, organización y funcionamiento de institutos de rehabilitación y educación de menores.

Artículo 27. HABEAS CORPUS: Toda persona detenida sin orden ema

nada en legal forma de autoridad competente o a quien arbitrariamente se restringiere o amenazare en su libertad, puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de habeas corpus ante un juez letrado inmediato, a fin de que se ordene su libertad o que se someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación o restricción que padeciére. La acción de habeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal.

El juez, dentro de las veinticuatro horas, examinará el caso y hará cesar inmediatamente la restricción si ésta no proviene de autoridad competente o si no cumple los recaudos constitucionales legales.

Cuando un juez estuviere en conocimiento de que alguna persona se hallare arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario, particular, o un grupo de éstos, deberá expedir de oficio el mandamiento de habeas corpus.

El juez de habeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública.

Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparta el juez de habeas corpus. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes rehusaren o descuidaren ese cumplimiento.

Artículo 28. AMPARO: Procederá la acción de amparo contra cual-

quier decisión, acto u omisión de autoridad o de particulares que, con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución Nacional, a fin de que el juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado. Esta acción procederá siempre que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no procediese el recurso de habeas corpus.

Cuando una disposición legal imponga a un funcionario un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o cumplirse la abstención y sufre perjuicio material, moral o político por falta injustificada del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata, quien previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá el funcionario un mandamiento de ejecución o de prohibición según el caso.

Artículo 29. DEFENSA EN JUICIO: Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. En ningún caso los defensores podrán ser molestados con motivo del ejercicio de su ministerio, ni allanados sus domicilios o locales profesionales. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, consanguíneos o afines. Toda declara-

ción del imputado que no sea hecha ante el juez de la causa care
cerá de valor probatorio.

Queda abolido el secreto del sumario para las partes y pro
hibida la incomunicación de los detenidos sin orden del juez,
la que en ningún caso excederá de veinticuatro horas. Se asegu-
rará a los indigentes los medios para actuar o defenderse en
cualquier jurisdicción o fuero.

Artículo 30. DERECHO A LA PRIVACIDAD: Son inviolables el domicii
lio, los papeles y registros de datos privados, la corresponden
cia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo puede
n ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en
virtud de orden escrita de juez competente.

La ley limitará el uso de la información para preservar el
honor, la intimidad personal y familiar de los habitantes y el
pleno ejercicio de sus derechos.

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es ex-
cepcional, debiendo el magistrado que lo dispone fundar la decisi
ón.

Las autoridades policiales sólo proporcionarán antecedentes
penales de los habitantes en los casos previstos por la ley.

Artículo 31. LIBERTAD DE PRENSA: Todo habitante de la Provincia
es libre de escribir, imprimir o difundir, por cualquier medio,
sus ideas.

Todos los habitantes gozan del derecho del libre acceso a
las fuentes públicas de información.

todas las autoridades ajusten sus acciones a los principios informadores de los mismos: derecho a trabajar; a una retribución justa; a la capacitación; a condiciones dignas de trabajo; a la participación en las ganancias de la empresa con control de su producción, cogestión o autogestión en la dirección; a la preservación de la salud; al bienestar; a la seguridad social; a la protección de su familia; al mejoramiento económico; a la defensa de sus intereses profesionales y de aprender y enseñar.

El trabajo es un deber social y todo habitante de la Provincia tiene la obligación moral de realizar una actividad, función u oficio que contribuya al desarrollo espiritual, cultural y material de la comunidad según su capacidad y elección.

El Estado garantiza a los sindicatos los siguientes derechos: a su reconocimiento, sin otro requisito que la inscripción en un registro especial; a concertar convenios colectivos de trabajo; al ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad de sus empleos y la licencia gremial.

En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del Derecho del Trabajo.

Si la duda recayese en la interpretación o alcances de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más

No podrá dictarse ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite la libertad de prensa; que trabee, impida o suspenda por motivo alguno el funcionamiento de imprentas, talleres tipográficos, difusoras radiales o televisivas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, que decomise sus maquinarias o enseres, o clausure sus locales, ni expropie sus bienes.

Tampoco sus labores podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas por actos o hechos del poder público que impidan o dificulten, directa o indirectamente, la libre expresión y circulación del pensamiento o la información.

Sólo se considerarán abuso a la libertad de expresión los hechos constitutivos de delitos comunes. La calificación y juzgamiento de estos hechos corresponde a la justicia ordinaria, la que deberá tratar con preferencia los juicios que versen sobre la transgresión de este artículo.

Artículo 32. LIBERTAD DE CULTO: Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Nadie será obligado a declarar el culto que profesa.

Artículo 33. DERECHOS DEL TRABAJADOR: El trabajo como digna actividad humana, goza de la protección del Estado Provincial, quien reconoce y declara los siguientes derechos a objeto de que

favorable al trabajador.

Artículo 34. PROTECCION DE LA FAMILIA: La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad será objeto de preferente atención por parte del Estado Provincial, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La Provincia promoverá la unidad económica familiar y el bien de familia, conforme a lo que una ley especial determine.

La atención y asistencia de la madre y el niño gozarán de la especial consideración del Estado.

Artículo 35. EDUCACION FAMILIAR: Como una forma de protección familiar, los establecimientos e institutos de enseñanza secundaria, superior y universitaria deberán incluir en sus planes de estudio una asignatura que se refiera a aquellos aspectos de la educación de adolescentes y jóvenes que signifique prepararlos para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar.

Artículo 36. PROTECCION DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE: Todo niño o adolescente tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo total o parcial, moral o material, permanente o transitorio, corresponde a la Provincia como inexcusable deber social, proveer a dicha protección ya sea en forma directa o por medio de institutos.

Artículo 37. PROTECCION DE LA ANCIANIDAD: Todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha pro

tección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados para ese fin.

Artículo 38. PROTECCION DEL DISCAPACITADO: La Provincia promoverá políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y psíquicos, como asimismo aquellas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a los deberes de solidaridad para con ellos.

Artículo 39. DERECHO A LA VIVIENDA: El Estado propenderá al logro de una vivienda digna a todos los habitantes de la Provincia.

Artículo 40. DERECHO A ASOCIARSE: Todo ciudadano goza del derecho de asociarse, cualquiera sea su objetivo siempre que no afecte la moral, el orden público o el ordenamiento legal.

Las asociaciones sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y no serán disueltas en forma compulsiva, sino en virtud de sentencia judicial.

Artículo 41. DERECHO DE PETICION: Queda establecido el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente sin que la publicación de dichas peticiones dé lugar a la aplicación de penalidad alguna a quien la formule. La autoridad a que se haya dirigido la petición está obligada a comunicar por escrito al solicitante la resolución pertinente.

Artículo 42. DERECHO DE REUNION: Los habitantes tienen derecho a reunirse sin autorización, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares públicos, pudiendo efectuar manifestaciones públicas

en forma individual o colectiva.

Artículo 43. ADMISIBILIDAD EN LOS EMPLEOS: Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad y el domicilio en la provincia. La designación se efectuará por concurso público de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo conforme lo reglamente la ley.

Artículo 44. ESTABILIDAD: Ningún empleado o funcionario escalafonado de la Provincia podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, aptitudes físicas o mentales. La cesantía sólo se dispondrá previo sumario que justifique la medida. La ley fijará el régimen escalafonario y asegurará la carrera administrativa, régimen disciplinario y jubilatorio.

Artículo 45. REGIMEN DE REMUNERACIONES: La ley establecerá un régimen de remuneraciones de magistrados, funcionarios y demás empleados de la Provincia, teniendo en cuenta el principio de que a igual tarea corresponde igual remuneración.

Se incluye de esta limitación los siguientes adicionales particulares: antigüedad, título y asignaciones familiares.

Artículo 46. REGIMEN PREVISIONAL: El régimen jubilatorio provincial será único para todas las personas y asegurará la equidad y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.

El haber deberá ser móvil, irreductible y proporcional a la remuneración del mismo cargo en actividad.

Artículo 47. ACUMULACION DE EMPLEOS: En ningún caso podrán acumularse en una misma persona dos o más funciones o empleos reñados, ya sea provincial, municipal o nacional, con excepción de la docencia en ejercicio, con las limitaciones que la ley deberá establecer para este último caso. Como excepción podrá contratarse profesionales universitarios por tiempo determinado cuando sus antecedentes técnicos y científicos así lo aconsejen para la función a desempeñar. La aceptación de un nuevo empleo hace caducar automáticamente al anterior. Cuando se trate de cargos políticos podrá retenerse el empleo sin derecho a percepción de haberes.

Artículo 48. RESPONSABILIDAD: La Provincia es solidariamente responsable con sus agentes cuando éstos causaren daños a terceros por mal desempeño de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones.

Artículo 49. MANIFESTACIONES DE BIENES: Los que ejercen las funciones legislativas, ejecutiva y judicial están obligados al entrar en funciones y al cesar en las mismas a efectuar manifestación de bienes, por sí, su cónyuge y personas que la ley determine.

Artículo 50. DERECHOS IMPLICITOS: Los principios, declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía popular, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en

su calidad de tal o como integrante de la sociedad o de sus organizaciones en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes de solidaridad. Tampoco se entenderá como negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta Constitución.

C A P I T U L O I I I

C U L T U R A , E D U C A C I O N Y S A L U D P U B L I C A

Artículo 51. FINES DE LA EDUCACION: La educación es un derecho humano fundamental y un deber de la familia y del Estado. Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la ética, la libertad y la justicia social; en el respeto a las tradiciones e instituciones del país, y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.

Artículo 52. CARACTERES DE LA EDUCACION: El Estado asegurará el acceso a la educación, su permanencia y la posibilidad de acceder a los más altos grados de educación. Deberá posibilitar la igualdad de oportunidades para todas las personas, desarrollando las acciones a su alcance para este fin mediante el principio de centralización normativa y descentralización operativa de tales acciones. También procurará que el estudiante de cualquier nivel pueda insertarse en el mundo productivo del trabajo sin detener el proceso educativo.

Artículo 53. SISTEMA EDUCACIONAL: Para el cumplimiento de los fi nes establecidos en esta Constitución, la Provincia organizará un régimen educacional que comprenda la enseñanza pre-primaria, primaria, secundaria, superior y universitaria, que se ajustará a las siguientes bases:

1.- La educación será gratuita y asistencial; y obligatoria has ta el ciclo básico del nivel secundario y demás niveles que en lo sucesivo se establezcan por ley.

2.- La enseñanza particular privada o no oficial, será autori zada y fiscalizada por el Estado, debiendo ajustarse a las condiciones y objetivos fijados en esta Constitución.

3.- Se promoverá la consolidación de la familia, el conocimien to de la Constitución Nacional y Provincial y de la realidad pro vincial, nacional y latinoamericana.

4.- Se asegurará la educación permanente y sistemática, articu lando la educación asistemática.

Artículo 54. CONSEJO DE EDUCACION: La coordinación de la políti ca educativa estará a cargo de un Consejo Técnico Educativo, en el que tendrán representación los docentes y los padres, cuya de nominación y funcionamiento reglamentará la ley respectiva.

Artículo 55. UNIVERSIDADES: La enseñanza universitaria será regi da por un Consejo Superior formado en cada establecimiento me diante la participación de los docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Una ley especial reglamentará su estructura, fun cionamiento y procedimientos a que deberá ajustarse, asegurando

la autonomía universitaria con las facultades de dictar su propio estatuto, elegir sus autoridades y nombrar su personal.

Artículo 56. CULTURA: El Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y eliminará toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural.

Promoverá y protegerá las manifestaciones culturales personales o colectivas y aquellas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano, especialmente las que fueren de reconocido arraigo y trascendencia popular en la Provincia.

El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental, forma parte del patrimonio cultural de la Provincia.

Artículo 57. DERECHO A LA SALUD: El Estado asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y regional, creando los organismos técnicos que garanticen la promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se establezca.

La actividad de los trabajadores de la salud será considerada como función social, garantizándose la eficaz prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

Los medicamentos serán considerados como bien social básico, debiendo disponerse por ley las medidas que aseguren su acceso para todos los habitantes.

El Estado fomentará la participación activa de la comunidad,

y podrá celebrar convenios con la Nación, otras provincias, o entidades privadas u otros países destinados al cumplimiento de los fines en materia de salud.

Se promoverá la creación de centros de estudios e investigación, de formación y capacitación, especialmente en lo referente a los problemas de salud que afectan a la provincia y a la región.

C A P I T U L O I V

R E G I M E N E C O N O M I C O F I N A N C I E R O

Artículo 58. FUNCION SOCIAL DE LA ECONOMIA: La actividad económica estará al servicio del hombre y se organizará conforme a los principios sociales de esta Constitución.

El Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y la comunidad, debiendo regular las actividades económicas a esos efectos. A tal fin se crearán los institutos y se arbitrarán los medios necesarios con intervención de representantes del trabajo, sociedades, cooperativas, asociaciones de productores, trabajadores, empresarios e instituciones oficiales de crédito, para la defensa efectiva de la producción básica, la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento de los recursos naturales, la radicación de industrias, especialmente en el interior de la provincia y la comercialización de la producción en beneficio de los productores y consumidores.

Artículo 59. FUNCION SOCIAL DEL CAPITAL: El capital debe tener

por principal objeto de desarrollo y progreso de la Provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo.

Artículo 60. FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD: La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia la misma queda sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.

La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Artículo 61. POLITICA AGRARIA: La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional.

La política agraria tenderá al establecimiento de unidades de producción económica racionalizadas, teniendo en cuenta las particularidades regionales de la Provincia, al perfeccionamiento de los títulos de los inmuebles rurales, a la radicación del trabajador y de capitales, a la organización de productores, la promoción del acceso a los mercados, la defensa de la actividad productiva y el crédito agrario conforme a la capacidad de trabajo del agricultor.

Artículo 62. DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES: La Provincia en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo, es dueña originaria de todas las sustancias minerales y fuentes naturales de energía incluidos hidrocarburos, que existen en su territorio con excepción de los vegetales.

Podrá proveer a su aprovechamiento por sí o mediante acuerdos con la Nación, otras provincias o terceros, con el fin de efectuar la exploración, explotación, industrialización, preferentemente en el departamento de origen, y comercialización de las mismas, fijando de común acuerdo las regalías o retribuciones pertinentes, en lo que tendrá participación el municipio donde se ubique el yacimiento minero. La Nación no podrá disponer de dichos recursos sin previo consentimiento de la Provincia prestado por la ley.

Artículo 63. DOMINIO Y USO DE LAS AGUAS: Son de dominio público de la Provincia los lagos, ríos y sus afluentes y todas las aguas públicas existentes en su jurisdicción. La ley que reglamente su uso deberá establecer que toda concesión de uso y goce de aguas del dominio público es inseparable y se atribuye como derecho inherente al predio.

Artículo 64. SERVICIOS PUBLICOS: Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la provincia o a las Municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas.

Artículo 65. COOPERATIVISMO: El Estado a través de la ley fomentará y promoverá la organización, el mantenimiento y el desarrollo de cooperativas y mutuales mediante la asistencia técnica e integral, el correcto ejercicio de la fiscalización y un adecuado plan de educación y capacitación cooperativista y mutualista.

Artículo 66. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Los habitantes tienen derecho a un ambiente de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo.

El Estado promoverá la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente en el territorio provincial, para lograr una óptima calidad de vida.

Toda persona cuya acción pueda producir la degradación del ambiente queda obligada a tomar las precauciones para evitarla.

Cualquier persona puede pedir por acción de amparo la cesación de las causas de la violación de estos derechos.

Artículo 67. DESARROLLO INTEGRAL: El Estado promoverá el desarrollo integral autónomo y armónico de las diferentes zonas de su territorio.

Artículo 68. REGIMEN FINANCIERO: El régimen financiero de la Provincia se basa en el poder impositivo de la misma. En virtud del poder fiscal originario es privativo de la Provincia la creación de Impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las modalidades de percepción con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al Gobierno Federal en virtud de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Artículo 69. TESORO PROVINCIAL: El Estado provee a sus gastos con los fondos del tesoro provincial, formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley para urgencias de la Provincia o para empresas de utilidad pública, por el producido de los servicios que preste; por la administración de los

bienes de dominio público y por la disposición o administración de los del dominio privado; por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no delegados de la Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos federales recaudados por los organismos competentes; y por las reparaciones que obtenga el erario nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos tributarios o no tributarios creados por ley.

Artículo 70. EMPRESTITOS: Podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de títulos públicos u otras operaciones de crédito, por ley sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros en funciones de la Cámara de Diputados, pero ningún compromiso de ésta clase podrá contraerse sino para obras públicas. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas, podrá comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se tomará como base el cálculo de recursos menor de los tres últimos años. Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones no podrán ser distraídos ni interinamente de su objeto, bajo la responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos. La ley que provea a otros compromisos extraordinarios deberá especificar los recursos especiales en que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

Artículo 71. REGIMEN TRIBUTARIO: El régimen tributario de la provincia se estructurará sobre la base de la función económico-so

cial de los impuestos y contribuciones. La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos, contribuciones y cargas públicas. La ley establecerá el impuesto tendiente a concretar el principio que, el mayor valor de la tierra, producido sin inversión de trabajo o de capital, debe aprovechar la comunidad.

Artículo 72. LICITACIONES: Toda enajenación de bienes de la provincia o municipios, compra, obras públicas y demás contratos se efectuará por el sistema de subasta y licitación pública, bajo pena de nulidad, con excepción de los casos que la ley determine.

Artículo 73. PRESUPUESTO: En el presupuesto se consignarán los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, considerándose derogadas si no se incluyeren en el presupuesto las partidas correspondientes. El presupuesto sancionado seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de un nuevo presupuesto.

Ninguna ley especial que ordene o autorice gastos y carezca de recursos especiales propios podrá ser cumplida mientras la erogación no esté incluída en el presupuesto.

C A P I T U L O V

D E R E C H O S P O L I T I C O S Y R E G I M E N E L E C T O R A L

Artículo 74. PARTICIPACION POLITICA. Es derecho y deber de todo ciudadano participar en la vida política.

Esta Constitución reconoce los siguientes derechos políticos;

- 1- Derecho a elegir y ser elegido;
- 2- Derecho a constituir e integrar asociaciones de carácter político;
- 3- Derecho a peticionar a las autoridades cuando la petición esté dirigida a gestionar un interés público o medidas que beneficien a un sector o a toda la comunidad.
- 4- Derecho a reuniones de carácter político y a publicar ideas políticas sin censura previa;

La ley reglamentará el ejercicio de estos derechos.

Artículo 75. PARTIDOS POLITICOS: La Provincia reconoce y asegura la existencia y personería de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la orientación, formación y manifestación de la voluntad popular. A tal fin deberán obligadamente organizar las escuelas de formación de dirigentes.

A los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos y el Estado garantiza su libre funcionamiento dentro del territorio provincial por el solo hecho de su constitución sin ingerencia estatal o cualquier otra en su vida interna y su actividad pública.

Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social, en las condiciones que la ley determine.

Su organización interna responderá a principios democráticos y deberán rendir cuentas públicamente sobre el origen de sus fondos.

Artículo 76. BANCAS LEGISLATIVAS: Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos. Cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta.

En caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato, podrá el partido iniciar acción ante el Tribunal Electoral de la Provincia con el fin de cuestionar el desempeño de la representación y resuelta la inconducta, queda abierta la sustitución por el suplente respectivo.

Artículo 77. CUERPO ELECTORAL: La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

Son electores los ciudadanos de uno u otro sexo, inscriptos en el padrón electoral de la Nación y domiciliados en la Provincia. Cuando el padrón electoral de la Nación no se ajuste a los principios establecidos en esta Constitución para el ejercicio del sufragio, por ley se dispondrá la formación del padrón electoral de la Provincia bajo la dirección del Tribunal Electoral.

Artículo 78. SUFRAGIO ELECTORAL: El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y su ejercicio una función política que tiene el deber de desempeñar con

arreglo a esta Constitución y a la ley.

Artículo 79. LEY ELECTORAL: La Ley Electoral será uniforme para toda la Provincia y la dividirá en tantos distritos electorales como departamentos haya. La misma ley establecerá la forma en que estarán representadas las minorías. El voto es universal, libre, igual y secreto.

Artículo 80. TRIBUNAL ELECTORAL: En la Provincia funcionará un Tribunal Electoral permanente integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia que lo presidirá, un Juez de Cámara y un miembro del Ministerio Público, elegidos por sorteo que efectuará el Tribunal Superior cada cuatro años. La ley fijará sus atribuciones y responsabilidades.

Artículo 81. INICIATIVA ELECTORAL: Por la iniciativa popular, el cuerpo electoral con el porcentaje que la ley determine, que no debe ser inferior al cinco por ciento del electorado puede presentar un proyecto de ley o de derogación de leyes en vigencia para su tratamiento por la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma constitucional.

La Cámara de Diputados está obligada a considerar el proyecto. Cuando lo rechace o lo reforme sustancialmente, la iniciativa deberá someterse a consulta popular. Si el proyecto no es tratado en el término de tres meses, el mismo quedará aprobado.

Artículo 82. CONSULTA POPULAR: Las cuestiones de gobierno y la vigencia de nuevas leyes, la reforma o derogación de normas ju-

rídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a consulta popular que podrá ser obligatoria o facultativa. Será obligatoria en los siguientes casos:

- 1- Toda reforma constitucional realizada por la Cámara de Diputados de acuerdo al Artículo 162.
- 2- Las leyes que autorizan empréstitos cuyos servicios sean superiores al porcentaje en que se puedan afectar los recursos ordinarios.
- 3- Los actos legislativos que se considere conveniente someter a consulta antes de su vigencia.

Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el registro electoral no la aprueba.

Artículo 83. REVOCATORIA POPULAR: El cuerpo electoral tiene el derecho de decidir la destitución o separación de aquellos funcionarios electivos que no han cumplido el mandato recibido o que por el mal desempeño en sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada en ellos por el pueblo.

Para que la revocatoria popular se considere válida es necesario que el resultado electoral supere el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el registro electoral.

C A P I T U L O V I

F U N C I O N L E G I S L A T I V A

Artículo 84. CAMARA DE DIPUTADOS: La función legislativa de la Provincia es ejercida por la Cámara de Diputados, integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a esta Constitución y a la ley.

Artículo 85. COMPOSICION: La Cámara de Diputados se compondrá de un diputado cada diez mil habitantes, a cuyo efecto se tendrá presente el censo nacional hasta que lo efectúe la Provincia. Después de cada censo la ley fijará el cociente de la representación. Sin perjuicio de las proporciones a que se refiere este artículo, cada departamento por lo menos tendrá dos diputados con excepción de Capital que tendrá doce, Chilecito que tendrá seis y Arauco, Gobernador Gordillo, Rosario Vera Peñaloza y Felipe Varela, que tendrán tres diputados cada uno.

Artículo 86. REQUISITOS: Para ser diputado se requiere ser argentino, mayor de edad, con dos años de residencia inmediata y efectiva anterior a la elección, en el departamento que representa.

Artículo 87. ORDEN DE ADJUDICACION: Corresponde adjudicar los cargos de diputados, respetando el orden de colocación de los candidatos en las listas oficializadas por el Tribunal Electoral. Los que siguen serán considerados suplentes, a los que se agregarán en tal carácter los otros suplentes que la ley establezca.

Artículo 88. DURACION: Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de su mandato y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo del titular completará el término del mandato.

Artículo 89. INCOMPATIBILIDADES: No pueden ser diputados los milita-

res en servicio activo; los que hayan sido condenados a penas de reclusión o prisión mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena; los quebrados fraudulentos mientras no sean rehabilitados y los deudores del fisco cuando se hubiere dictado sentencia en su contra y no hubiere sido cancelada la deuda.

Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de funcionario, empleado, contratado, dependientes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, excepto la docencia.

Todo diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa por ese hecho de ser miembro de la Cámara. Los agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal que resultaren elegidos diputados quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo, desde su asunción, por el término que dure su función.

Ningún diputado podrá patrocinar causas contra la Nación, Provincia o Municipios, ni defender intereses privados ante la Administración. Tampoco podrá participar en empresas beneficiadas con privilegios o concesiones dadas por el Estado.

Artículo 90. INMUNIDADES: Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes, de legislador, es ofensa a la misma Cámara, que debe ser sancionada.

Ningún diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto el caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso que merezca pena privativa de la libertad; en este caso el juez que ordene la detención dará cuenta dentro de los tres días a la Cámara, con la información sumaria del hecho.

Artículo 91. DESAFUERO: La Cámara al conocer el sumario podrá allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho si la Cámara no hubiese resuelto el caso dentro de los diez días siguientes en que se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido será puesto inmediatamente en libertad.

Cuando se deduzca acusación ante la justicia contra un diputado, examinado el mérito de la misma en la sesión próxima a la que se diere cuenta del hecho, la Cámara, con los dos tercios de votos de la totalidad de sus componentes, podrá suspender en sus funciones al acusado y dejarlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 92. FACULTAD DISCIPLINARIA: La Cámara, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros corregirá a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o ausentismo notorio e injustificado, o lo excluirá de su seno por inhabilidad física, psíquica, moral o legal sobreviniente a su incorporación.

Artículo 93. PRESIDENCIA: La Presidencia de la Cámara será ejerci-

da por el Vice Gobernador, quien tendrá voto sólo en caso de empate.

La Cámara nombrará anualmente de su seno y en su primera sesión ordinaria Vice Presidente Primero y Segundo quienes procederán a desempeñar la presidencia por su orden. Cuando ejerzan la presidencia tendrán voto y decidirán en caso de empate.

Los nombramientos de las autoridades de la Cámara deberán hacerse por mayoría absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta deberá repetirse la votación limitándose a los dos candidatos más votados. En caso de empate decidirá el Presidente.

Artículo 94. INVESTIGACIONES: Es facultad de la Cámara designar comisiones con fines de fiscalización o investigación en cualquier dependencia de la Administración Pública Provincial o entidades privadas cuando estuvieren comprometidos intereses del Estado. No deberá interferir en el área de atribuciones de las otras funciones y resguardará los derechos y garantías individuales. Para practicar allanamientos debe requerir la autorización del juez competente.

Artículo 95. INTERPELACION: La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, podrá llamar a su seno a los ministros para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes, a cuyo efecto deberá citarlos con cuarenta y ocho horas de anticipación y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de informar.

El Gobernador podrá concurrir a la Cámara cuando lo estime con-

las tierras del Estado Provincial, requiriéndose los dos tercios de los votos de sus miembros para la cesión de tierras fiscales con el objeto de utilidad social expresamente determinada;

Inciso 6.- Autorizar al Gobernador a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.

Inciso 7. Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario y crediticio.

Inciso 8. Crear y suprimir cargos o empleos no establecidos expresamente por esta Constitución , determinando sus atribuciones y responsabilidades;

Inciso 9.- Declarar la utilidad pública o el interés general en los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe abonarse la indemnización;

Inciso 10.- Establecer o modificar las divisiones departamentales, conforme a lo establecido en esta Constitución;

Inciso 11.- Acordar amnistías generales;

Inciso 12.- Aprobar o desechar los tratados o convenios que el Gobernador acuerde con el Estado Nacional, otras provincias o sus municipios, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, estados extranjeros u organismos internacionales;

Inciso 13.- Recibir el juramento de ley al Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia y considerar las renunciaciones que hicieren de su cargo;

Inciso 14.- Conceder o delegar la licencia al Gobernador y Vice-Gobernador en ejercicio, para salir del territorio de la Provincia

veniente en reemplazos de los ministros interpelados.

Artículo 96. REGLAMENTO INTERNO: La Cámara dictará su reglamento, el que preverá la constitución de comisiones internas encargadas de intervenir en el estudio del material legislativo. Se integrarán respetando la proporción de la representación parlamentaria de la Cámara.

Artículo 97. FACULTADES DE LAS COMISIONES: Las comisiones legislativas podrán dictar resoluciones, declaraciones y efectuar pedidos de informes. La Cámara podrá disponer la remisión a las mismas de asuntos de menor trascendencia para que ellas lo resuelvan.

Artículo 98. COMISION PERMANENTE: La Cámara podrá designar de su seno, antes de entrar en receso, una comisión permanente a la que le corresponderán las siguientes funciones: seguir la actividad de administración, promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones.

Artículo 99. PERIODO DE SESIONES: La Cámara se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el quince del mes de diciembre, pudiendo por sí prorrogarlas por el término que sea necesario.

La Cámara podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gobernador cuando mediaren razones de urgente interés público y por el Presidente del cuerpo cuando lo solicitare la tercera parte de sus miembros. En tales casos se tratarán únicamente los asuntos que motivaron la convocatoria.

Artículo 100. QUORUM: La Cámara sesionará con la presencia de la

mitad más uno de sus componentes.

Podrá realizar sesiones en minoría al solo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes.

Las sesiones serán públicas salvo que en razón de la naturaleza del asunto se resolviere lo contrario.

Artículo 101. DECLARACIONES: La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o administrativo atinente a los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Artículo 102. ATRIBUCIONES: Corresponde a la Cámara de Diputados:

Inciso 1. Dictar todas las leyes necesarias para el ejercicio de las instituciones creadas por esta Constitución, así como las relativas a todo asunto de interés público y general de la Provincia;

Inciso 2. Establecer tributos para la formación del tesoro provincial;

Inciso 3. Fijar anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos.

Podrá fijarse por un período mayor siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio y que se establezca en base a ejercicios anuales,

Inciso 4.- Aprobar, rechazar u observar en el plazo de noventa días, las cuentas de inversión que deberá presentar el Gobernador hasta el treinta de junio de cada año respecto al ejercicio anterior;

Inciso 5.- Legislar sobre el uso, distribución y enajenación de

por más de treinta días;

Inciso 15.- Prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requiera esta formalidad, entendiéndose acordado si dentro de los treinta días de recibida la comunicación correspondiente no se hubiera expedido;

Inciso 16.- Elegir senadores al Congreso de la Nación en la forma que lo determine la Constitución Nacional e instruirles para su gestión en el Senado de la Nación cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia.

La Cámara podrá pedir al Senado de la Nación, la remoción de los mismos con el voto de las dos terceras partes y previa consulta popular;

Inciso 17.- Efectuar los nombramientos que correspondan conforme a esta Constitución;

Inciso 18.- Disponer con los dos tercios de los votos la intervención de los municipios con arreglo a lo previsto en esta Constitución;

Inciso 19.- Crear la comisión de control y seguimiento legislativo con facultades suficientes para verificar la aplicación de las leyes;

Inciso 20.- Dictar las leyes de organización y los códigos: rural, de procedimientos judiciales, contencioso administrativo, electoral, bromatológico, de recursos renovables y no renovables, y - otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia provincial;

Inciso 21.- Proveer lo conducente a la prosperidad de la Provin-

cia, justicia, seguridad social, higiene, moralidad, cultura, y todo lo que tienda a lograr la justicia social;

Inciso 22.- Reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de competencia del Gobierno de la Nación;

Inciso 23.- Dictar las leyes conducentes a la organización y funcionamiento de la educación en la Provincia.

Artículo 103. ORIGEN DE LAS LEYES: Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por uno o más diputados, por el Gobernador o por el Tribunal Superior en los casos autorizados en esta Constitución.

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara, podrá ser tratado nuevamente durante el año de su rechazo.

Artículo 104. PROMULGACION Y VETO: Cuando un proyecto de ley fuere sancionado por la Cámara, ésta lo remitirá dentro de los cinco días al Gobernador para su promulgación y publicación. El Gobernador podrá vetar dicho proyecto en el término de diez días hábiles, en forma total o parcial. Si no lo hiciere se considerará promulgado.

Vetada en todo o en parte con sus objeciones a la Cámara y si esta insistiere en su sanción con dos tercios de votos de los miembros presentes, será ley y pasará al Gobernador para su promulgación. No concurriendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Gobernador, no podrá repetirse en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el gobernador, éste podrá promulgar la parte no vetada.

Artículo 105. JUICIO POLITICO-AMBITO DE APLICACION: El Gobernador Vice Gobernador, ministros, miembros del Tribunal Superior de Justicia el Procurador General, jueces inferiores, miembros del Ministerio Público, Fiscal de Estado y miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser denunciados ante la Cámara de Diputados por inhabilidad sobreviniente física o mental, por mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes o por delitos comunes.

Artículo 106. DIVISION DE LA CAMARA. Anualmente la Cámara en su primera sesión se dividirá por sorteo en dos salas, compuestas cada una por la mitad de sus miembros a los fines de la tramitación del juicio político. En caso que la composición de la Cámara fuese impar, la Sala Segunda se integrará con un miembro más.

La Sala Primera tendrá a su cargo la acusación, y la Sala Segunda será la encargada de juzgar. Cada sala será presidida por un diputado elegido de su seno.

Artículo 107. SALA ACUSADORA. La sala acusadora nombrará anualmente, en su primera sesión, una comisión de investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para tal efecto las más amplias facultades.

Artículo 108. COMISION INVESTIGADORA. La comisión investigadora practicará las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presentará el dictamen a la sala acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo, necesitando dos tercios de los votos de sus miembros, presentes cuando fuere favorable a la acusación.

Artículo 109. SUSPENSION DE FUNCIONES. Desde el momento que la sala acusadora haya aceptado la acusación, el acusado quedará - suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo.

Artículo 110. COMISION ACUSADORA. Admitida la acusación por la sala acusadora, esta nombrará una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en - tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante su presidente.

Artículo 111. SALA DE SENTENCIA. La sala de sentencia procederá de inmediato al estudio de la acusación, prueba y defensa, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin dictar el fallo condenatorio, el acusado - volverá al ejercicio de sus funciones con derecho a percibir - los haberes no cobrados, sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos.

Artículo 112. PRONUNCIAMIENTO. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la sala de sentencia. La votación será nominal, debiendo registrarse en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación.

Artículo 113. EFECTOS: El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado pudiendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales ordinarios.

Artículo 114. PROCEDIMIENTO: La Cámara dictará una ley de proce-

mientos para esta clase de juicios, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.

C A P I T U L O V I I

F U N C I O N E J E C U T I V A

Artículo 115. GOBERNADOR: La función ejecutiva provincial será desempeñada por el Gobernador quien es el jefe político de la Administración de la Provincia o en su defecto por el Vice Gobernador quien además de ser titular de la Cámara de Diputados, aún cuando no reemplace al Gobernador podrá participar en los acuerdos de ministros y reuniones de gabinete. Ambos se elegien al mismo tiempo y por idéntico período.

Artículo 116. REQUISITOS. Para ser elegido Gobernador o Vice Gobernador se requiere:

- 1- Ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio efectivo de la ciudadanía.
- 2- Tener treinta años de edad.
- 3- Ser elector en la provincia y tener cinco años de residencia inmediata en la misma, a no ser que la ausencia sea debida a servicios prestados a la Nación o a la Provincia.
- 4- No ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 117. DURACION DEL MANDATO. El Gobernador y Vice Gobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios y ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga; pudiendo ser reelectos.

Artículo 118. JURAMENTO. Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y Vice Gobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados o en su defecto ante el Tribunal Superior de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y de la Provincia.

Artículo 119. INMUNIDADES. El Gobernador y Vice Gobernador, tendrán desde su elección las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados.

Percibirán el sueldo que la ley fije, el cual no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.

Artículo 120. RESIDENCIA. El Gobernador y Vice Gobernador residirán en la ciudad capital y no podrán ausentarse de la Provincia por más de treinta días sin autorización de la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta solo podrán ausentarse de la Provincia por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la comisión de receso.

Artículo 121. ACEFALIA. En caso de muerte, destitución, renuncia, licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del Gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el Vice Gobernador por todo el resto del período legal en las tres primeras situaciones y hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las restantes. Si la inhabilidad temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y Vice Gobernador, se hará cargo de la función ejecutiva hasta que aquella cese para alguno de ellos, el Vice Presidente Primero o Vice Presidente Segundo de la Cámara de Dipu-

tados.

Artículo 122. NUEVA ELECCION. Si antes de asumir el ciudadano electo Gobernador muriese, renunciare o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección. En caso de acefalía simultánea y definitiva del Gobernador y Vice Gobernador faltando más de dos años para la expiración del mandato, las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Vice Presidente Primero de la Cámara de Diputados o en su defecto por el Vice Presidente Segundo de la misma o por el Presidente del Tribunal Superior en este orden, quienes deberán convocar al pueblo de la provincia a elección de Gobernador y Vice Gobernador en el término de treinta días. No podrá ser candidato el funcionario que desempeñe interinamente el cargo de Gobernador .

Faltando menos de dos años para la finalización del período el funcionario que desempeñe la función ejecutiva convocará a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días si ésta se hallare en receso, o le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviese en sesiones, para que dentro de los cinco días en el primer caso y de los tres en el segundo, se reúna con el quorum de dos tercios como mínimo a fin de designar de entre sus miembros y por mayoría de votos, al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes.

Artículo 123. DEBERES Y ATRIBUCIONES. El Gobernador es el representante legal del Estado Provincial y jefe de la Administración con los siguientes deberes y atribuciones.

Inciso 1- Participa en la formación de las leyes con arreglo a

esta Constitución, las promulga y las hace ejecutar, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos. Puede ejercer el derecho de veto.

Inciso 2- Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, el estado general de la administración, el movimiento de fondos que hubiese producido dentro y fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas.

Inciso 3- Convoca a elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas.

Inciso 4- Convoca a la Cámara de Diputados, a sesiones extraordinarias.

Inciso 5- Presenta el proyecto de ley de presupuesto y recursos, hace recaudar las rentas de la Provincia, decreta su inversión con arreglo a ley y publica trimestralmente el estado de tesorería.

Inciso 6- Nombra y remueve a los ministros y a todos los funcionarios de la Administración Pública para los cuales no se haya previsto otra forma de nombramiento o remoción, conforme a la ley que reglamente los mismos.

Inciso 7- Otorga jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales conforme a la ley.

Inciso 8. Concede indultos y conmuta penas, previo informe del Tribunal Superior, con excepción de las que recaigan con motivo de los delitos referidos en el Artículo 12 de esta Constitución

y de los cometidos por funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político.

Inciso 9- Ejerce el poder de policía.

Inciso 10- Propone los miembros del Tribunal Superior.

Inciso 11- Ejerce la fiscalización, control y tutela de los entes descentralizados, empresas del Estado o con participación estatal y sociedades o asociaciones con personería jurídica para asegurar el cumplimiento de los fines respectivos.

Artículo 124. MINISTROS: El despacho de los asuntos de la función ejecutiva, estará a cargo de ministros, cuyo número, funciones y departamentos determinará la ley.

Artículo 125. CONDICIONES. Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado y no ser cónyuge del Gobernador ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Rigen además iguales incompatibilidades.

Artículo 126. COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES. Los Ministros refrendan y legalizan con su firma las resoluciones del Gobernador sin la cual no tendrán efecto. Son solidariamente responsables. Sólo podrán resolver por sí mismo en lo referente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámites.

Artículo 127. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. El Gobernador podrá delegar en entidades descentralizadas con personalidad jurídica parte de sus funciones administrativas a los fines de la prestación de un servicio público determinado.

Las entidades descentralizadas estarán siempre bajo el con-

trol directo del-Gobernador por intermedio del ministerio del -
área de su competencia. Deberá ser creada por ley, la que esta-
blecerá las normas generales de su organización y funcionamien-
to.

C A P I T U L O V I I I

F U N C I O N J U D I C I A L

Artículo 128. FUNCIONES E INDEPENDENCIA. Sólo el Tribunal Super-
rior y demás jueces ejercen la función jurisdiccional; tienen a
su cargo la guarda de la soberanía del pueblo, la custodia de la
supremacía constitucional y la protección de los derechos y ga-
rantías.

El Tribunal Superior y demás jueces tendrán el imperio nece-
sario para mantener su inviolabilidad e independencia ante los
órganos que ejercen las otras funciones del Estado. En el ámbito
de sus atribuciones, su potestad es exclusiva, no pudiendo el -
Gobernador ni la Cámara de Diputados en ningún caso ejercer fun-
ciones judiciales, arrogarse el conocimiento de juicio pendiente
ni restablecer los que hubieren concluído.

Artículo 129. COMPOSICION. La función judicial será desempeñada
por un Tribunal Superior de Justicia, Cámaras, Jueces, Jueces de
Paz Letrados o Legos, miembros del Ministerio Público y demás tri-
bunales y funcionarios que establezca la ley.

Los miembros del Tribunal Superior prestarán juramento ante
el Gobernador.

En la Provincia se aplicará el sistema oral en toda clase de
procesos judiciales.

Se promoverá la instalación del juicio por jurado en la medida y oportunidad que la ley establezca.

Artículo 130. INAMOVILIDAD E INMUNIDADES. Los magistrados y miembros del Ministerio Público, gozarán de las mismas inmunidades que los diputados. Sus retribuciones serán establecidas por ley y no podrán ser disminuídas con descuentos que no sean los que dispusieren con fines de previsión o con carácter general. La inamovilidad comprende el grado y la sede no pudiendo ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causas previstas por esta Constitución.

Los miembros del Tribunal Superior y el Procurador General, serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 131. COMPETENCIA. Son de competencia del Tribunal Superior y de los tribunales inferiores todas las causas que versen sobre puntos regidos por las Constituciones, leyes nacionales y provinciales y ordenanzas municipales según que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción de la Provincia. Quedan excluídas de su conocimiento las causas atribuídas por esta Constitución al tribunal de juicio político.

Artículo 132. APLICACION DEL DERECHO. El juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional siendo el control de constitucionalidad una cuestión de derecho. El juez, a pedido de parte o de oficio debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica.

El juez aplicará el derecho con prescindencia o en contra de

la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina legal con un criterio jurídico de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.

Artículo 133. PERDIDA DE LA COMPETENCIA. La ley deberá establecer los plazos para que los jueces dicten sentencia; vencidos los mismos y previo pedido de pronto despacho, perderán la competencia de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna si no dictaren sentencia en el término que fije la ley. La competencia en estos casos deberá ser ejercida por el subrogante legal que corresponda.

Los jueces que por tercera vez en el año pierdan el ejercicio de la competencia quedan sometidos a juicio político, lo que de por sí no constituye una sanción, sino sólo un instrumento para determinar si hubo descuido del deber o inconducta en el desempeño del cargo y se lo establece como medio para proteger los derechos del pueblo.

Artículo 134. POLICIA JUDICIAL. Los jueces disponen de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones. El Tribunal Superior organiza la Policía Judicial de acuerdo a ésta - Constitución y a la ley; esta policía es de su exclusiva dependencia.

Artículo 135. REQUISITOS. Para ser juez del Tribunal Superior y Procurador General se requiere título de abogado, diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.

— Para ser Juez de Cámara y Fiscal de Cámara se requiere títu-

lo de abogado, cinco años de ejercicio profesional o funciones judiciales y treinta años de edad.

Para los demás jueces letrados y miembros del Ministerio Público, se requiere título de abogado, dos años de ejercicio profesional o funciones judiciales y veinticinco años de edad. Para ser Juez de Paz Lego se requiere mayoría de edad y título secundario.

En todos los casos se requiere ser argentino con dos años de residencia previa a su designación en la Provincia.

Artículo 136. DESIGNACIONES. Los miembros del Tribunal Superior y Fiscal General serán designados por la cámara de Diputados a propuesta del Gobernador. Los restantes magistrados o miembros del Ministerio Público, por la Cámara de Diputados previo concurso abierto. Una ley especial fijará el procedimiento respectivo.

El Juez de Paz Lego será designado por el Tribunal Superior a propuesta de la municipalidad respectiva.

Artículo 137. TRIBUNAL SUPERIOR. El Tribunal Superior estará integrado por cinco miembros como mínimo pudiendo la ley aumentar su número, en cuyo caso se dividirá en salas.

La presidencia del cuerpo será desempeñada anualmente por turno por cada uno de sus miembros, elegida por simple mayoría.

Artículo 138. MINISTERIO PUBLICO. El Ministerio Público estará integrado y desempeñado por el Procurador General, Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales, Asesores y Defensores oficiales.

La Ley Orgánica determinará el número, jerarquía, funciones

y forma de actuar de cada uno. El Procurador General ejercerá superintendencia sobre los demás miembros que componen el Ministerio Público.

Artículo 139. INCOMPATIBILIDADES. Sin perjuicio de las demás incompatibilidades que surjan de esta Constitución y de la naturaleza de la función judicial, a los magistrados y miembros del Ministerio Público les está prohibido participar en organizaciones o actividades políticas, ejercer su profesión, exceptuándose los casos en que actúen por derecho propio, desempeñar empleos, funciones u otras actividades dentro y fuera de la Provincia con excepción de la docencia o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad.

Artículo 140. ATRIBUCIONES Y DEBERES. El Tribunal Superior tiene las siguientes atribuciones y deberes:

- 1.- Representa a los órganos que desempeñan la función judicial y ejerce la superintendencia sobre la administración de justicia.
- 2.- Nombra a los empleados y funcionarios de la administración de justicia no pudiendo removerlos sin sumario previo.
- 3.- Ejerce jurisdicción en el régimen interno de las cárceles.
- 4.- Dicta el reglamento interno.
- 5.- Remite semestralmente a la Cámara de Diputados y al Gobernador, una memoria del estado y necesidades de la administración de justicia, debiendo incluir un detalle de las sentencias de cada tribunal, recusaciones e inhibiciones de cada juez.
- 6.- Puede enviar a la Cámara de Diputados, con carácter de ini-

ciativa, proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento de la administración de justicia, de la Policía Judicial y creación de servicios conexos, como asimismo los códigos, leyes de procedimientos judiciales y sus modificaciones. En estos casos, el Presidente del Tribunal Superior o un miembro que éste designe, podrá concurrir a las comisiones legislativas o a la sesión de la cámara para fundar el proyecto o aportar datos e informes.

7.- Anualmente propondrá al Gobernador el presupuesto de gastos de la administración de justicia.

Artículo 141. COMPETENCIA. El Tribunal Superior ejerce competencia originaria y exclusiva:

1.- En las demandas que se promuevan directamente por vía de acción por inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos;

2.- En los conflictos de competencia entre los órganos del estado provincial, entre éstos y las municipalidades o de las municipalidades entre sí y los que se susciten entre las Cámaras o jueces o entre uno de éstos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de sus respectivas jurisdicciones.

3.- En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso. Ejerce jurisdicción recurrida como Tribunal de Casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley, conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que de-

termine la ley.

Artículo 142. COMPETENCIA DE TRIBUNALES INFERIORES: La ley orgánica de los tribunales determina la competencia, jurisdicción y funcionamiento de los tribunales, juzgados y demás organismos de la función judicial.

Artículo 143. JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA: La interpretación que efectúe el Tribunal Superior en sus pronunciamientos sobre el texto de esta Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. La ley establecerá la forma y el procedimiento para obtener la revisión de la jurisprudencia.

C A P I T U L O I X

O R G A N O S D E F I S C A L I Z A C I O N y

A S E S O R A M I E N T O

DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 144. FUNCIONES. Créase en jurisdicción de la Cámara de Diputados la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental será proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, sin recibir instrucciones de autoridad alguna, frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno, de sus funciones. Las actuaciones serán gratuitas para el administrado. La ley establecerá su forma de designación, requisitos,

funciones, competencias, organización, duración, remoción y procedimientos de actuación.

FISCAL DEL ESTADO

Artículo 145. FUNCIONES. El Fiscal del Estado es el encargado de la defensa judicial de los intereses públicos y privados de la Provincia y del patrimonio fiscal. Tendrá personería para demandar la nulidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, contratos o resoluciones en el solo interés de la ley o en defensa de los intereses fiscales de la Provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. La ley reglamentará sus funciones.

Artículo 146. NOMBRAMIENTO. Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. Será designado por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados por un término de cuatro años y podrá ser reelegido. En ese período será inamovible y sólo podrá ser removido por las causas y el procedimiento establecido para el juicio político.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 147. INTEGRACION. El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia estará integrado por un Presidente, un Vice Presidente y tres Vocales, los que durarán en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegidos. Durante ese término sólo podrán ser removidos por las causas y el procedimiento establecido para el tribunal de juicio político.

Para ser designado miembro del Tribunal de Cuentas se requiere ser abogado o contador público y reunir las condiciones para ser diputado . Tres serán abogados y dos contadores.

Artículo 148. DESIGNACION. El Presidente, el Vice Presidente y uno de los vocales serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del bloque mayoritario. Los dos vocales restantes, a propuesta de cada bloque de los partidos que hubieren obtenido representación en ese cuerpo, en orden sucesivo al bloque mayoritario. En caso de existir una sola minoría, esta propondrá a ambos.

Artículo 149. ATRIBUCIONES. El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones : controlar la legitimidad en la percepción e inversión de caudales efectuadas por los funcionarios y empleados públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada y municipales, empresas públicas o con participación estatal e instituciones privadas que administren fondos del Estado, los que estarán obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación; inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos e instituciones en que el Estado tenga intereses y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.

Artículo 150. FALLOS. Los fallos que emita el Tribunal harán cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo susceptibles de los recursos que

la ley establezca, por ante el Tribunal Superior. Si en el curso del trámite administrativo surgiere la posible comisión de un hecho delictivo, se remitirán las actuaciones respectivas al juez competente.

Artículo 151. LEY ORGANICA. La Cámara de Diputados dictará la Ley Orgánica que reglamentará las funciones del Tribunal de - Cuentas.

Cuando, en las cartas orgánicas municipales se creare el Tribunal de Cuentas, no se aplicarán las disposiciones de este título.

ASESOR GENERAL DE GOBIERNO.

Artículo 152. FUNCIONES Y REQUISITOS. El Asesor General de Gobierno tendrá las funciones de asesorar al Gobernador y reparticiones de la Administración Pública con excepción de las entidades descentralizadas y presidirá el cuerpo de abogados del Estado.

Para ser Asesor General de Gobierno se requieren las mismas condiciones que para Fiscal de Estado. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Artículo 153. FUNCIONES. En la jurisdicción ejecutiva funcionará el Consejo Económico y Social como órgano consultivo, con la finalidad de asegurar la participación de los sectores representativos de las áreas económico-sociales de la comunidad.

Tendrá a su cargo responder a las consultas que le formule el Gobernador respecto a medidas, actos, planes o programas que

se considere de trascendencia para la Provincia. La ley determinará la forma de constitución y funcionamiento del Consejo Económico y Social.

C A P I T U L O X

F U N C I O N M U N I C I P A L

Artículo 154. AUTONOMIA. Los Municipios tienen autonomía institucional, política y administrativa. Las funciones que esta Constitución les reconoce no podrán ser limitadas por ley ni autoridad alguna. Deberán dictar su propia carta orgánica a cuyos fines - convocarán a una Convención Municipal, la que estará integrada por un número igual al de los miembros del Concejo Deliberante y serán elegidos directamente por el pueblo del departamento.

Para ser elegido convencional se necesitan las mismas condiciones que para ser concejal.

Artículo 155. ORGANIZACION. El Gobierno Municipal se compone de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, pudiendo crear la carta orgánica la justicia de faltas y el órgano de fiscalización de cuentas.

El Departamento Deliberativo será desempeñado por un cuerpo que se denominará Concejo Deliberante y estará compuesto por un número que no exceda de dieciocho y no sea inferior a siete, debiendo garantizarse en su integración la representación del interior del departamento.

Artículo 156. CONDICIONES Y MANDATO. Los Intendentes y Concejales serán elegidos directamente por el pueblo del municipio y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Para ser intendente o concejal se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial.

Artículo 157. ATRIBUCIONES. La Carta Orgánica establecerá la estructura funcional del municipio, conforme a los requerimientos del departamento, contemplando los aspectos de educación, salud pública, gobierno y cultura, hacienda, obras y servicios públicos, acción social y fiscalía municipal.

Artículo 158. RECURSOS. Cada municipio provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro municipal formado por el producido de la actividad económica que realice y los servicios que preste; con la participación y en la forma que los municipios convengan con la Provincia, del producido de los impuestos que el Gobierno Provincial o Federal recaude en su jurisdicción; por la venta o locación de bienes del dominio municipal; por los recursos provenientes de empréstitos y otras operaciones de crédito que realice, por los subsidios que le acuerda el Gobierno Provincial o Federal y por los demás ingresos provenientes de otras fuentes de recursos.

Artículo 159. INTERVENCION. Los municipios podrán ser intervenidos por ley aprobada con dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:

- 1.- Cuando existiere acefalía, para asegurar la constitución de sus autoridades;
- 2.- Cuando no cumplieren con los servicios de empréstitos o si de dos ejercicios sucesivos resultare déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera;

3.- Para normalizar la situación institucional;

4.- Cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica Municipal.

La intervención se dispondrá por el término que fije la ley, debiendo el interventor atender exclusivamente los servicios ordinarios.

C A P I T U L O X I

P O D E R C O N S T I T U Y E N T E

Artículo 160. CONVENCION CONSTITUYENTE. El poder constituyente será ejercido por una Convención integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados y será el órgano competente para reformar esta Constitución en forma parcial o total.

Los convencionales constituyentes deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputado provincial y tendrán las mismas inmunidades y privilegios que éstos, desde su elección hasta que concluyan sus funciones, teniendo las mismas incompatibilidades.

Artículo 161. DECLARACION DE LA REFORMA. La necesidad de la reforma parcial o total de la Constitución deberá ser declarada - por ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Sancionada la ley y comunicada al Gobernador, éste no podrá vetarla y deberá convocar a elecciones para elegir los convencionales constituyentes de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley.

La Convención no podrá incluir en la reforma otros puntos que los expresados en la ley de convocatoria, pero no está obli-

gada a modificar, suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe la necesidad o conveniencia de la reforma.

La Convención, en su primera sesión, fijará el término que estime necesario para desempeñar su cometido, el que no podrá exceder de un año desde la fecha de su constitución.

La Convención sancionará, promulgará y publicará sus decisiones, que deben ser observadas como la expresión de la voluntad popular.

Artículo 162: ENMIENDA. La enmienda de un solo artículo podrá ser sancionado por el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, pero sólo quedará incorporada al texto constitucional, si fuere ratificada por consulta popular que - tendrá lugar en oportunidad de la primera elección que se realice.

Esta enmienda no podrá llevarse a cabo sino con intervalo de dos años.

D I S P O S I C I O N E S

T R A N S I T O R I A S

- 1.- Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
- 2.- El Gobernador y el Vice Gobernador cumplirán el mandato para el que fueron elegidos.
- 3.- Los Jueces del Tribunal Superior y Procurador General concluirán sus funciones conjuntamente con el Gobernador y Vice Goberna-

dor y Vice Gobernador en ejercicio.

4.- La ley reglamentará la función municipal hasta tanto cada Convención Municipal dicte su respectiva Carta Orgánica.

5.- La convocatoria electoral determinará la forma de renovación de la Cámara de Diputados para el próximo período.

6.- Hasta que se dicten las distintas leyes orgánicas reglamentarias a que se hace referencia en esta Constitución u otras que se consideren necesarias, se aplicarán las leyes en vigencia en todo aquello que sea compatible con la Constitución.

7.- Sancionada la Constitución los Diputados Constituyentes prestarán juramento de cumplir sus disposiciones . El Gobernador, Vice-Gobernador, Presidente del Tribunal Superior, Intendentes Municipales y Presidentes de Comisiones Municipales, lo harán ante la Convención Constituyente una vez que entre en vigencia.

Los diputados lo harán ante el Presidente de la Cámara de Diputados y los Jueces y miembros del Ministerio Público ante el Presidente del Tribunal Superior y los demás funcionarios en la forma que se establezca en cada área.

8.- Los funcionarios públicos, partidos políticos y organizaciones sociales son responsables de la difusión de los derechos fundamentales, de las instituciones republicanas y de los principios democráticos que consagra esta Constitución.

9.- La Convención Constituyente en cumplimiento del mandato popular que ha recibido, realizará todas las tareas inherentes al mismo y en particular las siguientes:

a) Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la -

Constitución Provincial; b) Ordenar y controlar la publicación de la nueva Carta en el Boletín Oficial; c) Confeccionar las notas, antecedentes y correlaciones; d) Presentar el texto constitucional al Poder Constituído y al Pueblo de la Provincia.

A tales fines y demás funciones que correspondan para cumplir con el mandato popular, esta Convención continuará en funciones hasta el día 30 de setiembre del corriente año como máximo.

DISPOSICION FINAL

Téngase por Ley Fundamental de la Provincia de La Rioja, regístrese , publíquese y comuníquese al Poder Constituído a los efectos de su cumplimiento.